

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA

Disertación previa a la obtención del título de Economista

***Sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con
enfoque de derechos***

Mauricio David Guarderas Rivera
negroguarderas@hotmail.com

Director: Dr. Rodrigo Jiménez
rmjimenez@puce.edu.ec

Quito, octubre de 2011

Resumen

A través de un análisis de la evolución de las teorías del desarrollo, comenzando con las nociones de crecimiento económico visto como acumulación de riqueza; desarrollo económico, como el proceso de crecimiento acompañado de mejoras en las condiciones de vida de la población; desarrollo humano, como el proceso de expansión de las capacidades de las personas; y, finalmente, el enfoque de derechos que integra los estándares y principios de derechos humanos, se sustenta la construcción de una batería de indicadores que permiten realizar mediciones alternativas del trabajo en el Ecuador. El sistema se estructura a través de una metodología consistente, desarrollada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incorpora el enfoque de derechos en la concepción misma de sus indicadores. Son indicadores con rostro e identidad propia, suficientemente desagregados para abordar problemas de discriminación y condiciones de dignidad en el trabajo, que muestran realidades no exploradas en el Ecuador y que se convierten en un instrumento necesario para la generación de políticas públicas focalizadas. De esta manera, el proceso de desarrollo se orienta a alcanzar los compromisos establecidos en las normas y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado y en la Constitución de la República. En este sentido, el enfoque de derechos abre una nueva ventana en el análisis del desarrollo e introduce los mecanismos adecuados para medir sus resultados, toda vez que los derechos humanos constituyen una obligación jurídica para los Estados.

Palabras clave: Enfoque de derechos, discriminación, vulnerabilidad, sistema de indicadores, derecho al trabajo.

*A todas las mujeres y hombres que no se conforman con ver
la realidad que se despliega cruel e injusta ante sus ojos,
que creen en la capacidad infinita para transformarla
con el poder de una racionalidad revolucionaria.*

Con inconmensurable gratitud al Amor

en sus distintas manifestaciones.

A mi esposa y compañera,

a Mamá y Papá.

Sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos

Introducción	6
Metodología de trabajo	8
Fundamentación Teórica	10
Crecimiento económico	11
Desarrollo económico	18
Desarrollo humano	33
Enfoque de derechos	36
Capítulo I	
Uso de indicadores para promover y monitorear la implementación de los derechos humanos	40
Capítulo II	
Adaptación de los indicadores propuestos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos al contexto ecuatoriano	51
Capítulo III	
Presentación de resultados del sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos	68
Conclusiones	106
Recomendaciones	111
Referencias bibliográficas	112
Anexos	114

Introducción

Desde el enfoque teórico

La economía del desarrollo ha sufrido un proceso de evolución arduo y enriquecedor, pasando de nociones vinculadas únicamente al crecimiento económico, la modernización de las economías y los modelos de acumulación de capital, a considerar aspectos más complejos de las relaciones sociales.

Desde la teoría del desarrollo humano se abordan con más énfasis los problemas vinculados con la pobreza, el empleo digno y la distribución de la riqueza, surgen los conceptos de *necesidades básicas* y desde los trabajos de Amartya Sen¹, se cuestiona inclusive la racionalidad del *homo economicus*.

Dicha teoría comprende un complejo diseño de postulados, estrategias y conocimientos, enfocados en alcanzar el mayor nivel de desarrollo de las y los individuos de una sociedad, no solo dentro de la esfera económica, sino también considerando sus capacidades individuales, satisfacción de necesidades sociales y pleno goce de libertades.

Sin embargo, desde el ámbito correspondiente a las acciones de política pública por parte de los estados para lograr desarrollo humano, quedan sendos vacíos sobre *cuándo* y *cómo* se alcanza dicho desarrollo. **Es precisamente aquí en donde se justifica la investigación, en la necesidad de aportar, desde el enfoque de derechos humanos, principios básicos que deben ser considerados y alcanzados por los estados para materializar en la vida de sus sociedades, el desarrollo humano,** que será evidenciado en el pleno goce de derechos de sus habitantes.

Adicionalmente, la justificación para incorporar el enfoque de derechos humanos, se basa en que gran parte de los estados del mundo, han ratificado los compromisos internacionales que los obligan a garantizar, proteger y fomentar el pleno goce de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.

Desde el sistema de indicadores para medir el derecho al trabajo

Una vez planteado que el principal aporte del enfoque de derechos humanos, consiste en establecer estándares y acuerdos mínimos que permitan plasmar las nociones y principios de la teoría del desarrollo humano en objetivos concretos de política pública, es necesario generar una herramienta de información que facilite la aplicación de dicha política. Este es precisamente el objetivo general de la disertación, construir un sistema de indicadores que permita medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos.

A manera de objetivos específicos, se busca estructurar dicho sistema en base a una metodología sólida, elaborada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y adaptada a la realidad ecuatoriana por el autor de esta disertación. Otro objetivo específico, permite calcular los valores para cada indicador y realizar un análisis de pertinencia y validez de los mismos.

¹ En obras como *Desarrollo y libertad* (2000) y *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI* (2001), Sen expone fuertes críticas a los modelos económicos tradicionales y plantea la posibilidad de nuevas aproximaciones al desarrollo.

Haciendo referencia a la pregunta general de la disertación, sobre si el enfoque de derechos es un mecanismo adecuado para medir el trabajo en el Ecuador, la investigación resuelve que en medio de la coyuntura actual y con un marco constitucional que eleva al trabajo a la categoría de *derecho*, solo un sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos, permitirá la correcta y eficaz formulación de políticas públicas que apunten a garantizar el pleno goce del derecho al trabajo en el Ecuador. Lo anterior, en cumplimiento con los mandatos constitucionales y los tratados internacionales ratificados por el Estado.

La metodología utilizada comprende la consulta bibliográfica de un gran número de fuentes, para caracterizar adecuadamente la evolución de las teorías del desarrollo. Adicionalmente, se realizaron entrevistas y trabajo con expertos en materia de derechos humanos para comprender los alcances del enfoque de derechos. El procesamiento de fuentes secundarias, sobre todo de la encuesta de empleo y subempleo realizada por el INEC, permitió calcular los valores cuantitativos de los indicadores.

La disertación presenta una estructura simple, que permite a través de la fundamentación teórica, justificar, sustentar y vincular el enfoque de derechos humanos con la teoría económica. Dicho vínculo se presenta a través de una exploración de carácter histórica, de las principales teorías del desarrollo. Posteriormente, a través de un marco metodológico sólido, se respalda el uso de indicadores para promover y monitorear la implementación de los derechos humanos. Luego, se realiza la adaptación de la metodología propuesta por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la realidad y contexto ecuatoriano, procurando indicadores que sean posibles de calcular en base a la información disponible y que sean altamente significativos para explicar la realidad del trabajo en el Ecuador. Finalmente, se realiza la presentación de los valores para los indicadores seleccionados y se plantean las conclusiones y recomendaciones encontradas.

Metodología del trabajo

Para la construcción de un sistema de indicadores que permita medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, se procedió a establecer el sustento teórico que hace posible vincular dicho enfoque con las teorías del desarrollo y su evolución a lo largo de la economía. La exploración, bajo una perspectiva de evolución histórica, involucró la revisión exhaustiva de documentos, textos y publicaciones que hacen referencia a los orígenes mismos de la teoría del desarrollo, iniciando con las nociones de crecimiento económico de la teoría clásica, la innovación schumpeteriana y el modelo de crecimiento dinámico de Harrod-Domar.

Posteriormente, se consideró el concepto de desarrollo económico a la luz de la clasificación realizada por Amartya Sen², quien agrupa las teorías del desarrollo en dos categorías principales: teorías duras del desarrollo y teorías amables del desarrollo.

A continuación, se procedió a abordar el enfoque de derechos como un marco conceptual para el desarrollo, que desde el punto de vista normativo, integra los estándares y principios de derechos humanos y que operacionalmente está orientado a la promoción y protección de dichos derechos. En este sentido, la persona como sujeto de derechos se convierte en el centro del proceso de desarrollo.

Una vez sentadas las bases y la vinculación del enfoque de derechos con las teorías del desarrollo, se consideró la metodología diseñada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)³, con el fin construir un sistema que involucre el mencionado enfoque en la concepción de indicadores adecuados para medir el derecho al trabajo. El objetivo para seleccionar este marco conceptual y metodológico, fue adoptar un método estructurado y coherente para traducir las normas universales de derechos humanos en indicadores pertinentes en distintos contextos y útiles en el plano nacional. Adicionalmente, dado que la metodología del ACNUDH establece una lista de indicadores ilustrativos para el tratamiento de doce derechos diferentes, entre civiles, políticos, económicos y sociales, se procedió a justificar la selección del derecho al trabajo, para el cual se elaboró el sistema de indicadores. Los criterios de selección fueron:

a) Disponibilidad de información

Se analizaron las distintas fuentes de información disponible para la construcción de los indicadores, clasificándolas en cuatro categorías, de acuerdo al número y calidad de las fuentes: muy buena (disponibilidad de información), buena, regular y mala. En este sentido, dada la periodicidad, amplitud y confiabilidad de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se optó por el derecho al trabajo.

² Sen, Amartya. *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI*. Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. En www.iadb.org. (Acceso: 13 de mayo de 2011).

³ La metodología del ACNUDH para promover y vigilar el ejercicio de derechos humanos será ampliamente desarrollada en el capítulo específico correspondiente a la construcción del sistema de indicadores.

b) Impacto político de realizar el monitoreo del derecho

Considerando la coyuntura actual y la utilidad de los indicadores a elaborarse, se estableció que el derecho al trabajo constituye un tema de debate nacional, que se enriquecería de manera considerable, al contar con mediciones alternativas bajo el enfoque de derechos.

c) Vulnerabilidad de las y los sujetos del derecho

A criterio del autor de esta disertación, el empleo constituye uno de los aspectos transversales en la posibilidad de los individuos de desarrollarse integralmente. Por tanto, la ausencia de espacios de incluyentes y dignos para que las personas lleven a cabo sus actividades laborales, constituye un elemento determinante en su nivel de bienestar. En este sentido, la necesidad de contar con mediciones que permitan visualizar situaciones de vulnerabilidad e inequidad en el trabajo, es fundamental.

Habiendo establecido el derecho al trabajo como la variable para la cual se construiría el sistema de indicadores, fue necesario adaptar la propuesta de indicadores del ACNUDH a la realidad ecuatoriana. Los resultados de dicha adaptación permitieron establecer indicadores posibles de calcular en función de la información disponible y que fueran altamente significativos.

Una vez definido el mapa de indicadores, se inició con el proceso de recopilación de datos en las distintas fuentes identificadas para la selección del derecho. Los datos se procesaron de acuerdo al marco metodológico del ACNUDH y se construyeron las matrices de indicadores con el mayor nivel de desagregación posible, que incluye sexo, edad, nivel de instrucción y etnicidad.

Finalmente, luego del análisis de las matrices expuestas, se procedió a interpretar los indicadores a la luz del enfoque de derechos humanos, extrayéndose las conclusiones y aportes de esta nueva medición del trabajo en el Ecuador.

Fundamentación teórica

A continuación se presentan los fundamentos teóricos que servirán de columna vertebral para la construcción de un sistema de indicadores que permita medir el derecho al trabajo en el Ecuador.

Cabe mencionar que estas reflexiones buscan ilustrar la evolución de los paradigmas del desarrollo a lo largo de la historia de la economía, iniciando con la noción de crecimiento económico per se, hasta llegar a la teoría del desarrollo humano y, finalmente, describir el *enfoque de derechos humanos*, como tema central y aporte de la disertación de grado.

Del crecimiento al desarrollo y al enfoque de derechos humanos

Shumpeter (1976: 96-134) fue uno de los primeros economistas en diferenciar las nociones de crecimiento y desarrollo. En 1912, define crecimiento como un incremento en la riqueza de las naciones; mientras que por desarrollo entiende la evolución de una serie de factores sociales, políticos, culturales y psicológicos de la población, fruto del adecuado aprovechamiento de los recursos de una economía, sobretodo en innovación tecnológica.

Tradicionalmente, el crecimiento se define como la expansión continua a lo largo del tiempo de la actividad económica. La medida habitual del crecimiento ha sido la producción a precios de mercado y se han examinado las variables que permiten a unas naciones crecer rápidamente, a otras lentamente y a otras nada.

Por otra parte, el concepto de desarrollo ha significado no solo el crecimiento de la economía per se, si no aquel que se acompaña de transformaciones sociales, desarrollo de capacidades y aumentos en la calidad de vida de las y los ciudadanos, con la consecuente mejora en la distribución de la riqueza y de la renta.

A medida que la noción de desarrollo ha ido evolucionando más allá de los aspectos escitamente económicos, los indicadores que permiten medir este desarrollo también lo han hecho. Distintas instancias e instituciones han trabajado, por ejemplo, en medidas de pobreza, redistribución del ingreso, satisfacción de necesidades básicas, para ya en los años noventa, llegar al concepto de desarrollo humano con su medida tradicional, el *índice de desarrollo humano*; posteriormente, se insertan medidas con enfoque de derechos, considerando aspectos de fomento, acceso y empleo digno, calidad de los servicios de salud, inclusión y capacidades en educación, etc.

El cuadro N° 1 resume el esquema de exploración teórico que seguirá la disertación:

Cuadro N° 1
ESQUEMA DE EXPLORACIÓN TEÓRICA

NOCIÓN/PARADIGMA	DEFINICIÓN/PRINCIPIOS	ÍNDICE CARACTERÍSTICO
CRECIMIENTO ECONÓMICO	Incremento de la producción de bienes y servicios de una sociedad	PIB
DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso por el que una sociedad moderniza su organización económica, permitiendo un crecimiento continuo y alcanzado mejoras en la calidad de vida de las y los habitantes, dependiendo de la efectividad en la distribución de la riqueza	PIB <i>per cápita</i>
DESARROLLO HUMANO (SEN)	Proceso de expansión de las capacidades de las personas para llevar a cabo el tipo de vida que deseen llevar	IDH (según la propuesta del PNUD)
ENFOQUE DE DERECHOS	Marco conceptual para el desarrollo, que, desde el punto de vista normativo, integra los estándares y principios de derechos humanos y que operacionalmente, está orientado a la promoción y protección de dichos derechos. Permite materializar e instrumentar el desarrollo humano.	Sistema de indicadores con enfoque de derechos

Fuente y elaboración: David Guarderas

Siguiendo el esquema de exploración planteado, se comienza por identificar los principales aportes que las teorías del crecimiento económico han realizado a la posterior economía del desarrollo. En este sentido, se resaltan tres teorías consideradas por el autor de esta disertación como las más influyentes. Estas teorías son: la teoría clásica, la teoría de la innovación schumpeteriana y el modelo de crecimiento dinámico de Harrod-Domar (1968).

1. Crecimiento económico

1.1 La teoría clásica

El pensamiento clásico de la economía teorizó sobre el crecimiento y, en cierta medida, sobre el desarrollo a largo plazo de las naciones. Concretamente se profundizará en las aportaciones realizadas por Smith, Malthus y Ricardo, la elaboración del concepto de estado estacionario y sobre todo la noción de acumulación como origen del proceso de desarrollo. Esta acumulación estará en la base de las primeras teorías del desarrollo económico, en la década de los cincuenta y sesenta, elaboradas por Lewis o Rostow y, en general, por los modelos que incorporan en su origen el proceso de acumulación de capital, como se expondrá en el desarrollo de la disertación.

Adicionalmente, como un clásico alternativo, se abordará brevemente las líneas básicas del pensamiento marxista en relación al tema de investigación, que serán ampliamente incorporadas a los modelos neomarxistas de desarrollo propios de los años sesenta y setenta.

1.1.1 Teorías clásicas del crecimiento económico en Smith, Malthus y Ricardo

En las obras de Adam Smith "*La riqueza de las Naciones*" (1776), Thomas Malthus "*Ensayo sobre el principio de población*" (1798) y de David Ricardo "*Principios de Economía Política*" (1817), se plantea un análisis riguroso del proceso de crecimiento económico, de los factores y condiciones que pueden favorecer su expansión y de los determinantes que, en el largo plazo, detendrán dicho proceso, conduciéndolo a un estado estacionario de crecimiento cero.

Desde la teoría del crecimiento de Smith⁴, se distinguen dos fases claramente identificadas. Una de crecimiento propiamente dicha, basada en incrementos en la productividad de las y los trabajadores debido a la acumulación de capital; y otra, en donde se transita el camino hacia el estancamiento o estado estacionario de largo plazo.

En la primera etapa, el incremento de la riqueza estaba determinado por aumentos en la productividad de las y los trabajadores, como consecuencia de la división del trabajo. Con la división del trabajo se alcanza un ahorro de tiempo, mayor especialización y mejora de la técnica y, por lo tanto, incrementos sustanciales en la eficiencia. Sin embargo, Smith considera también los aspectos y repercusiones negativas que la división del trabajo produciría en las dimensiones sociales y psicológicas de las y los individuos. Al respecto manifiesta:

Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en sus efectos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de varios expedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se presentan. Pierde así, naturalmente, el hábito de aquella potencia, y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. La torpeza de su entendimiento sólo le incapacita para terciar en una conversación y deleitarse con ella, sino para concebir pensamientos nobles y generosos, y formular un juicio sensato, respecto a las obligaciones de la vida privada. [...] Adquiere pues, la destreza de su oficio peculiar, a expensas de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales⁵.

La cita anterior presenta claros indicios de las limitaciones de la teoría clásica del crecimiento económico en términos de su preocupación por el bienestar integral de las y los individuos. Es decir, muy probablemente la división del trabajo sea un factor que potencializa la acumulación de riqueza, pero deteriora la calidad de vida de las y los trabajadores, e, indiscutiblemente, limita sus libertades y capacidades convirtiendo a hombres y mujeres, en instrumentos exclusivamente destinados al proceso productivo, en una bisagra adicional.

El aumento en la productividad individual produce incrementos en la producción total, cuyas rentas, al ser destinadas por la o el dueño del capital a la reinversión en el proceso de productivo mediante la contratación de mano de obra adicional, producen, a su vez mayores niveles de acumulación de riqueza. En todo esto, se presentan incentivos para el crecimiento poblacional que junto, a una

⁴ Smith, Adam, *La riqueza de las naciones: De las causas del progreso en las facultades productivas del trabajo, y del modo como un producto se distribuye naturalmente entre las diferentes clases del pueblo*. Fundación Universitaria Andaluza. En: <http://www.eumed.net/textos/06/asmith1-4.htm>. (Acceso: 11 abril de 2011)

⁵ Smith, Adam, *La riqueza de las naciones: Libro V, capítulo I, parte III, p.687*. Fundación Universitaria Andaluza. En: <http://www.eumed.net/textos/06/asmith1-4.htm>. (Acceso: 21 abril de 2011)

ampliación de los mercados y una mínima regulación del Estado, supondrían el aumento de la renta nacional (Bustelo Pablo, 1998: 58-81).

En la segunda etapa, el proceso de acumulación aumenta el monto total de salarios favoreciendo a las y los trabajadores pero no a las personas empresarias, que ven que sus tasas de beneficios disminuyen. Adicionalmente, el aumento del capital habría hecho aumentar la competencia, lo que disminuiría también la rentabilidad. Estos dos factores reducen la tasa natural de beneficio lo que hace que el proceso de acumulación se detenga, bajen los salarios y se reajuste el sistema a través de descensos en la población, haciendo que en el largo plazo, se llegue a un estado estacionario (Napoleoni Claudio, 1972: 33-45).

El papel otorgado al Estado consistiría en intervenciones mínimas en temas de justicia, defensa, orden público y la garantía de un libre comercio internacional. Sólo así, a través de la acumulación y de la división del trabajo, el crecimiento sería auto sostenido.

Para Malthus en *Ensayo sobre el principio de población* (1798), el crecimiento geométrico de la población frente al crecimiento aritmético de los alimentos, produciría una situación crítica de escasez. Sin alimentos, se produce una situación de miseria masiva lo que hace disminuir la población, y por lo tanto, la oferta laboral. Lo anterior, permitiría en el largo plazo, una recuperación de los salarios. Sin embargo, dicha recuperación reduciría la tasa de beneficios de la clase capitalista, lo cual reiniciaría el ciclo analizado por Smith. Como conclusión, a largo plazo el crecimiento es estacionario.

Finalmente, David Ricardo introduce la ley de rendimientos decrecientes de la tierra y la teoría de la distribución. Con la ley de rendimientos decrecientes de la tierra, se exponía que si la cantidad de la tierra era fija y, además, su rendimiento decreciente, el resultado es que la producción no puede aumentar al mismo ritmo que la población. Al tener cada vez menos tierras que trabajar y siendo éstas cada vez peores por su desgaste, cada trabajador o trabajadora, añade una cantidad menor al producto, lo que se traduce en una disminución de su salario. Al disminuir los salarios, disminuye la oferta de trabajo y la población, reiniciando el ciclo descrito anteriormente con el correspondiente resultado de estado estacionario (Mochón Francisco, 1987: 102-119). Sin embargo, las aportaciones de Ricardo son más importantes para el estudio del desarrollo por la teoría de la distribución. Ricardo definió a la economía política como aquella ciencia que se ocupa de la distribución del producto social entre las clases en las que la sociedad se halla dividida. Este aporte será analizado posteriormente con más detenimiento, cuando se consideren las teorías del desarrollo económico, como el segundo peldaño del esquema de exploración teórico de esta disertación.

Este es el desarrollo lógico de la economía para los clásicos, lo que llevó a Thomas Carlyle (1833:88) a definirla como la “ciencia lúgubre”, donde los seres humanos están confinados a una vida brutal, desagradable y breve, por cuanto un crecimiento cero a largo plazo no permitiría la posibilidad de mejoras en la calidad de vida de las personas.

Las principales críticas al modelo clásico de crecimiento/desarrollo van encaminadas a la ausencia de aquello capaz de romper con el estado estacionario: el ingenio y la tecnología. No se dieron cuenta

que con la intervención de la innovación tecnológica, se podía contrarrestar aquella ley de rendimientos decrecientes.

1.1.2 Marx, un clásico alternativo

Para concluir con el apartado de los clásicos, se consideran, de forma independiente, los aportes de Marx como el origen de una corriente de pensamiento basada en el materialismo histórico, la conflictividad, el desequilibrio del sistema y la injusticia de éste. Esta corriente es, especialmente, influyente en la economía del desarrollo y particularmente en teorías como el estructuralismo o la dependencia, e incluso en la propuesta del desarrollo humano de Amartya Sen a través de su filosofía política, en la cual se plantea la construcción de una sociedad en la que los individuos actúen bajo su propio dominio y control, es decir **libertad real**. Una libertad entendida como la oportunidad real que los seres humanos tienen para realizar lo que valoran.

En términos generales, Marx describe un proceso de acumulación originado en el aumento de la plusvalía. Ello solo es posible de tres formas: mediante un aumento en el horario de trabajo, una reducción del salario, o a través de una mejora tecnológica (Adelman Irma, 1974:22-34). Para innovar hace falta ahorrar parte de la plusvalía e invertirla, coincidiendo así con el proceso descrito por Smith y su correspondiente desenlace en el estado estacionario.

1.2 La teoría de la innovación schumpeteriana

Continuando con la exploración sobre la evolución histórica de las teorías del desarrollo, se puede decir que la escuela neoclásica presenta un paréntesis entre los planteamientos clásicos de acumulación como origen del proceso de desarrollo y la teoría de la innovación de Schumpeter. Se considera un paréntesis por cuanto los paradigmas neoclásicos están enfocados principalmente en nociones de corto plazo, formación de precios y equilibrios de mercado, dejando de lado los procesos de desarrollo. En este sentido, H.W Arndt (1987: 217) denomina a dicho paréntesis “el interludio neoclásico” y manifiesta: “Marshall escribió dos capítulos que Hicks considera realmente muy superficiales sobre el proceso económico, y Wicksell apenas uno sobre la acumulación de capital [...] Pero el centro de atención no está en esos aspectos. Y en Walras, Pareto y los austriacos hay incluso menos. Si había poco interés en el crecimiento, menos lo había en el subdesarrollo” (Arndt Heinz, 1987: 256).

Con este antecedente, se aborda directamente la teoría de la innovación de Schumpeter, que incorpora un factor decisivo en las teorías del crecimiento, como es la innovación tecnológica y la capacidad creativa, arriesgada y emprendedora de una clase empresarial, impulsora del desarrollo. Esta innovación tecnológica es algo a lo que los autores clásicos no supieron dar respuesta y es precisamente la solución ante el “estado estacionario”.

Al margen de la diferenciación realizada por Schumpeter entre crecimiento y desarrollo, expuesta a inicios de la fundamentación teórica de esta disertación, se profundizará en el papel que realiza el empresario innovador como motor del desarrollo (Schumpeter Joseph, 1976: 88-92).

A diferencia de los clásicos, Schumpeter no consideró que la acumulación de capital fuera el motor del desarrollo, sino principalmente la innovación y la creatividad de los nuevos empresarios para utilizar y combinar los recursos existentes. El crédito juega un papel importante en todo el proceso, por cuanto hace posible que la creatividad pueda concretarse en nuevos desarrollos e inventos.

Ahora, es necesario abordar la concepción de Schumpeter sobre el empresario, del cual destaca su actitud de generar conocimiento, nuevas aplicaciones y trascender en la escala social. Adicionalmente, plantea que lo que mueve al empresario, aparte del interés privado, es el “gozo creador de hacer las cosas, o simplemente de ejercitar la energía y el ingenio [...] Nuestro tipo de hombre busca dificultades con objeto de verse obligado a realizar alteraciones” (Schumpeter Joseph, 1976: 102).

Entonces, es entorno a una concepción de persona empresaria, hasta cierto punto altruista y generosa con la sociedad, que se articula un modelo de crecimiento basado en los saltos y descubrimientos producto de la innovación. Sin embargo, los grandes beneficios derivados de los hallazgos e invenciones, terminan reduciéndose cuando la competencia absorbe o copia dichas invenciones. Esto parecería presentar un problema grave para la teoría, llevándola al estancamiento estacionario no superado por la escuela clásica, pero en palabras de Samuelson, “vuelve a haber beneficios, como consecuencia constante de nuevos productos y mercados” (Samuelson y Nordhaus, 1996: 978). Por lo tanto, el proceso vuelve a repetirse, y, de hecho, la capacidad creadora del ser humano, puede extenderse sin límites garantizando una dinámica de crecimiento a largo plazo. No es sino hasta la década de los 90 en que se plantea un límite a dicho planteamiento de crecimiento infinito, al considerarse el agotamiento real de los recursos, la economía debe replantear sus paradigmas a la luz de la restricción ecológica.

Las principales críticas que se realizan a Schumpeter están enfocadas a los supuestos mismos que sostienen su teoría, que consisten en un estado organizado comercialmente, en el cual prevalezca la propiedad privada, la división del trabajo y la libre competencia. Estos supuestos se alejan indudablemente del mundo en desarrollo, caracterizado precisamente por rigideces estructurales que solo se podrían superar con un empujón inicial del estado, algo incompatible con el enfoque schumpeteriano.

Sin embargo, hay que reconocer la enorme importancia del progreso tecnológico para el crecimiento y el desarrollo, permitiendo no solo escapar de la trampa de los economistas clásicos, sino que además, los nuevos conocimientos técnicos “permiten ampliar las aplicaciones de los ya disponibles y están plasmados, en parte, en los nuevos bienes de capital y en las cualificaciones de la mano de obra” (Mochón Francisco, 1987: 611). Para Francisco Mochón:

La invención y la innovación tienen lugar sobre todo, en respuesta a la posibilidad de obtener beneficios. Las medidas destinadas a mejorar la tasa de crecimiento de la inversión en capital físico y al fomento del progreso técnico, concretadas fundamentalmente en un aumento del gasto en I + D, se llevan a cabo precisamente porque se reconoce el papel determinante que desempeña el progreso tecnológico en el crecimiento económico. (Mochón Francisco, 1987: 612)

Posteriormente, se verá cómo algunos autores consideran a Schumpeter como precursor de la teoría de crecimiento endógeno, incorporada a los modelos de capital humano, como factor indispensable en un proceso de crecimiento económico acorde con el desarrollo humano.

1.3 Modelo de crecimiento dinámico de Harrod-Domar

Como consecuencia de la aportación schumpeteriana, ya no se podrá negar la enorme importancia de la tecnología para aumentar la productividad y favorecer al crecimiento económico. Tras la revolución keynesiana, la inversión en tecnología, en I+D y en recursos de capital va a tener gran protagonismo en las teorías del crecimiento económico.

A pesar de que la teoría keynesiana no será abordada en términos específicos en esta disertación, por cuanto sus postulados y principios se encuentran contemplados en otras teorías del crecimiento, es necesario detenerse en un aspecto fundamental que constituye, a criterio del autor de esta disertación, el principal aporte de Keynes a la economía del desarrollo. Dicho aporte, en palabras de Hirschman (1984: 83) se presenta como:

Todas las escuelas posteriores de la economía del desarrollo, pese a que no pudieron aceptar el modelo concreto keynesiano [...] son el resultado de la decisiva afirmación de Keynes de que la teoría económica no es una doctrina de validez universal, como los economistas clásicos más o menos consideran, si no que hay diferentes leyes y principios económicos que hacen necesarias políticas económicas distintas para países en situaciones diferentes.

Esta afirmación de Hirschman constituye una bisagra importante para la posterior introducción de nuevos paradigmas en la ciencia económica, paradigmas que como se verá más adelante, trascienden de la noción de crecimiento y pretenden abarcar esferas más complejas de la realidad humana.

Se presenta ahora la teoría del crecimiento dinámico de Harrod-Domar (heredera de la revolución keynesiana), una de las más extendidas y que se ha ido incorporando a numerosas teorías del desarrollo económico. En el modelo se analizan los factores o razones que influyen en la velocidad del crecimiento, a saber, la tasa de crecimiento del trabajo, la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento del capital o tasa de ahorro e inversión y la productividad del capital.

En el modelo de Harrod-Domar⁶ se llama tasa natural de crecimiento al ritmo de crecimiento de la oferta de trabajo. Por oferta de trabajo se entiende aquí no solo el aumento del número de trabajadores, o de horas que están dispuestos a trabajar, sino también al aumento de su capacidad productiva y de su productividad. En otras palabras, es la tasa de crecimiento de la población activa más la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo.

Considerando al tiempo como una variable discreta, el modelo de Harrod-Domar acostumbra a formularse mediante las tres siguientes ecuaciones:

⁶ Barbancho Alfonso, (2009), *Apuntes de econometría*. Santiago: Atom. En: <http://blogdeeconometria.blogspot.com/2009/04/estimacion-modelo-de-crecimiento-de.html> (Acceso: 19/05 / 2011)

$$S_t = sY_t$$

$$I_t = v(Y_t - Y_{t-1})$$

$$S_t = I_t$$

En donde S representa el ahorro, I la inversión e Y la renta.

La primera ecuación es la función de ahorro y expresa el comportamiento de las personas que ahorran, suponiendo que la cantidad ahorrada es una parte proporcional de la renta. El coeficiente s expresa, por tanto, la propensión media y marginal al ahorro.

La segunda ecuación define el comportamiento del empresariado en cuanto a su actitud para invertir. Esta actitud supone que la inversión realizada en el período t es proporcional al incremento de la renta de dicho período con respecto a la del anterior.

Por último, la tercera ecuación es una de las conocidas relaciones contables.

El propio sistema permite obtener la siguiente relación:

$$((Y_t - Y_{t-1})/Y_t) = s/v$$

Dicha relación expresa que si la propensión marginal a ahorrar es mayor a la propensión marginal a invertir, la tasa de crecimiento del producto es mayor a uno y a la inversa. Si las dos propensiones son iguales, la tasa de crecimiento es uno.

Esta relación suele utilizarse para determinar la propensión al ahorro que se quiere con el fin de que la renta aumente a una tasa fijada de antemano; la determinación se hace fácilmente al suponer que el coeficiente de inversión permanece invariable. Es decir, el aporte del modelo es establecer que gracias al ahorro se puede producir un crecimiento constante y duradero.

Por otra parte, la ecuación anterior, ordenada convenientemente, da lugar a una ecuación en diferencias de primer orden con coeficientes constantes cuya solución es:

$$Y_t = k(v/(v-s))^t$$

La cual da la trayectoria temporal de la renta en función de los coeficientes de ahorro y de inversión. Se ve claramente que Y_t es monótona y explosiva cuando $v > s$. **Cuando $v = s$, el crecimiento del producto está dado por la propensión marginal a invertir.**

A manera de conclusión sobre el aporte establecido por el modelo Harrod-Domar, se puede decir que al ser la inversión la clave del modelo, se le otorga un lugar prioritario al ahorro dentro de esta teoría del crecimiento económico. Esto se relaciona directamente con la teoría del desarrollo denominada de la acumulación o de la modernización. Dada la función de crecimiento económico expuesta, hace falta un periodo previo de acumulación de factores (ahorro) que posteriormente “exploten” generando crecimiento y desarrollo. Harrod y Domar formalizaron económicamente esta teoría, en un modelo en donde la inversión alimentada por el ahorro, genera crecimiento y renta, y además se retroalimenta a sí misma (Hidalgo Luis, 1998: 25-43).

Sin embargo, la aplicación del modelo en los países más pobres presenta serios inconvenientes, por cuanto sería necesario un plan de inversiones basado en el ahorro interno, del cual dichos países carecen. Por lo tanto, para romper el círculo vicioso de la pobreza, se necesita inversión extranjera o financiada con ahorro externo, con lo cual se está justificando el endeudamiento y la ayuda al desarrollo. Dichos aspectos, constituyen precisamente, el objeto de la crítica de varios autores, al considerar que en términos generales, el endeudamiento genera una dependencia irreversible, en detrimento de la calidad de vida de las y los individuos.

Adicionalmente, tal como lo recoge Francisco Mochón (1994: 18), estas teorías del crecimiento, lo que hacen es justificar el sacrificio presente por beneficios futuros (para poder invertir mañana, debo ahorrar hoy), y eso es precisamente algo que no pueden permitirse los más desfavorecidos de la sociedad, aunque sea solamente de manera temporal. Esto es lo que, como se verá más adelante, lleva a Amartya Sen a calificar este tipo de teorías como de “sangre, sudor y lágrimas” (Sen, 1998:3).

Para finalizar el tratamiento del primer peldaño del esquema de exploración teórico, vale la pena resaltar la razón fundamental por la cual se consideró a las teorías del crecimiento económico, como las precursoras del desarrollo. La razón es simple, en el momento en que fueron esbozadas, el desarrollo como tal estaba caracterizado por el crecimiento y la industrialización. Una afirmación que hoy en día, resulta demasiado simple, dada la complejidad de los problemas sociales, pobreza y desigualdad que enfrentan las regiones menos favorecidas del planeta. Sin embargo, a medida que se continúe avanzando en la fundamentación teórica de esta disertación, el paradigma del desarrollo se irá enriqueciendo y ampliando para brindar mejores respuestas a la difícil condición del “subdesarrollo”⁷.

2. Desarrollo económico

En este apartado se tratará un peldaño más en la evolución del concepto de desarrollo, el cual involucra, más allá del crecimiento del PIB, una transformación social de los distintos sectores económicos, incluso teniendo en cuenta medidas de transformación política. Sin embargo, el objetivo se mantiene en aumentar la producción, a partir de lo cual, la distribución del beneficio y el desarrollo para la sociedad se daría por sí solo. Lo anterior, utiliza como medida representativa el *PIB per cápita*⁸.

A partir de los años cuarenta y cincuenta, a medida que la información y los métodos de análisis estadístico experimentan adelantos importantes, y al contemplarse las enormes desigualdades entre distintas regiones del mundo y dentro de los propios países, aún con altas tasas de crecimiento económico, el debate sobre el desarrollo/subdesarrollo pasa a primera línea.

⁷ Las comillas son del autor de la disertación con el fin de denotar que la categoría subdesarrollo, no es completamente aceptada en sus dimensiones tradicionalmente utilizadas. Por el término, el autor expresa la realidad de aquellas sociedades que no han alcanzado para su población, los estándares mínimos de garantía de derechos y goce de libertades. Dichos estándares son motivo de tratamiento en instancias posteriores de este trabajo.

⁸ Cabe recordar que en el primer nivel del esquema de exploración teórico, el crecimiento económico, la medida tradicional utilizada era el PIB.

En aquella época, tres de las principales escuelas de economía, la neoclásica, la incipiente economía del desarrollo y el estructuralismo, coincidían en la caracterización del concepto de desarrollo que implicaba básicamente tres aspectos⁹:

1. Crecimiento económico,
2. Modernización económica (cambio estructural del aparato productivo: de los recursos primarios a la industria) y
3. Modernización socio-política e institucional.

En este primer momento, la noción de desarrollo describía un proceso por el cual las estructuras económicas, políticas y sociales de un país, se transforman hacia un sistema que garantiza el crecimiento económico, el bienestar de las y los ciudadanos, mayor calidad de vida y una participación democrática en las decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de que existan coincidencias entre diferentes escuelas de pensamiento para ciertas definiciones, es claro que las aproximaciones teóricas que enriquecen la ciencia económica, tienen orígenes filosóficos y epistémicos diferentes, y por lo tanto, buscan alcanzar sus objetivos a través de diversos caminos.

En este sentido, utilizando la clasificación de Amartya Sen¹⁰, se agrupan las teorías del desarrollo en dos categorías, con el fin de entender mejor sus fundamentos y los diferentes caminos planteados en pos de dicho desarrollo:

Teorías duras del desarrollo: (Teoría Blast: “blood, sweat and tears”).

Son aquellas teorías que consideran al desarrollo como un proceso inherentemente “cruel”, basado en estrictos principios inquebrantables. Dentro de esta agrupación se pueden incluir a la teoría de la acumulación, la teoría de la modernización, el estructuralismo, la teoría de la dependencia y el paradigma neoclásico bajo la propuesta del FMI y el Banco Mundial. En general, agrupa a todas aquellas teorías del desarrollo estrictamente económico que requieren un gran sacrificio para la generación actual, que suele recaer en los más desfavorecidos de la sociedad.

Teorías amables del desarrollo: (Teoría GALA: “getting by, with a little assistance”)

Consideran el desarrollo como un proceso esencialmente “amigable”, donde se destaca la cooperación entre las y los individuos y para con uno mismo. Se incluirían en esta modalidad, las teorías del capital humano y capital social, el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas y finalmente, se daría el salto al desarrollo humano como un paradigma diferente y evolucionado.

A continuación se analizarán por separado las dos categorías.

⁹ Escribano Gonzalo. *Introducción a las teorías del desarrollo*. Documento de la UNED. Páginas: 18-20 En: http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema1/tema01_1.pdf (Acceso: 15 de mayo de 2011).

¹⁰ Sen, Amartya. *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI*. Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. Páginas: 34-52. En www.iadb.org (Acceso: 13 de mayo de 2011).

2.1 Teorías duras del desarrollo

2.1.1 La teoría de la modernización y los modelos de acumulación de capital

Se analizan dos autores que han marcado la evolución de la economía del desarrollo y que han sido un referente académico e institucional en los primeros años de esta disciplina. Se considera la propuesta de Arthur Lewis en los años cincuenta y su evolución en los planteamientos de Walt Whitman Rostow, quien elaboró un programa de superación del atraso histórico para las sociedades, no solo a nivel económico (aunque sí principalmente) sino también a nivel político, social y cultural. Esta visión más amplia de lo que es el desarrollo – superando el propio concepto de crecimiento económico – se ha denominado como “teoría de la modernización” (Hunt Diana, 1989: 21-30). La teoría de la modernización es la denominación general con la que se conocen diferentes modelos, incluso muy distintos entre sí, pero que comparten un proceso de acumulación de capital como mecanismo para incrementar las cifras de crecimiento económico, logrando con ello la modernización de la sociedad (como sistema capitalista de producción y consumo) y, por lo tanto, el desarrollo.

Los “modelos de acumulación de capital” están inspirados en los procesos que ya describieron los clásicos de la economía. Como se ha visto, en las obras de Smith y Ricardo existe un modelo de crecimiento basado en la acumulación de capital, pero encaminado a un estado estacionario. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las aportaciones de Schumpeter y, sobre todo, que la exploración teórica se encuentra en un momento nekeynesiano, por lo cual, las contribuciones de Harrod-Domar son necesarias para comprender la gran distancia histórica que separa el paradigma neoclásico y la naciente economía del desarrollo.

Para Amartya Sen (1998), los modelos de acumulación de capital, incluso considerados bajo el punto de vista más amplio de la “teoría de la modernización”, pertenecen a la versión “más dura” de las estrategias para el desarrollo. En términos generales, plantean la realización de un sacrificio presente para la obtención de un beneficio futuro. La limitación de estas propuestas viene precisamente por la naturaleza de ese sacrificio, que puede producir, por ejemplo, reducida inversión social en detrimento de los sectores más vulnerables.

En versión de Lewis y Rostow, la teoría de la modernización (basada en el proceso de acumulación) se sostiene en los siguientes aspectos (Hunt Diana, 1989: 67-80):

- La interpretación del desarrollo como desarrollo económico, alimentado por el crecimiento económico y medido por el PIB *per cápita*.
- El desarrollo económico vincula la transformación de una economía de subsistencia en una economía dinámica capaz de generar un crecimiento auto sostenido, cuyos beneficios se reparten por sí mismos en la sociedad desde arriba hacia abajo.
- El subdesarrollo es considerado como un problema de atraso relativo, consecuencia de círculos viciosos que mantienen a los países en una situación de estancamiento permanente.
- El Estado juega un papel importante junto con la planificación, como elementos esenciales en la política de desarrollo.

- El punto determinante del crecimiento es la formación de capital, que está determinada por el ahorro.
- La clase capitalista (Lewis) o empresarial (Rostow) juega un papel fundamental en el proceso, a través de la inversión que se convierte en la base del crecimiento económico y, por lo tanto, del desarrollo futuro.

2.1.2 El modelo de acumulación: Lewis

De acuerdo a lo expuesto por Lewis en su obra *The theory of Economic Growth* (1955), la lógica del modelo consistía en mantener bajos niveles de vida a corto plazo que permitieran fomentar la acumulación acelerada de capital que, unida a la industrialización, protección del mercado interior e intervencionismo, daría lugar a largo plazo, a un crecimiento autosostenido de la renta per cápita, resolviendo así el problema del desarrollo. La relación causa-efecto entre crecimiento y desarrollo se debía según Lewis, a que en una economía de mercado, los beneficios del crecimiento económico se esparcían con amplitud y rapidez, por lo tanto, la mejor manera para fomentar esa expansión de beneficios consistía en lograr una alta tasa de crecimiento económico. Además, en sociedades democráticas, esos beneficios se esparcían de arriba hacia abajo, gracias a escasas medidas que debía adoptar el gobierno. Por último, el destino de las personas más pobres no era la principal preocupación de las primeras fases del desarrollo, sino que el objetivo prioritario consistía en la formación de capital, infraestructuras y la capacidad productiva de una economía. Ello permitiría una alta tasa de crecimiento de beneficios que serían redistribuidos en el futuro, como se ha dicho, de arriba hacia abajo.

Simon Kuznets, premio Nobel de Economía en 1971, proporcionó apoyo estadístico a la teoría de Lewis, al demostrar, mediante la “curva de kuznets”, que la desigualdad en un país mostraba niveles elevados en las primeras fases de crecimiento económico, llegando a su máximo en el tope de la transición entre la actividad primaria y la industrialización, para luego descender a medida que la mano de obra se concentraba en el sector secundario¹¹.

Sin embargo, para Amartya Sen (1989: 255), la crítica al modelo se centra en el poco interés que muestra sobre la calidad de vida de las y los individuos en el presente, aún cuando los duros sacrificios signifiquen mayores beneficios en el futuro. Plantea que si ha de adoptarse dicho modelo de desarrollo, se deben incorporar ciertas “compensaciones inter temporales” evidenciadas en la formación del capital humano, atención en salud, alimentación, etc. Adicionalmente, en opinión del autor de esta disertación, los supuestos que sostienen el modelo son demasiado rígidos y no aplicables para la coyuntura social de los países de América Latina. En este sentido, el modelo supone que las mayores rentas producidas luego de un proceso de crecimiento agresivo, serán reinvertidas en la economía local sentando las bases para un mayor crecimiento futuro. Sin embargo, cabe considerar que no existen incentivos (de cualquier naturaleza) para la reinversión de recursos por parte de una clase empresarial, que históricamente, ha mostrado poco o nada de interés en el bienestar colectivo de los países del continente. Inclusive, el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano de 1996, comenta el modelo calificándolo de “optimismo infundado”:

¹¹ Robinson James (2002) *The political economy of the Kuznets curve*. Boston: Review of Development Economics. En: http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/908_jr_kuznets.pdf. (Acceso: 21 de mayo de 2011).

La fe en el crecimiento se basaba en el supuesto de que sus beneficios, en última instancia, se difundirían ampliamente. En las etapas iniciales, los dirigentes políticos de las economías más liberales aceptaban que los ricos se enriquecieran más y los pobres tuvieran que apretarse los cinturones, pero abrigaban la esperanza de que al recompensarse a los ricos de esa manera, se les daría el incentivo para innovar, ahorrar y acumular capital, y que esto, en definitiva, beneficiaría a los pobres. Sin embargo, ninguno de estos supuestos optimistas se plasmó en la realidad y en muchos países continuaba existiendo crecimiento junto con desigualdad y pobreza. (PNUD, *Informe de desarrollo Humano*, 1996: 51)

A pesar de las deficiencias encontradas y las críticas realizadas al modelo de Lewis, éste dominó el ambiente académico y determinó la acción política de los años cincuenta y parte de los sesenta.

2.1.3 El modelo de etapas del crecimiento económico: Rostow

Las aportaciones de Rostow (1965: 107-119), realizadas en la misma línea de Lewis, se caracterizaron por identificar la composición de la inversión y el crecimiento de sectores “líderes” de la economía, siendo el objetivo del proceso, la consecución de una sociedad de consumo como paradigma de una sociedad desarrollada.

Plantea que el fenómeno del subdesarrollo es consecuencia del atraso económico y que la mejor manera para romper el círculo vicioso de la pobreza, es a través de la relación ahorro - inversión. Sin embargo, dado que los países no poseen suficientes reservas de ahorro interno, es necesario recurrir al endeudamiento, la ayuda o las inversiones extranjeras. Esto permitirá transformar la economía tradicional agrícola en una economía moderna e industrial, que será la base de un crecimiento auto sostenido que se difundirá posteriormente de manera paulatina, a toda la sociedad.

El modelo de Rostow consiste en una descripción del proceso histórico por medio del cual, a lo largo de cinco etapas, una sociedad tradicional se transforma en una sociedad capitalista y por lo tanto, desarrollada. En ese sentido, la concepción de desarrollo que engloba el análisis se caracteriza por un sistema de producción moderno y por el acceso al consumo de las masas, es decir, un desarrollo evidentemente económico dentro del marco universal – para Rostow- del capitalismo.

El recorrido histórico al cual el autor hace referencia, está enfocado en el proceso de modernización de Estados Unidos e Inglaterra desde el siglo XVIII y presenta cinco etapas definidas (Rostow Walt, 1965: 59):

1. La sociedad tradicional
2. Condiciones necesarias previas al despegue
3. El despegue
4. La marcha hacia la madurez
5. La era del consumo de masas

La primera etapa está caracterizada por un sistema económico fundamentalmente agrícola y políticamente autoritario y la evolución hacia la segunda etapa depende de una revolución en la agricultura y en la incipiente industria. En la segunda etapa, la formación de una clase empresarial es el principal factor, por cuanto en ella reposa la capacidad de ahorro e inversión. Adicionalmente, se

necesitan cambios políticos, expansión de mercados, competencia internacional y la evolución de los valores sociales hacia la ciencia moderna. En el despegue, la inversión aumenta principalmente en uno o varios sectores que actúan de motor, institucionalizándose una nueva organización social y política. En palabras de Rostow (1965: 61): “En esta etapa, las nuevas industrias se expanden rápidamente generando beneficios, una parte de los cuales, se reinvierte en nuevas plantas [...] la economía explota recursos naturales y métodos de producción que hasta entonces no se utilizaban”.

En la cuarta etapa, la sociedad está económicamente desarrollada (aunque no humanamente) y en la madurez, una economía demuestra que tiene los conocimientos tecnológicos y empresariales para producir cualquier cosa que decida producir. Finalmente, en la quinta etapa se produce un consumo intenso y duradero de las masas.

El modelo permitió definir claramente las categorías de desarrollo económico y modernización, y la identificación de sociedad desarrollada como moderna, suponiendo la transformación de las sociedades tradicionales en sociedades capitalistas. Todos éstos fueron paradigmas ampliamente aceptados, por lo menos, en los años sesenta.

Ahora, desde un punto de vista más analítico, se puede resaltar las críticas realizadas por Samuel Huntington al modelo de Rostow (Huntington Samuel, 1968: 134-142). Dichas críticas plantean que el fin del modelo de modernización, estaría provocado por fuertes crisis políticas producto de las difíciles y traumáticas situaciones que las sociedades tendrían que soportar en el presente, en espera de un mejor futuro. Su análisis consistía en relacionar el éxito económico con la quiebra de las estructuras políticas tradicionales. Si la institucionalidad política de un país no era capaz de adaptarse a las nuevas manifestaciones político-sociales, los costos de la transformación pueden ser tan altos que terminen con los beneficios económicos alcanzados anteriormente.

Adicionalmente, desde el enfoque del desarrollo humano se cuestiona el rol del individuo en el modelo de Rostow. Rostow apuesta por un ser humano paciente, receptor del desarrollo pero no impulsor de la actividad, en espera de que se vaya pasando de una etapa a la siguiente, en un modelo condicionado por el crecimiento económico. Dicho crecimiento económico está definido desde la experiencia de países como Gran Bretaña, Alemania, Francia o Estados Unidos, y se pretende que el modelo sea extendido a todos los demás países sin importar sus realidades específicas. En este sentido, se critica a Rostow, afirmando que su propuesta es del todo arrogante, por considerar que el crecimiento económico, logrado rápidamente y a toda costa, era bueno para todos los países y en todas partes. Con soberbia autosuficiencia, se emprendió la tarea de dar nueva forma a cualquier cultura o sistema de valores (Goulet Denis, 1997: 34-56).

2.1.4 El estructuralismo Latinoamericano

Continuando el análisis dentro de las teorías duras del desarrollo, se abordará la escuela del estructuralismo como el paradigma dominante en las políticas de desarrollo para América Latina a partir de los años cincuenta hasta finales de los años sesenta, liderado por economistas como Raúl Prebisch y Celso Furtado a través de la CEPAL. Su origen se basa en una crítica a la teoría convencional del comercio internacional evidenciada en el deterioro de los términos de intercambio, y propone una estrategia de sustitución de importaciones para impulsar la industria nacional (Rodríguez

Octavio, 1980: 106-118). Entre las medidas que habría que tomar para fortalecer el proceso de industrialización está la expansión del número de sectores que utilizan tecnología y un cambio en la composición de la producción.

El análisis estructuralista define al subdesarrollo en el marco de la economía internacional, como aquellos países cuyas economías han quedado relegadas a servir de fuentes de recursos baratos para la industrialización de las economías avanzadas, lo que determina una estructura global basada en un “centro” y una “periferia” (Prebisch Raúl, 1949: 253).

La teoría del centro-periferia es “una versión ampliada de la tesis de la causalidad acumulativa” (Richardson James, 1986: 117), y establece la estructura jerárquica de las regiones/países. Define las diferencias entre el centro y la periferia: las actividades más avanzadas se concentran en el centro, el ambiente cultural es más favorable en el centro, la demanda creciente de exportaciones es propia del centro y los rendimientos crecientes duraderos en el tiempo son patrimonio del centro. Sin embargo, las oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en la periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano de obra calificada y de capital (Aydalot 1985: 147-148). La teoría establece una relación de dominación del centro (por su capacidad de innovación tecnológica e institucional) sobre la periferia (no apta a la innovación), y concluye que las disparidades regionales tienen su causa tanto en las relaciones interregionales como en la dinámica interna de la periferia, incapaz de generar una dinámica propia de desarrollo (Prebisch, 1949: 89; Friedman, 1972: 56; Lipietz, 1990: 107).

La nueva escuela enfatizaba la estructura económica de las economías subdesarrolladas y el enorme riesgo en el que se encontraban en un sistema económico internacional que potencialmente frustraba el crecimiento. Las antiguas estrategias de crecimiento basadas en la especialización de acuerdo con la teoría de ventajas comparativas (que había dado buenos resultados a Latinoamérica en el pasado), fueron ampliamente criticadas por suponer una situación de estancamiento en torno a la producción de materias primas con pequeños márgenes de ganancias, mientras que los países desarrollados, se dedicaban a aquello que en realidad genera beneficios. En otras palabras, bajo la excusa de que los países de la periferia mantienen ventajas comparativas en la producción de bienes primarios, estaban condenados a dedicarse a aquello, por otro lado, los países del centro continuaban desarrollando bienes manufacturados que incorporaban cada vez más valor y producían mejores ganancias.

Por lo tanto, alcanzar el desarrollo solo se puede hacer con unas estrategias definidas desde y para la periferia, siendo el objetivo de la CEPAL el desarrollo económico, expresado por el aumento de la renta per cápita y condicionado por el incremento en la productividad del trabajo. En este sentido, la estrategia de industrialización por sustitución de Importaciones podría catalogarse como un proceso de desarrollo hacia adentro, que permitiría una transformación estructural. Este proceso debía ser dirigido por el Estado a través de políticas de inversión pública, empresas estatales, estímulo y orientación de la inversión privada, protección comercial y controles de cambio (Bustelo Pablo, 1998: 80-82).

Muy independientemente de si la estrategia dio resultado o no, se destaca el aporte de la escuela estructuralista a la economía del desarrollo por ser el modelo creado por los propios países

latinoamericanos. Adicionalmente, cabe mencionar que su clasificación dentro de las teorías duras del desarrollo se debe a que el proceso de sustitución de importaciones implica un periodo de grandes sacrificios para el consumo de la población, por cuanto el Estado debe *sustituir* la importación de bienes de consumo por bienes de capital hasta que la economía esté en capacidad de producirlos por sí misma. En este sentido, se producen fuertes presiones en la balanza de pagos que deben ser compensadas con endeudamiento y reducciones en el gasto del gobierno, complicando principalmente a la población más vulnerable.

2.1.5 La teoría de la dependencia

Continuando con el análisis dentro de las teorías duras del desarrollo, se abordan los principales postulados de la teoría de la dependencia cuya definición general, es presentada en palabras de Dos Santos:

Por dependencia entendemos una situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que está sometida; así, la relación de interdependencia de dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y ser autosuficientes, mientras que otros países (los dependientes) sólo pueden hacer lo anterior como un reflejo de tal expansión. (Dos Santos Theotonio, 1968: 106)

En este sentido, la teoría de la dependencia rechaza la definición de subdesarrollo como un atraso histórico que, para superarse, debe seguir la misma senda universalizada de los países ahora considerados como desarrollados, aquellos que disfrutaron de la era del consumo de las masas (Rostow). Para la dependencia, el subdesarrollo es una consecuencia del colonialismo y del imperialismo y está caracterizado, por la continua extracción del excedente generado por la economía dependiente (periferia), por parte de las economías capitalistas avanzadas (Hunt Diana, 1989: 102-108). Para agravar el subdesarrollo, las clases dominantes de la periferia, son quienes absorben los ingresos generados por la mencionada extracción del excedente y, por lo tanto, no muestran oposición al modelo. En términos generales, esta teoría implicaba la negación de la posibilidad misma del crecimiento económico sostenido en la periferia, en la que solamente se podría esperar la perpetuación del subdesarrollo.

La teoría de la dependencia sostenía que sin un cambio total en la estructura socioeconómica de los países dependientes, las políticas de desarrollo solo crearían nuevas formas de explotación y dependencia. En este sentido, la teoría pretendía refutar lo que hasta ese momento era considerada como la promesa de emancipación económica de los países subdesarrollados: la industrialización (Hirschman Albert, 1984: 12-19).

Por lo tanto, la estrategia de desarrollo necesaria para salir del subdesarrollo consistirá básicamente en una gran revolución social e histórica que rompa las condiciones de sometimiento, ya que el capitalismo es totalmente perjudicial para el tercer mundo (Palma Gabriel, 1987:15-21). Según Baran (1965: 167) “el establecimiento de una economía socialista planificada es una condición esencial, y de hecho indispensable, para lograr el progreso económico y social de los países subdesarrollados”.

Cabe mencionar que la razón para incluir a la teoría de la dependencia dentro de la clasificación de teorías duras del desarrollo, se debe a que ésta no dejaría de ser una estrategia que exige en palabras de SEN, “sangre, sudor y lágrimas”. Lo anterior, por cuanto un proceso de transformación revolucionario obliga a enfrentar costos sociales elevados y a experimentar situaciones extremadamente traumáticas al interior de los países, todo en pos de un desarrollo futuro cuyo logro no está particularmente claro.

Finalmente, en un sentido crítico a la teoría podemos destacar aquellos cuestionamientos realizados a la radicalidad de la misma en palabras de Amartya Sen:

Ciertamente, el modelo de expansión industrial de América Latina nos da muchos ejemplos de relaciones explotadoras con los países metropolitanos, particularmente Estados Unidos, y frecuentemente los efectos internos eran bastante terribles en términos de sostener la desigualdad económica y la distorsión social. Pero de ahí a moverse hacia una negación de la industrialización, hay un gran salto. (Sen Amartya, 1983: 488).

En este sentido, las reformas deberían orientarse hacia un desarrollo humano y la garantía de derechos, no hacia formas radicalizadas de transformación política y económica, cuyo fin no está definido.

2.1.6 El paradigma neoclásico: Propuestas desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

Para finalizar con el análisis de las teorías duras del desarrollo, se abordará el paradigma neoclásico, surgido en la década de los 80, como respuesta a la decadencia del enfoque estructuralista y neo keynesiano, que no pudieron dar respuestas a la crisis de la década anterior.

Dicho paradigma surge a raíz del fuerte cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial, ahondado por la crisis del petróleo en los años setenta. Adicionalmente, influye la llegada de partidos conservadores al poder en Gran Bretaña (Thatcher), Estados Unidos (Reagan) y Alemania (Kohl), que determinó el giro del FMI y Banco Mundial. La crisis de la deuda externa en los países del tercer mundo, hizo que éstos se vieran obligados a recurrir más al FMI y Banco Mundial, ayudando a que dichas instituciones ganaran más influencia, y el éxito de los nuevos países industrializados del Asia, atribuido a una notable liberalización comercial y a la presencia de un estado mínimo, propició la entrada en escena del enfoque neoliberal (Bustelo Pablo, 1998: 80-106).

Antes de entrar en el enfoque objeto de esta sección, vale la pena mencionar que los primeros neoclásicos no mantienen un enfoque global de la economía ni se plantean objetivos macroeconómicos, sino que concentran su análisis en el comportamiento microeconómico de los agentes (Pigou y Pareto).

En este punto, el liberalismo económico como nuevo paradigma válido para todos los países sin importar su grado de desarrollo, entra en escena. La estrategia del desarrollo para el neoliberalismo,

consiste en poner en práctica el modelo económico general de manera decidida en los países atrasados. Dicha estrategia se fundamenta principalmente en dos pilares¹²:

1. La defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención estatal en las actividades económicas por cuanto genera distorsiones. En ese sentido, el mercado garantiza la eficiencia y la libertad política y económica, a diferencia del Estado que genera una distorsión en los resultados óptimos logrados a través del mecanismo automático.
2. La existencia de amplias ventajas a la luz del comercio internacional, además de la crítica al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, por cuanto impone restricciones al libre comercio. Junto con la liberalización de los mercados internos era necesario el fomento del comercio internacional para garantizar el beneficio derivado de las ventajas comparativas.

Esta nueva forma de plantear el desarrollo se consolida en 1990, a través del Consenso de Washington, que plantea 10 medidas de política económica con el objetivo de globalizar el capitalismo triunfante con la caída del muro de Berlín. La expresión “Consenso de Washington” se recoge en un documento publicado por John Williamson, como resultado de las principales ponencias del seminario internacional Latin American Adjustment. A esto se suma la concepción que compartían las principales instituciones mundiales con sede en Washington, acerca de la crisis latinoamericana y de las medidas que debían aplicarse para superarla.

En relación al diagnóstico de la crisis, el documento de Williamson plantea dos razones principales:

1. El excesivo crecimiento del Estado, del proteccionismo, de la regulación y del peso de las empresas públicas
2. La existencia de populismo económico como la incapacidad de controlar el déficit público y el aumento en el gasto del gobierno sobretodo en salarios.

Adicionalmente, las diez medidas de política económica, que constituyen la síntesis del pensamiento neoliberal, son:

1. Disciplina presupuestaria
2. Cambios en las prioridades del gasto público
3. Reforma fiscal
4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés
5. Búsqueda de un tipo de cambio competitivo
6. Liberalización comercial
7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras
8. Privatizaciones
9. Desregulaciones

¹² La economista Anne Krueger y Bela Balassa son considerados pioneros de la corriente ortodoxa del desarrollo, e instituciones como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional permitieron su implementación.

10. Garantía de derechos de propiedad

Se asumía que con la aplicación de las medidas, una vez que las economías estuvieran estabilizadas, liberalizadas y privatizadas, los países retornarían a la senda del desarrollo, resolviendo así un problema en el que se llevaba más de cincuenta años trabajando desde la -ahora- despreciada economía del desarrollo.

Sin embargo, dados los resultados económicos y sociales de los países sobre los cuales recayó la receta expuesta en síntesis en los diez aspectos anteriores, las críticas en torno al enfoque neoliberal no se hicieron esperar. En este sentido, el principal aspecto cuestionado por Stiglitz es el tema de la equidad, no contemplada en la propuesta de desarrollo. En palabras de éste autor:

Algunos países han seguido muy de cerca los dictados del modelo, pero no han experimentado funcionamientos económicos especialmente fuertes. Otros países han ignorado muchos de los dictados -como mínimo respecto a detalles cruciales de secuenciación- y han experimentado algunas de las tasas más altas de crecimiento sostenido que el mundo haya visto jamás. Concentrándose en un grupo excesivamente estrecho de objetivos – incremento del PIB – otros objetivos como la equidad, pueden haber sido sacrificados [...]. Intentando forzar una transformación rápida – a menudo imponiendo una acentuada condicionalidad a recibir la asistencia vitalmente necesaria – no solo han sido minados los procesos democráticos, sino que se ha debilitado, a menudo, la sostenibilidad política. (Stiglitz Joseph, 1999: 2)

Finalmente, y como cierre al análisis de las teorías duras del desarrollo, se puede decir que el desarrollo humano de Sen compartido y fomentado por el PNUD a partir de los 90, asumirá como reto elaborar una propuesta de desarrollo económicamente viable y humanamente justificable como alternativa al enfoque neoliberal.

2.2 Teorías amables del desarrollo

Continuando con la exploración teórica del paradigma del desarrollo económico, se abordará las teorías amables del desarrollo entendidas como un proceso esencialmente “amigable”, donde se destaca la cooperación entre las y los individuos y para con uno mismo. Se incluirían en esta modalidad, las teorías del capital humano y capital social y el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas.

2.2.1 El crecimiento basado en el capital humano

En esta sección se realiza un análisis del capital humano como elemento fundamental del crecimiento económico. Para empezar, cabe mencionar que Sen no desconoce la importancia que el crecimiento económico debe tener en el proceso de desarrollo, pero no lo reconoce como un fin en sí mismo, sino como un medio más para el desarrollo, cuyo fin último debe ser la materialización de las libertades de las y los individuos, evidenciada luego en el pleno goce de sus derechos.

En este sentido, se expondrán los principales aspectos de la teoría del capital humano para ver su inserción y conexión junto con el capital social y el capital ético, en una teoría del crecimiento favorable al desarrollo humano y posterior enfoque de derechos.

Hasta ahora, la teoría neoclásica y convencional, sostenía que el crecimiento económico era resultado de la acumulación de capital físico y de la ampliación de la fuerza de trabajo, combinadas con un factor exógeno como el progreso tecnológico. Pero no podía explicar cómo se podía acelerar dicho progreso. De la misma manera, se pudo destacar numerosos aportes teóricos que atribuyen el crecimiento/ desarrollo a la influencia de variables de carácter exógeno, sin embargo, el tratamiento del enfoque del capital humano, se realiza a través de la teoría del crecimiento endógeno, la cual considera el rol fundamental del capital humano como parte medular del proceso de crecimiento.

El desarrollo de la teoría del capital humano reconoce que para la explicación de ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo, el crecimiento del ingreso nacional, es necesario incluir, además de los factores capital y trabajo, un tercer factor, que considera el conjunto de habilidades y capacidades de las y los trabajadores. El capital humano ha sido definido por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico como: “El conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica.” (OECD, 1998: 58).

Cabe destacar el aporte de Lucas (1988: 108-167), que coincide con el planteamiento anterior, al afirmar que las acciones y comportamientos de las y los individuos, tienen un efecto muy importante sobre la economía. En este sentido, la educación y la formación de las personas son fundamentales, por cuando su voluntad y decisión de capacitarse, incrementan la productividad del trabajo (por lo tanto potencializan el crecimiento), y no únicamente la inserción de nuevas maquinarias, como se había considerado.

Adicionalmente, se puede afirmar que no solo la educación de la fuerza laboral influye positivamente en el crecimiento económico, también existen gran cantidad de factores no cuantificables que juegan un importante papel en los procesos de crecimiento. En el informe de Desarrollo Humano de 1996, el PNUD expresa:

Los hábitos de la gente, sus grupos y redes sociales, el carácter de las instituciones y las políticas gubernamentales (que tienen importancia fundamental para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento de otros países), la familia y el sistema de enseñanza escolar, ayudan a impartir otros conocimientos como la autodisciplina, el orgullo por el trabajo propio y la flexibilidad, la apertura mental a nuevas ideas y la disposición a cooperar. (PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1996: 58)

Los factores mencionados anteriormente, trascienden la lógica económica neoclásica y expanden la propia teoría del capital humano, abriéndonos a la teoría del capital social y ético, que será abordada más adelante.

2.2.2 Más allá del capital humano: el capital social y el capital ético

Se busca destacar la importancia que tiene el capital social como complemento al capital humano y los aportes desde el capital ético, que puede ser considerado como parte del capital social, pero dada su importancia en la evolución de los paradigmas del desarrollo hacia el enfoque de derechos, se

expondrá en forma independiente. De la misma manera como la teoría del capital humano adquiere significado dentro de las teorías amables del desarrollo, por su contribución endógena al crecimiento económico, el capital social es considerado un elemento valioso y autónomo en el desarrollo de las economías (por ejemplo la japonesa) (Sen Amartya, 2000:44-80). Lo mismo ocurre con el valor de la confianza, la mejor expresión del término capital ético, por su aporte activo y transversal en el buen funcionamiento de las relaciones económicas.

James Coleman (1988: 80-91) plantea la noción de capital social como aquel formado por un conjunto de factores que aumenta la capacidad de las personas para agruparse y organizarse en propósitos comunes, emprender acciones conjuntas e involucrarse en relaciones cooperativas. Este conjunto de factores está formado por obligaciones, expectativas, confianza, normas sociales, canales de información, etc., que crean una red social capaz de potencializar la dinámica de las relaciones económicas entre los agentes, contribuyendo al proceso de crecimiento/desarrollo económico. No es un capital tangible, como tampoco lo es el capital humano, pero, a diferencia de éste, el capital social existe en las relaciones entre las personas y no en las personas mismas.

El investigador Domingo García-Marzá plantea que:

El término capital social describe los fenómenos que tienen que ver con la capacidad de los individuos para asociarse, construyendo relaciones de cooperación social en busca de la satisfacción de intereses recíprocos, y que hasta ahora habían permanecido ocultos bajo la lógica omnipotente de la racionalidad económica y de la maximización de la función de utilidad. (García- Marzá, 2004: 52)

En definitiva, la acumulación de capital social dentro de una sociedad propone mecanismos para alcanzar objetivos comunes, fuera de las premisas de la lógica económica, pero que, en última instancia, contribuyen enormemente a alcanzar también objetivos económicos.

Ahora, profundizando en las relaciones sociales planteadas anteriormente, se destaca el principio de confianza mutua que debe gobernar dichas relaciones. La presencia de confianza generalizada en las decisiones/acciones de las y los actores sociales, es lo que se puede denominar como capital ético. Como lo expresa Adela Cortina (2001:58): “En la educación, los alumnos deben confiar en sus profesores; en la sanidad, los pacientes en los médicos, etc. La confianza potencia la economía, las buenas prácticas, y todo ello, potencia el desarrollo moralizado de la sociedad”.

A manera de síntesis, se han analizado los aportes trascendentales del capital social y el capital ético al proceso de crecimiento/desarrollo. A continuación se tratará el enfoque de satisfacción de las necesidades básicas para culminar la descripción dentro de las teorías amables del desarrollo, expresadas bajo la frase de Sen: “Getting by, with a little assistance”¹³.

¹³ Sen, Amartya. *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI*. Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. Páginas: 15-56. En: www.iadb.org (Acceso: 13 de mayo de 2011).

2.2.3 La satisfacción de las necesidades básicas

El inicio del enfoque de las necesidades básicas remonta su origen a la Conferencia Mundial sobre el Empleo de la OIT en 1976, recogida en el informe *Employment, Growth and Basic Needs: A One-World Problem*. El documento enfatizaba sobre la necesidad de que la prioridad de la política del desarrollo, debía ser la satisfacción de las necesidades básicas para toda la población, y con ello, la eliminación de la pobreza absoluta, en contraposición al concepto de mero crecimiento¹⁴.

En ese entonces, las necesidades básicas fueron definidas por la OIT como aquellas cuya satisfacción aseguraba un nivel de vida mínimo para todas las personas y, especialmente, para los grupos más vulnerables. Éstas se describen en cuatro categorías:

- Los requerimientos mínimos de una familia para su consumo personal (alimento, alojamiento y vestido).
- Acceso a los servicios esenciales como agua potable, saneamiento, transporte, salud y educación.
- Acceso a un puesto de trabajo remunerado para cada persona en edad y con voluntad de trabajar.
- Necesidades de tipo cualitativo: un medio ambiente saludable y participación en la toma de decisiones que afectan a la vida y al sustento de las personas y las libertades individuales.

Sin embargo, la categorización presenta sus primeros problemas sobre cómo materializar esta exigencia moral en objetivos de política económica claramente definidos, y enmarcados dentro de un modelo que también contemple el crecimiento económico, como uno de los medios necesarios para poder satisfacer dichas necesidades.

En este sentido, desde la propuesta de Hicks y Streeten (1979: 55), se especifica una lista de seis necesidades básicas con su correspondiente medida en indicadores socioeconómicos, fácilmente evaluables en cuanto a los resultados de la política económica. La lista se presenta en el cuadro N° 2.

Cabe aclarar que la propuesta de Hicks y Streeten ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años; sin embargo, lo que queda claro es que independientemente de cuáles, en términos ilustrativos, sean las necesidades básicas a satisfacer, para el año 2000, tanto la OIT como el Banco Mundial coincidían con que debían ser resueltas (Hunt Diana, 1989: 35-92).

¹⁴ Sin embargo, no se descarta el objetivo del crecimiento económico, sin el cual, dichas necesidades no podrían ser del todo resueltas.

Cuadro N° 2
Necesidades Básicas e Indicadores (1979)

NECESIDAD	INDICADOR
Salud	Esperanza de vida al nacer
Educación	Alfabetización: matriculación en la escuela primaria en porcentaje de población
Nutrición	Provisión de calorías por persona
Abastecimiento de agua	Mortalidad infantil por mil nacimientos. Porcentaje de población con acceso al agua potable
Saneamiento	Mortalidad infantil por mil nacimientos. Porcentaje de población con acceso servicios higiénicos
Alojamiento	Ninguno

Fuente: Hicks, Streetten
Elaboración: David Guarderas

En este sentido, el *Informe de Desarrollo Humano de 1996*, sintetiza los tres aspectos principales en las que consistía la propuesta de las necesidades básicas:

1. Destaca la importancia del ingreso mediante la producción eficiente con alta densidad de mano de obra en los países en los que esta abunda.
2. Asigna un papel fundamental en la reducción de la pobreza a los servicios públicos, la enseñanza a las masas, el acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente, la planificación de la familia y los servicios de salud.
3. Destaca la importancia de la participación de las y los individuos en la planificación y manejo de infraestructura de servicios públicos.

En resumen, la propuesta del PNUD en torno al enfoque de la satisfacción de necesidades básicas implica: **ingresos + servicios públicos + participación**. Sin embargo, sin una estrategia clara que abarque por igual los tres aspectos, se puede presentar un gran riesgo de confundir el objetivo del enfoque y concentrarse únicamente en la provisión de servicios, confundiendo el hecho de que éstos no son más que medios para obtener fines mayores (por ejemplo, garantía de derechos o incremento de capacidades). Lo anterior podría ser evitado si “nos fijáramos más en lo que pueden hacer las personas con las cosas que en las cosas mismas” (Cortina Adela, 2002: 67).

Ahora, el problema se centra en cómo alcanzar los resultados deseados y aquí es donde de manera implícita, se espera una intervención estatal como proveedor de servicios e incluso, orientando el consumo privado a la luz de consideraciones públicas (Cortina Adela, 2002: 95-114). Sin embargo, el enfoque de las necesidades básicas no busca precisamente, establecer la estrategia universal para lograr satisfacer las necesidades básicas (sea cuales fueran finalmente), sino plantear un nuevo paradigma en torno a **los objetivos** del proceso de desarrollo. Alcanzar dichos objetivos dependerá de la mejor combinación de ingredientes teóricos e instrumentos económicos, aplicados a cada

realidad específica. Pero ahora, con un panorama claro de hacia dónde debe transitar la lógica del desarrollo, es mucho más fácil determinar que estrategias y modelos permitirán alcanzar el fin. En este sentido, las investigaciones y aportes deben girar en torno precisamente, a los mecanismos que permitan satisfacer las necesidades básicas (o a la implementación del enfoque derechos como se verá más adelante). Por ejemplo, en el objetivo de proveer salud a la población, puede ser dependiendo de la realidad específica de un país determinado, que el Estado sea el agente más indicado para hacerlo, mientras que en el caso de la educación, el mercado constituya la mejor opción como proveedor del servicio.

El enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas representa por tanto, una etapa necesaria en la evolución de los paradigmas del desarrollo en torno a sus objetivos más que en cómo alcanzarlos.

3. Desarrollo humano

Continuando el esquema de exploración teórica que ha permitido abordar una perspectiva, en lo posible histórica, de la evolución de las teorías del desarrollo, se presenta ahora el paradigma del desarrollo humano. Dicho paradigma será abordado desde la perspectiva propuesta por Amartya Sen: el desarrollo como libertad real (Sen Amartya, 2000: 34-91).

En este sentido, será fundamental la caracterización y exposición del concepto de libertad, entendida en el sentido más amplio del término, como el *fin* del proceso de desarrollo.

El desarrollo humano se define como un aumento y expansión de las libertades fundamentales, donde las condiciones materiales que hacen posible gozar de esa libertad deben estar garantizadas, y donde la libertad se constituye como el principio legislador y regidor de una sociedad justa. Es precisamente la garantía de las condiciones materiales de la libertad, la que permite añadir el término de *real* e impide que se convierta en una libertad teórica y especulativa. Para Sen (2000: 98), la libertad real es realizable a partir de una serie de medios e instrumentos destinados para ello y se concreta en que todas las personas puedan llevar a cabo el tipo de vida que tienen razones para valorar¹⁵.

Van Parijs, en su libro *Libertad real para todos* (1996: 42), comenta: “Utilizaré el término libertad real para referirme a una noción de libertad que incorpore los tres componentes: seguridad, propiedad de sí y oportunidad. Una sociedad libre, una sociedad cuyos miembros son auténticamente libres, satisface las tres condiciones”. Adicionalmente, el autor hace hincapié en la noción de oportunidad como característica de la libertad real.

Sen presenta la libertad como la capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida y con esto, se establece una medida de bienestar que supera las insuficiencias presentadas en el enfoque de las necesidades básicas.

¹⁵ El instrumento fundamental que será expuesto en la siguiente sección es el enfoque de derechos humanos (human rights based approach), a luz del cual se construirá el sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, tema de esta disertación de grado.

A continuación se presenta una cita de Isaiah Berlin en la cual se matiza el concepto de libertad desde una perspectiva que incluso puede ser interiorizada por cada individuo:

Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no de fuerzas exteriores, sean del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser el sujeto y no objeto, ser movido por propósitos conscientes que son míos, y no por causas que me afectan, por así decirlo, desde afuera. Quiero ser alguien, no nadie Isaiah Berlin (1988: 231).

Para Berlin, cada individuo es sujeto activo y constructor de su libertad, por lo tanto, también activo en el proceso de desarrollo.

La libertad se presenta entonces, como fin de una teoría del desarrollo humano, fundamentada en una teoría de la justicia (social y económica). El desarrollo ya no se plantea en términos de distribución de la riqueza, aumento de la productividad de las y los trabajadores, o ampliación de la esperanza de vida. Ahora consiste en lograr una vida de libertad para todos y todas. Pero una libertad realizable, real, pragmática, posible, histórica, material y política.

No cabe duda que los planteamientos aquí descritos abren la puerta a un sinnúmero de interrogantes, sobre todo con respecto a las concepciones tradicionales de la libertad (liberalismo). Sin duda, la relación entre libertad e igualdad entra en escena, ¿será acaso que la una se desenvuelve en contraposición con la otra o que las dos pueden coexistir y desarrollarse de manera complementaria?. Para Sen, tanto la igualdad como la libertad son dos caras de la misma moneda, donde la moneda es el desarrollo y la justicia, y tratar de confrontar ambas perspectivas es un error categórico: “La libertad se encuentra entre los posibles campos de aplicación de la igualdad, y la igualdad se halla entre los posibles esquemas distributivos de la libertad” (SEN, 1992: 35).

Con la aclaración de Sen a la interrogante planteada, la libertad se presenta como fin en sí misma, holística, integral, capaz de orientar a la diversidad de estrategias existentes hacia la consecución de un verdadero desarrollo humano. Ahora cabe preguntarse cuáles son los medios para alcanzar la tan anhelada libertad y cómo se materializan dichos medios, toda vez que llevar una vida de libertad se dará en unas condiciones humanamente dignas¹⁶.

En un pequeño paréntesis enfocado más en el tema central de esta disertación, se puede argumentar que la materialización e instrumentación la libertad, es principalmente el aporte del enfoque de derechos humanos y de la construcción de un sistema de indicadores que permita medir el derecho al trabajo en el Ecuador.

En este sentido, se recoge el planteamiento de que entre las libertades fundamentales:

Se encuentran algunas capacidades como por ejemplo, poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la morbilidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión, etc. Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de

¹⁶ Aquí se presenta una coincidencia fundamental con el enfoque de derechos humanos por cuando la dignidad es uno de sus principios transversales.

expansión de las libertades humanas y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración. (Sen Amartya, 2000: 55)

En la cita anterior, existen elementos estrechamente vinculantes con el enfoque de derechos humanos. Sen está hablando del derecho a la alimentación adecuada, a la educación, a disfrutar del de salud física y mental, a la libre expresión y al derecho a participar en asuntos públicos¹⁷. Es decir, al concebir el desarrollo como el proceso de expansión de las libertades humanas, se concibe también como el pleno goce y garantía de derechos, inclusive, por cuanto la propia definición de derechos humanos, los establece como libertades básicas. Finalmente, el sustento de la construcción de un sistema de indicadores con enfoque de derechos, responde también a lo expresado por Sen en cuanto a la evaluación de las libertades humanas. Si se va a evaluar libertades/derechos, es necesario hacerlo con indicadores creados con enfoque de derechos.

Culminado el paréntesis anterior, se puede decir que a la hora de profundizar en el papel constitutivo y principal de la libertad en el modelo de desarrollo humano, Sen (2000: 60-82) destaca tres puntos:

1. La libertad como valor universal¹⁸

Desde una visión kantiana se establece que, más allá de su pertenencia a cualquier grupo, categoría, entidad o comunidad, las y los individuos poseen la capacidad de cuestionar los paradigmas establecidos y promulgar de manera clara sus preferencias.

2. La libertad como oportunidades y libertad de procesos

Hace referencia a que aún reconociendo lo importante que es el factor de crecimiento económico, una de las diferencias entre el desarrollo económico y el desarrollo humano, es que éste último viene caracterizado por el logro de dos expresiones de la libertad: su incorporación absoluta en los procesos de desarrollo y el aumento de las oportunidades de las personas para llevar a cabo el tipo de vida que desean. Por lo tanto, la libertad se refiere tanto a los procesos de toma de decisiones como a las oportunidades para lograr resultados valorados.

3. La libertad como compromiso social

Hace referencia a que el sentido de la responsabilidad del ser humano, no tiene por qué referirse sólo a las aflicciones que pueden ser causa de su propia conducta, sino también, en términos más generales, a las miserias que observa a su alrededor. Sen afirma que:

Todas las personas son una por su humanidad común. Todas las filosofías pretenden ser universales aunque discrepen ampliamente sobre el significado de lo humano. Todas coinciden en que por encima de las diferencias de raza, nacionalidad, cultura u organización social, existe

¹⁷ Los enunciados en relación a estos derechos, se plantean desde la visión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los documentos producidos en su seno.

¹⁸ Presenta una nueva correspondencia con el enfoque de derechos humanos por el carácter de universalidad.

una humanidad común. Esta es la primera base ontológica de la solidaridad entre los seres humanos¹⁹.

Concluyendo con el análisis del desarrollo humano, se plantea que para alcanzar la libertad como fin, es necesario aumentar y garantizar unas libertades instrumentales concebidas como los medios. Sen hace referencia a las siguientes libertades instrumentales (Sen Amartya, 2000:104)²⁰:

- Libertades políticas
- Servicios económicos (refiriéndose a libertades y derechos económicos)
- Oportunidades sociales
- Garantías de transparencia y
- Seguridad protectora.

El “argumento instrumental” consiste en un análisis de cómo los derechos y las oportunidades forjan el desarrollo humano, presentándose un nuevo punto de encuentro entre el desarrollo como libertad y el enfoque de derechos humanos que será abordado a continuación.

4. Enfoque de derechos

Para culminar con el esquema de exploración teórico que sustenta la construcción de un sistema de indicadores para medir el derecho al trabajo en el Ecuador, se aborda el enfoque de derechos (Human rights Based approach) desde la propuesta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. Dicho enfoque será explicado y caracterizado de manera independiente a la línea de evolución histórica de las teorías del desarrollo que se ha seguido hasta ahora. Sin embargo, cabe aclarar que el hilo conductor del marco teórico de esta disertación no se encuentra en peligro, por cuanto los vínculos e interrelaciones del enfoque de derechos con el desarrollo humano como libertad real presentado anteriormente, son definitivos y concluyentes.

Dichos vínculos fueron introducidos a lo largo del análisis del desarrollo humano y básicamente se sintetizan en tres aspectos:

1. El enfoque derechos humanos permite materializar e instrumentar la libertad que se manifiesta en el pleno goce y garantía de derechos. Lo anterior, por cuanto las libertades fundamentales de la manera como las define Sen, se plasman en derechos humanos específicos. Es decir, al garantizar derechos, se cumple con el fin del proceso de desarrollo humano: libertad para todos y todas.
2. Al plantear la libertad como un valor universal se establece un marco de referencia común, por cuanto los derechos humanos son también de alcance universal.

¹⁹ Aparece una nueva coincidencia fundamental entre el desarrollo como libertad y su mecanismo de materialización a través de la garantía de derechos humanos. Lo anterior por cuanto Sen considera que la libertad como compromiso social es un pilar primordial dentro del desarrollo, y dicho compromiso social se sostiene sobre la base de la existencia de una humanidad común. Esa condición de humanidad común es presamente el principio fundamental que da origen a los derechos humanos.

²⁰ Cabe destacar la correspondencia de las libertades instrumentales listadas, con la clasificación realizada dentro del enfoque derechos humanos, que agrupa los derechos en civiles y políticos, y en económicos, sociales y culturales.

3. La coincidencia principal entre los dos enfoques se presenta, a criterio del autor de esta disertación, por cuanto la libertad y los derechos se sostienen sobre el principio de una humanidad común²¹. Es precisamente la condición de seres humanos lo que ata la relación desarrollo humano – derechos humanos.

Una vez aclarado el panorama de cómo el enfoque de derechos se inserta en las teorías del desarrollo y, por lo tanto, en una de las principales escuelas del pensamiento económico, se procede a analizar dicho enfoque de manera individual.

Siendo los derechos humanos el componente principal del enfoque, a continuación se presentan los conceptos básicos necesarios para comprender su utilidad en la construcción del proceso de desarrollo. En este sentido, los derechos humanos²²:

1. Constituyen garantías jurídicas universales.
2. Abarcan los aspectos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las relaciones humanas.
3. Tienen principios transversales: libertad, igualdad y dignidad.
4. Son inherentes a las y los individuos, y hasta cierto punto a los grupos.
5. Están reconocidos en las normas y estándares internacionales.
6. Constituyen una obligación jurídica para los estados.
7. Actúan en tres dimensiones: ética, jurídica y política.

Con respecto a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, existen tres aspectos fundamentales que éste debe cumplir como titular de deberes:

1. **Respetar:** debe abstenerse de intervenir en el libre ejercicio del derecho
2. **Proteger:** debe prevenir que otros interfieran con el ejercicio de derechos
3. **Garantizar:** debe adoptar medidas apropiadas hacia el pleno ejercicio de derechos (política pública)

Dichas obligaciones se deben a que la mayor parte de los estados del mundo, han suscrito y ratificado sendos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que los obligan a cumplir con marcos regulatorios específicos. Algunos de estos tratados se detallan a continuación por considerarse, a criterio del autor de esta disertación, como los más relevantes en el marco del tema que está siendo tratado:

- Carta Internacional de los Derechos Humanos: Declaración Universal de 1948; Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966-1976); Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966-1976).
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (CEDAW) (1979-1981)

²¹ El principio de humanidad común se sostiene incluso, desde la genética. Al compartir el 99% de los genes, los seres humanos no presentan, de acuerdo a la taxonomía, razas diferentes.

²² Organización de las Naciones Unidas (1948), *Declaración Universal de Derechos Humanos*, Nueva York: 1948

- Convención sobre los derechos del niño (CRC) (1989-1990)
- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CERD) – (1965-1969)
- Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) (1984-1987)
- Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias (1990-2003)
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)

Ahora, habiendo revisado los aspectos básicos en materia de derechos humanos, se procede a explicar el enfoque de derechos. En este sentido, cabe mencionar que el enfoque de derechos no consiste en una reformulación retórica ni una lista simple de actividades de derechos humanos, mucho menos se convierte en una condicionalidad política.

El enfoque de derechos²³ constituye un marco conceptual para el desarrollo, que desde el punto de vista normativo, integra los estándares y principios de derechos humanos y que operacionalmente está orientado a la promoción y protección de dichos derechos. En este sentido, la persona como sujeto de derechos es el centro del proceso de desarrollo.

El enfoque de derechos permite establecer los atributos fundamentales de cada derecho, que con carácter de **exigibilidad y obligatoriedad**, debe alcanzar la política pública para cumplir con las normas y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. En este sentido, el pleno goce de libertades y capacidades de las y los individuos se da con el cumplimiento y garantía de sus derechos, lo cual aterriza los aportes teóricos del desarrollo humano y permite cumplir con los principios de no discriminación, libertad y dignidad humana.

Las características principales del enfoque de derechos son las siguientes:

- El proceso de desarrollo se basa en estándares y principios internacionales de derechos humanos
- Reconoce a los seres humanos como titulares de derechos y define obligaciones de las y los sujetos de deberes
- Se centra en grupos marginados y excluidos
- Apunta a la realización progresiva de todos los derechos
- Asigna igual importancia al resultado como al proceso en la garantía de los derechos

²³ Desde el trabajo realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y recopilado por el autor de entrevistas y documentos varios.

Finalmente, las ventajas de la aplicación del enfoque de derechos son:

- Posee un valor normativo basado en valores universales y en la consistencia del principio de humanidad. Presenta los estándares legales para una vida digna.
- Presenta un valor instrumental para las estrategias de desarrollo²⁴. Aborda las desigualdades y la discriminación, dando contenido y legitimidad al desarrollo de capacidades. Presenta respuestas integrales a los problemas.
- Conlleva un valor institucional como marco objetivo para el manejo de conflictos sociales.

²⁴ El desarrollo entendido como desarrollo humano y explicado desde la perspectiva de la libertad real de Amartya Sen.

Uso de indicadores para promover y monitorear la implementación de los derechos humanos

Una vez sentadas las bases teóricas que respaldan la disertación, es necesario establecer un marco metodológico sólido que permita la construcción de indicadores para medir derechos humanos, y en el caso específico de esta disertación, el derecho al trabajo en el Ecuador.

A lo largo del documento, se han planteado las múltiples conexiones de los derechos humanos con las teorías del desarrollo, hasta concluir que éstos constituyen la materialización e instrumentación del desarrollo visto como libertad en los postulados de Amartya Sen. En este sentido, se irá construyendo dicha instrumentación a través de un sistema de indicadores, que se respalda, en un marco metodológico generado desde el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es precisamente esta institución, que a lo largo de varias publicaciones y sendos procesos de discusión a nivel mundial, ha establecido los parámetros que guían la construcción de un sistema de indicadores con enfoque de derechos. Desde esta misma instancia, se establece la utilidad de los indicadores para promover y monitorear la implementación de derechos humanos, y en este sentido, su aporte en la generación de políticas públicas que efectivamente contribuyan al desarrollo humano. Finalmente, se expone de manera ilustrativa, la lista de indicadores sugerida por el ACNUDH como base para la medición del derecho al trabajo en el Ecuador. Ya en la construcción misma del sistema, dicha propuesta de indicadores será validada y adaptada a la realidad ecuatoriana, en función de la disponibilidad de información y su representatividad para cumplir con el objetivo propuesto.

Algunas consideraciones previas

Los indicadores de derechos humanos o indicadores con enfoque de derechos, ayudan a los estados y a las diferentes instancias internacionales a evaluar el progreso en la implementación de los derechos humanos. Es decir, si la decisión de un país es generar política pública cuyo objetivo sea la garantía y protección de derechos, solo el uso de indicadores especialmente concebidos dentro de esta línea, permitirá una correcta evaluación de los resultados de la política. En este sentido, los indicadores con enfoque de derechos permiten encaminar adecuadamente los procesos de planificación de programas y proyectos, al contar con información de base alineada a los objetivos deseados.

La utilidad de este tipo de indicadores para evidenciar situaciones desatendidas o silenciadas, poniendo de manifiesto problemas sociales no analizados, es de vital importancia a la hora de focalizar y optimizar el uso de recursos escasos. Los resultados e impactos de una política pública correctamente direccionada, superarán con creces aquellos que se obtienen con información producida de manera tradicional. Adicionalmente, los indicadores con enfoque de derechos permiten detectar síntomas del desempeño estatal en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Facilitan una aproximación empírica al indicar en qué medida sus instituciones avanzan o se estancan, contribuyendo a la toma de decisiones favorables al derecho.

Al contrastar los aspectos considerados en las mediciones realizadas con indicadores socio-económicos tradicionales, versus aquellos incorporados en las mediciones hechas con indicadores de derechos humanos, se puede concluir que los segundos presentan mayores niveles de desagregación dada la necesidad de abordar los principios transversales del enfoque teórico que los respalda. Uno de estos principios es la no discriminación, que se encuentra de mejor manera evidenciada en los indicadores con enfoque de derechos. Por ejemplo: se pudo conocer que el desempleo está en alrededor del 10%, pero no se sabe cuál es el porcentaje de indígenas o de personas que viven en condición de desempleo y con alguna discapacidad. El hecho de ampliar la medición del desempleo para evidenciar una posible discriminación, constituye la utilización de indicadores con enfoque de derechos.

La labor en materia de indicadores se inició en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a petición de los Comités de Tratados, para ayudarlos a utilizar la información estadística presentada en los informes de los Estados partes, al evaluar la observancia de los derechos humanos. El ACNUDH llevó a cabo un amplio estudio de la literatura y las prácticas predominantes entre las organizaciones nacionales e internacionales en lo que respecta a la utilización de información cuantitativa en la vigilancia de los derechos humanos. Tras examinar los últimos adelantos en la materia, se adoptaron medidas para elaborar, en consulta con un grupo de expertos, un marco conceptual y metodológico que permitiese establecer indicadores con enfoque de derechos que fuesen operacionalmente viables.

Sobre la base del enfoque estructurado, el ACNUDH confeccionó listas de indicadores ilustrativos para una serie de derechos humanos -tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Se sometió a esos indicadores a un proceso de validación que consistió, en una primera etapa, en un examen con un grupo selecto de especialistas, que incluía expertos de los órganos de tratados, titulares de mandatos de procedimientos especiales de derechos humanos, instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales pertinentes. En una segunda etapa se celebraron consultas con las y los interlocutores nacionales, en particular instituciones de derechos humanos, autoridades normativas y organismos de estadística encargados de la recopilación de datos. Esas consultas tuvieron lugar en talleres regionales y nacionales. Los talleres brindaron una oportunidad para sensibilizar a las partes interesadas, sobre las posibilidades de utilizar la información estadística disponible para promover y vigilar la observancia de los derechos humanos en el plano nacional. También fueron útiles para obtener la opinión de los interlocutores sobre la pertinencia y la utilidad en el ámbito local, de la labor desarrollada por el ACNUDH.

El marco conceptual y metodológico

A continuación se expone detalladamente el marco conceptual y metodológico establecido por el ACNUDH como soporte en la creación de un sistema de indicadores con enfoque de derechos.

En este sentido, el objetivo básico del desarrollo de un marco conceptual y metodológico era adoptar un método estructurado y coherente para traducir las normas universales de derechos humanos en indicadores que fuesen pertinentes en los distintos contextos y útiles en el plano nacional.

Se necesita una base conceptual adecuada para poder contar con un fundamento teórico que permita definir y concebir los indicadores pertinentes y evitar que esa labor se reduzca a un mero listado de posibles opciones. Es importante que esos indicadores estén definidos explícitamente y con precisión, se basen en una metodología aceptable de recopilación y presentación de datos, y se utilicen o puedan utilizarse de forma periódica. También es importante que los indicadores se adecúen al contexto en el que se apliquen. De no abordarse estos aspectos, puede que no resulte viable y que los Estados partes o los comités ni siquiera consideren aceptable la utilización de indicadores cuantitativos en la preparación de los informes y en el proceso de seguimiento.

Elementos conceptuales

En primer lugar, para que el marco tenga sentido conceptualmente, es necesario que los indicadores seleccionados para un derecho humano tengan asidero en el **contenido normativo de ese derecho**, enunciado en los correspondientes artículos de los tratados y en las observaciones generales de los comités.

En segundo lugar, el objetivo primordial de la evaluación de la observancia de los derechos humanos es medir el esfuerzo que hacen las entidades responsables **para cumplir sus obligaciones** -con independencia de que apunte a la promoción de un derecho o a su protección. Si bien es esta faceta de la medición la que permite apreciar el valor añadido del método, es igualmente importante obtener una medida de la **"intención o compromiso"** del Estado parte, así como de la **consolidación de sus esfuerzos**, que se expresa en los correspondientes indicadores de "resultados". Esta conceptualización también ayuda a ubicar a todos los derechos humanos en pie de igualdad, poniendo de relieve la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

En tercer lugar, el marco debe poder **reflejar la obligación de la entidad responsable** de *respetar, proteger y hacer efectivos* los derechos humanos.

Por último, es necesario tener presentes y reflejar **las normas y los principios transversales** de derechos humanos (como la no discriminación y la igualdad, la indivisibilidad, la rendición de cuentas, la participación y el empoderamiento) en la elección de los indicadores, así como en el proceso de evaluación. Estos aspectos se abordaron de la siguiente manera.

Determinación de los atributos

Con respecto a cada uno de los derechos humanos, lo primero es traducir el texto de la norma jurídica del derecho en un número limitado de atributos característicos que faciliten la determinación estructurada de indicadores apropiados para vigilar la observancia de ese derecho.

En efecto, el concepto de atributos de un derecho permite concretar el contenido de un derecho y hacer explícito el vínculo existente entre, por un lado, los indicadores establecidos para un derecho y, por otro, las disposiciones normativas de ese derecho. A menudo ocurre que la enunciación de las normas sobre un derecho en los artículos pertinentes es muy general, cosa que no facilita el proceso

de determinación de los indicadores. Al seleccionar los atributos de un derecho, resulta más fácil determinar los indicadores o el grupo de indicadores adecuados, pues se consigue una categorización clara, concreta y tal vez más "tangible".

En el caso de la mayoría de los derechos humanos para los que el ACNUDH estableció indicadores se constató que, en promedio, unos cuatro atributos podían recoger con mediana precisión la esencia del contenido normativo de esos derechos. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, teniendo en cuenta principalmente el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación general Nº 6 del Comité de Derechos Humanos, se determinaron cuatro atributos:

1. Privación arbitraria de la vida,
2. Desaparición de personas,
3. Salud y nutrición y
4. Pena de muerte.

También sirvieron de base para determinar atributos del derecho a la vida los artículos 10 a 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 5 b) y e-iv) de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; los artículos 1 a 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y el artículo 10 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Del mismo modo, en el caso del derecho a la salud se determinaron cinco atributos: la salud sexual y reproductiva, la mortalidad infantil y la atención de la salud, el entorno natural y de trabajo, la prevención, el tratamiento y control de las enfermedades y la accesibilidad de los centros de salud y los medicamentos esenciales

De esta manera, se utilizaron los artículos pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales básicos de derechos humanos, así como su desarrollo en las respectivas observaciones generales de los comités, para recoger el contenido normativo de los 12 derechos²⁵ para los que se han preparado indicadores, dentro de los cuales, se encuentra el *derecho al trabajo* como objeto central de investigación de esta disertación.

Ahora, para la elección de los 12 derechos, el ACNUDH tomó en consideración en primer lugar el hecho de que estaban reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de que esos

²⁵ Los derechos humanos para los que el ACNUDH ha preparado indicadores son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a no ser sometido a tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a un juicio con las debidas garantías, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y **el derecho al trabajo**.

derechos serían los elementos de base para confeccionar, llegado el momento, una lista de indicadores ilustrativos para cada tratado.

La medición del compromiso, los esfuerzos y los resultados en materia de derechos humanos

Una preocupación fundamental para el ACNUDH al elaborar el marco conceptual y metodológico, fue la de velar porque éste reflejase correctamente la complejidad intrínseca de los derechos humanos, en particular en el contexto de su aplicación, y porque, al mismo tiempo, tuviese una estructura lo suficientemente operacional que permitiese establecer indicadores cuantitativos. En este sentido, era necesario medir el compromiso de las entidades responsables respecto a las normas de derechos humanos, los esfuerzos emprendidos para hacer realidad ese compromiso y los resultados de esos esfuerzos en el tiempo.

Así pues, en el marco se optó por utilizar una configuración de indicadores estructurales, de proceso y de resultados que atendiese la necesidad de reflejar el compromiso, los esfuerzos y los resultados de la entidad responsable, respectivamente. En otras palabras, mediante la determinación de indicadores estructurales, de proceso y de resultados para cada uno de los atributos de un derecho humano es posible proceder a una evaluación de las medidas adoptadas por los Estados partes para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los motivos del ACNUDH para establecer las tres categorías de indicadores y la lógica de la selección de los indicadores en cada categoría se explican en la siguiente sección.

Al respecto, cabe plantearse hasta qué punto la utilización de indicadores estructurales, de proceso y de resultados para cada atributo de los derechos humanos, refleja las obligaciones de los Estados de *respetar, proteger y hacer efectivos* los derechos, y si la utilización de ese tipo de configuración de indicadores para "disociar" el texto del contenido normativo de un derecho, es una opción mejor que establecer indicadores para las tres obligaciones señaladas respecto de cada derecho. Para el ACNUDH, hay por lo menos dos buenos motivos para elegir las primeras categorías de indicadores para el marco conceptual y metodológico.

En primer lugar, se trata de categorías de indicadores que ya se utilizan ampliamente en el contexto de las políticas de desarrollo. De hecho, la utilización de indicadores estructurales, de proceso y de resultados en la promoción y la vigilancia del ejercicio de los derechos humanos ayudará a:

Llevar el discurso de los Derechos Humanos más allá de los confines del debate jurídico y judicial, además de facilitar la integración de las normas y los principios de derechos de lleno en la formulación de las políticas públicas y las actividades de desarrollo. (Castilho Leonardo, 2010: 25)

En segundo lugar, puede que no siempre sea posible establecer un indicador cuantitativo que refleje de modo exclusivo uno de los tres tipos de obligaciones. A menudo, un indicador basado en los datos estadísticos y administrativos de uso común puede acabar reflejando más de un tipo de obligaciones, lo que puede resultar poco conveniente si lo que se persigue es concebir un método estructurado,

común y coherente de elaboración de indicadores para todos los derechos enunciados en los distintos tratados de derechos humanos.

Dicho esto, al establecer los indicadores para cada atributo de un derecho humano, el ACNUDH intentó incluir a todos los indicadores que reflejasen de modo explícito y singular las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Además, se estableció una combinación adecuada de indicadores estructurales, de proceso y de resultados, en particular de indicadores de proceso, a fin de facilitar la evaluación del cumplimiento de tales obligaciones del Estado.

Indicadores para las normas transversales de derechos humanos

El ACNUDH expone que los indicadores relativos a las normas o los principios transversales de derechos humanos no pueden identificarse exclusivamente con la realización de un determinado derecho, sino que están concebidos para mostrar en qué medida el proceso para aplicar y hacer efectivos los derechos humanos es, por ejemplo, participativo, integrador, potenciador, o no discriminatorio. Cabe señalar que no es fácil que esas normas y principios transversales queden reflejados explícitamente en la selección de indicadores. Para integrar la norma de no discriminación e igualdad en la selección de indicadores estructurales, de proceso y de resultados un punto de partida es la búsqueda de datos desglosados por motivos de discriminación prohibidos como el sexo, la discapacidad, el origen étnico, la religión, el idioma, la condición social o la identidad regional de las personas. **Por ejemplo, si el indicador de la proporción de niñas y niños matriculados en la escuela primaria, dado que ésta debe ser gratuita, está desglosado por grupos étnicos o minorías religiosas de un país, será posible captar algún aspecto de la discriminación de la que puedan ser víctimas en ese país determinados grupos o minorías en el acceso a la educación y el disfrute de su derecho.**

De este modo, el cumplimiento de la norma de no discriminación en el contexto del derecho a la educación, puede medirse utilizando un indicador como la proporción de niñas en edad escolar matriculadas respecto a la proporción de muchachos del mismo grupo de edad escolarizados. Del mismo modo, el desglose por grupos étnicos o minorías de la proporción de personas acusadas que solicitan o hacen uso de la asistencia jurídica gratuita podría ayudar a determinar la no discriminación y la igualdad en la aplicación del principio de disponibilidad de recursos eficaces y garantías procesales. Y lo que es más importante aún, al reflejar la norma transversal de la no discriminación y la igualdad hay que hacer hincapié en indicadores que describan el carácter del acceso, y no solo la disponibilidad, a ese tipo de bienes y servicios que permiten a una persona disfrutar de sus derechos. **De la misma manera, en la medición del derecho al trabajo, un indicador adecuado deber permitir evidenciar la posibilidad de acceso una persona, con todas sus características socio – demográficas, a una plaza de trabajo en un sector específico.** Por ejemplo, el sector financiero de la economía puede tener gran disponibilidad de plazas de trabajo; sin embargo, el acceso para las profesionales indígenas podría estar limitado por factores no necesariamente evidentes. En este caso, un indicador de empleo lo suficientemente desagregado puede ser útil para evidenciar la discriminación presente en este sector de la economía (sin que esto signifique una relación de causalidad, que sería objeto de otro tipo de investigación). Sin embargo, las mediciones

tradicionales podrían ocultar esta realidad expresando que el desempleo es muy bajo entre las personas profesionales con especialización financiera. En este sentido, habría que preguntarse, ¿bajo para quién?. Quizás bajo para los hombres mestizos de áreas urbanas.

Adicionalmente, indicadores como la tasa de participación en el mercado de trabajo y el nivel educativo de la población, en general, y de grupos específicos, en particular (por ejemplo, las mujeres y las minorías) también ayudan a estimar en qué medida el Estado respeta y promueve el principio de empoderamiento de la persona. Por último, el primer paso para aplicar el principio de responsabilidad, se da cuando se traduce el contenido normativo de un derecho en indicadores cuantitativos. En efecto, la disponibilidad de información sensible a los derechos humanos, así como su recopilación y difusión a través de mecanismos independientes que utilicen procedimientos transparentes, fortalece la responsabilidad/rendición de cuentas. Además, al establecer un indicador de proceso como medida que vincula el esfuerzo de un Estado a una problemática específica, el marco permite mejorar de manera importante la rendición de cuentas del Estado en la observancia de los derechos humanos.

Fuentes y mecanismos de generación de datos

Para la construcción de indicadores con enfoque de derechos, el ACNUDH considera conveniente centrarse en dos fuentes complementarias de datos: las estadísticas socioeconómicas y otras estadísticas administrativas.

Las estadísticas socioeconómicas se refieren a la información cuantitativa recopilada y difundida por el Estado mediante sus registros administrativos y estudios estadísticos, normalmente en colaboración con los organismos nacionales de estadística y bajo la orientación de organizaciones internacionales y especializadas. Las estadísticas socioeconómicas proporcionan información sobre cuestiones relacionadas no solo con los derechos económicos, sociales y culturales, sino también con los derechos civiles y políticos, como por ejemplo, aquellos datos que se refieren a la administración de justicia y al estado de derecho (por ejemplo, las sentencias de muerte ejecutadas, la población carcelaria y la incidencia de los delitos violentos).

La utilización de una metodología uniforme para la recopilación de información, ya sea mediante las actividades del censo, encuestas de hogares o sistemas de registro civil, y normalmente con un alto nivel de fiabilidad y validez, hace que los indicadores basados en esa metodología sean esenciales para los esfuerzos encaminados a mejorar la transparencia, la credibilidad y la responsabilidad en la vigilancia de los derechos humanos.

Adicionalmente, los datos fácticos son principalmente datos sobre casos señalados o denunciados de violaciones de los derechos humanos, las víctimas identificadas y los autores de dichas violaciones. Hay indicadores, como la supuesta incidencia de la privación arbitraria de la vida, las desapariciones forzadas o involuntarias, la detención arbitraria y la tortura, que suelen ser comunicados por las ONG, pero son o pueden ser sometidos a un tratamiento estandarizado por otras entidades, como por ejemplo las instituciones nacionales de derechos humanos y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Puede ocurrir que en general con esos datos se subestime la incidencia de las violaciones e incluso que resulte imposible hacer comparaciones válidas entre períodos o regiones,

pero también es posible que ofrezcan indicaciones a los órganos de tratados para evaluar la situación de los derechos humanos en un país. Aunque las últimas tentativas han demostrado que los datos fácticos también se pueden emplear para supervisar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, estos datos se ha utilizado principalmente y con mayor eficacia para vigilar las violaciones de los derechos civiles y políticos.

Criterios para la selección de indicadores cuantitativos

Según el ACNUDH, la principal consideración al adoptar una metodología para definir y crear indicadores de derechos humanos, o indicadores de cualquier otro tipo, es su pertinencia y eficacia al abordar los objetivos que éstos han de perseguir. Casi todos los demás requisitos metodológicos se desprenden de esta consideración. Para el Dr. Leonardo Castilho, funcionario internacional del ACNUDH, para vigilar la observancia de los derechos humanos, los indicadores cuantitativos deberían, idealmente ser:

Pertinentes, válidos y fiables; ser simples, oportunos y pocos; estar basados en información objetiva y en mecanismos de generación de datos; prestarse a la comparación temporal y espacial y ajustarse a las normas de estadísticas internacionales pertinentes y prestarse al desglose por sexos, edad y sectores vulnerables o marginados de la población. (Castilho Leonardo, 2010: 67)

Muy posiblemente, la información disponible en el contexto nacional relativa a un derecho específico, no cumpla con todas las condiciones especificadas anteriormente, y ésta es una de las principales consideraciones que se realizaron para escoger el derecho al trabajo como candidato para su medición a través de indicadores con enfoque de derechos. El trabajo en el Ecuador presenta gran disponibilidad de datos y encuestas de primera mano, que luego de un procesamiento adecuado en función de lo que se espera evidenciar con la información, permite la construcción de indicadores acorde a la metodología del ACNUDH que se ha venido presentando²⁶.

Pertinencia contextual de los indicadores

A criterio del ACNUDH, la pertinencia contextual de los indicadores es una consideración clave para su aceptabilidad y utilización entre los posibles usuarios. Los países y dentro de ellos las regiones, difieren en cuanto al nivel de desarrollo y de realización de los derechos humanos. Estas diferencias se reflejan en la naturaleza de las instituciones, las políticas y las prioridades del Estado. Por lo tanto, puede que no sea posible establecer un conjunto de indicadores universales para evaluar el grado de realización de los derechos humanos. Dicho esto, también es verdad que ciertos indicadores de derechos humanos, como los que describen el ejercicio de algunos derechos civiles y políticos, pueden ser pertinentes en todos los países y sus regiones, mientras que otros que se refieren a la

²⁶ El procesamiento de datos supone una carga de trabajo operativo de dimensiones y costos extremadamente grandes, dada la amplitud de los atributos que el ACNUDH ha definido para el derecho al trabajo y que serán presentados al final de este capítulo. En este sentido, se han consultado los resultados de una fase piloto de indicadores de Derechos Humanos realizada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través del proyecto SIDERECHOS, del cual autor de esta disertación fue parte integrante.

realización de derechos económicos o sociales, como el derecho a la salud o a una vivienda adecuada, quizá deban adaptarse para ser de utilidad en distintos países.

Es precisamente la adaptación a la realidad ecuatoriana de los indicadores propuestos en la metodología del ACNUDH, la que marcó el inicio de la medición del trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos. Dicha adaptación es presentada en el siguiente capítulo.

Pertinencia y selección de los indicadores estructurales, de proceso y de resultados

De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la elección de indicadores estructurales, de proceso y resultado en el marco conceptual adoptado para esta labor, responde principalmente al objetivo de traducir de forma coherente y exhaustiva, el contenido de las normas de derechos humanos. Estos indicadores deben reflejar los aspectos de compromiso, esfuerzo y resultados de las acciones que se llevan a cabo desde el Estado, utilizando la información cuantificable existente.

Al adoptar esta configuración de indicadores se simplifica su selección, se fomenta el uso de información contextualmente pertinente y se facilita una cobertura más amplia de los diferentes atributos de un derecho.

A continuación se tratarán por separado cada uno de los tres tipos de indicadores.

Indicadores estructurales

Los indicadores estructurales reflejan la ratificación y adopción de instrumentos jurídicos y la existencia de mecanismos institucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la realización de un derecho humano. **Reflejan el compromiso o la intención del Estado** de adoptar medidas para hacer efectivo ese derecho. Los indicadores estructurales deben, ante todo, centrarse en la naturaleza de las leyes nacionales aplicables al derecho de que se trate y en los mecanismos institucionales que promueven y protegen las normas.

Los indicadores estructurales deben también reflejar las políticas y las estrategias del Estado pertinentes a ese derecho. Esto es particularmente importante en la perspectiva de los derechos humanos. Una política nacional declarada sobre determinado tema, suele ser un instrumento en el que un gobierno define objetivos, un marco normativo, una estrategia y un plan de acción concreto para atender los problemas que conlleva el tema en cuestión. Al ser indicativa de la voluntad del gobierno de ocuparse del tema en cuestión, la política declarada puede ofrecer, además, los parámetros para que el gobierno rinda cuenta de sus acciones u omisiones con respecto a ese tema. Además, una política declarada es un medio para traducir las obligaciones de un Estado parte en materia de derechos humanos en un programa de acción viable que contribuya a la realización de los derechos humanos.

Así pues, además de seleccionar los indicadores estructurales relativos a diferentes derechos y sus atributos, el ACNUDH intentó destacar la importancia de contar con políticas declaradas sobre las cuestiones directamente relacionadas con atributos específicos de los derechos humanos. Adicionalmente, el ACNUDH observó que muchos indicadores estructurales posibles eran comunes a todos los derechos humanos y que otros eran pertinentes para determinados derechos e incluso para uno de sus atributos en particular.

Indicadores de proceso

Los indicadores de proceso relacionan los instrumentos de política pública de los Estados con objetivos intermedios que, acumulados, se convierten en indicadores de resultados, los que su vez, pueden relacionarse de manera más directa con la realización de los derechos humanos.

Los instrumentos de la política pública del Estado son todas las medidas (programas públicos e intervenciones concretas) que un Estado está dispuesto a adoptar para materializar su intención o su compromiso de alcanzar los resultados que corresponden a la realización de un determinado derecho humano. Los indicadores de proceso ayudan a vigilar directamente el ejercicio progresivo del derecho o el proceso de protección del derecho, según el caso, que conlleva a la realización final del derecho en cuestión.

Los indicadores de proceso seleccionados y formulados por el ACNUDH atendieron a dos consideraciones. En primer lugar, la articulación de los indicadores de proceso debía reflejar una relación de causalidad²⁷ con el indicador estructural y el indicador de resultados pertinentes. Por ejemplo, uno de los indicadores de proceso del derecho a la salud -el porcentaje de escolares que reciben educación sobre cuestiones de salud y nutrición- se estableció de modo que pudiera relacionarse con el indicador estructural correspondiente ("perspectiva temporal y alcance de la política nacional de salud y alimentación de la infancia") y con el indicador de resultados ("porcentaje de niños menores de 5 años con un peso inferior al normal").

En segundo lugar, al elaborar un indicador de proceso, el ACNUDH consideró importante tener en cuenta la necesidad de medir de algún modo el esfuerzo desplegado por la entidad responsable para cumplir sus obligaciones. Así pues, se incluyeron en la categoría de indicadores de proceso indicadores como "porcentaje de la población objetivo recibiendo apoyo para su reincorporación al mercado laboral" o "porcentaje de solicitudes de prestaciones de seguridad social examinadas y atendidas en determinado período".

Indicadores de resultado

Los indicadores de resultados describen los logros, individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho humano en un determinado contexto. No se trata solo de una medida más

²⁷ Empíricamente hablando, pues la demostración de dicha relación no ha sido estudiada y debe ser tema de otros trabajos de investigación que permitan afirmar más el uso de este tipo de indicadores para medir Derechos Humanos, y con esto el desarrollo definido como libertad.

directa de la realización del derecho humano, sino también de la importancia de esa medida para apreciar el disfrute del derecho.

Puesto que refleja los efectos acumulados de diversos procesos subyacentes (que pueden ser descritos por uno o más indicadores de proceso), un indicador de resultados suele ser un indicador lento, menos sensible a las variaciones transitorias que un indicador de proceso. Por ejemplo, los indicadores de la esperanza de vida o la mortalidad podrían depender de la inmunización de una población, de la educación o conocimiento de la población en materia de salud pública, así como de la disponibilidad de suficientes alimentos y del acceso que tenga a ellos la población. Resulta, por tanto, instructivo considerar los indicadores de proceso y de resultados como variables dinámicas y estáticas, respectivamente, considerando que a menudo un mismo resultado puede ser producto de uno o más procesos y en otros casos el mismo proceso puede influir en más de un resultado.

En este sentido, el ACNUDH plantea que es importante considerar que los indicadores de proceso y de resultados pueden no ser mutuamente excluyentes. Es posible que un indicador de proceso correspondiente a un derecho humano resulte ser un indicador de resultados en el contexto de otro derecho.

Adaptación de los indicadores propuestos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al contexto ecuatoriano

Una vez que se cuenta con un marco metodológico y conceptual sólido, que fue propuesto por una de las instancias con mayor prestigio y confianza internacional como las Naciones Unidas, se puede afirmar que la construcción de un sistema que permita medir el derecho al trabajo en el Ecuador, cuenta con un consistente respaldo teórico y práctico que avalará los resultados que se expondrán a manera de indicadores.

Las Naciones Unidas a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, propone una configuración sistemática de indicadores relacionados a la medición de 12 derechos específicos²⁸, dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo. Cabe mencionar que uno de los aportes de esta disertación, es establecer el inicio de otras mediciones de variables socio-económicas bajo el enfoque de derechos, con el fin de brindar información tratada de manera confiable, que sirva para la generación de políticas públicas para la realización del desarrollo humano, concebido como libertad real. En este sentido, en el Anexo A se presentan las listas de indicadores para los 11 derechos restantes, que fueron consultadas por el autor de esta disertación en los documentos del ACNUDH relativos a la temática.

Ahora, el primer paso para la construcción de los indicadores para medir el derecho al trabajo, consiste en la adaptación de la lista propuesta por las Naciones Unidas a la realidad y contexto ecuatoriano. Las intenciones primordiales de este trabajo son:

1. Que la información disponible en un contexto oficial, es decir, que haya sido producida por el Estado, luego de haber sido procesada adecuadamente, resulte en un indicador específico.
2. Verificar que los indicadores reflejen la realidad nacional. Dado que la propuesta del ACNUDH es general para todos los países del mundo, es necesario cerciorarse que los indicadores que van a ser calculados, reflejen el fenómeno del empleo con sus particularidades en el contexto nacional.
3. Establecer las propias limitaciones de la propuesta de Naciones Unidas, buscar enriquecerla y añadir aquellos elementos que, dada la realidad ecuatoriana, necesitan ser explorados.

La lista completa de indicadores propuesta por ACNUDH se presenta en el cuadro N° 3, y posteriormente, se analiza la adaptación al contexto nacional de los indicadores estructurales, de proceso y de resultado.

²⁸ Los derechos humanos para los que el ACNUDH ha preparado indicadores son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a no ser sometido a tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a un juicio con las debidas garantías, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y **el derecho al trabajo**

Cuadro N° 3

Lista de indicadores ilustrativos del derecho al trabajo. (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 23)

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho al trabajo (DUDH, Art. 23)				
	Acceso a trabajo decente y productivo	Condiciones de trabajo justas y seguras	Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional	Protección contra trabajo forzado y desempleo.
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT relevantes al derecho al trabajo, ratificados por el Estado • Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho al trabajo en la Constitución u otra forma de legislación superior. • Fecha de entrada en vigor y cubrimiento de las leyes nacionales para implementar el derecho al trabajo, incluidas reglamentaciones que garanticen iguales oportunidades para todos y eliminen las discriminaciones relacionadas con el empleo, así como medidas especiales (temporales) para grupos objetivo (ej: mujeres, niños, indígenas, migrantes). • Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por c/ 100,000 personas), incluidos en sindicatos, involucradas en la promoción y protección del derecho al trabajo. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cobertura de una política nacional de empleo total y productivo. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas y procedimientos que garanticen condiciones laborales seguras y sanas, incluido un ambiente libre de acoso sexual, y establecimiento de una entidad de monitoria independiente. • Máximo número de horas laborales por semana estipuladas por la ley. • Edad mínima para empleo por tipo de ocupación. • Duración de licencia de maternidad, paternidad y parental y derechos a licencias médicas y proporción de salarios pagados durante el periodo de la cobertura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cobertura de la política nacional para la educación vocacional y mejora de habilidades. • Proporción de regiones administrativas con agencias públicas especializadas para ayudar a las personas a encontrar trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cobertura del programa de concienciación sobre estándares laborales. • Plazo y cobertura de la política para la eliminación de trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, los trabajadores migrantes y el trabajo doméstico. 	
De proceso	Proporción de quejas sobre el derecho al trabajo, incluidas condiciones laborales justas y seguras, investigadas y adjudicadas por la institución nacional de derechos humanos, defensoría del pueblo u otros mecanismos (como procedimientos de la OIT, sindicatos) y la proporción estas respondidas efectivamente por el gobierno.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de población objetivo que recibe apoyo efectivo para su (re)ingreso al mercado laboral. • Crecimiento anual de empleos (índices de creación de puestos de trabajo), por nivel de educación. • Tiempo promedio que se gasta en el cuidado doméstico no pago de la familia, así como en el trabajo no pagado de asuntos familiares por mujeres, hombres y niños. • Proporción de solicitudes por padre o tutor para la atención certificada a niños, revisadas y atendidas durante el periodo del informe. • Proporción de trabajadores que pasaron de contratos precarios a estables durante el periodo del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción y frecuencia de empresas inspeccionadas en cuanto a conformidad con normas laborales y proporción de inspecciones que resultan en acción administrativa o legal. • Proporción de empresas inspeccionadas conformes con las normas laborales. • Proporción de personas empleadas, incluidas las del trabajo doméstico, cuyo nivel salarial está cubierto de acuerdo con legislación (ej: salario mínimo y/o fijación de salario) y/o procedimientos de fijación de salarios que involucren a socios (sindicatos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de fuerza laboral que toma alguna capacitación durante el tiempo de su empleo. • Proporción de personas desempleadas involucradas en mejora de habilidades o programas de capacitación, incluidos empleos financiados públicamente. • Mejoramiento en proporciones de ingresos secundarios y terciarios durante el periodo del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de trabajadores del sector informal que pasaron al sector formal durante el periodo del informe. • Proporción de niños económicamente activos. • Número estimado de fuerza laboral en el sector informal que recibe alguna clase de asistencia pública. • Proporción de personas objetivo desempleadas cubiertas por beneficios de desempleo / seguridad social.
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción empleo-población**por sexo, grupo objetivo y nivel de educación. • Proporción de trabajadores voluntarios de tiempo parcial y total de población empleada tiempo de parcial. • Proporción de mujeres con empleo asalariado en el sector no agrícola* • Proporción de trabajadores en empleo precario (ej: corto, término fijo, casual, de temporada, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. • Relación salarial hombres: mujeres, por sector y otros grupos objetivo. • Proporción de posiciones identificadas (altos ejecutivos, cargos gerenciales en servicio público/privado), ocupados por mujeres y otros grupos objetivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de trabajadores empleados luego de una mejora de habilidades y otros programas de capacitación, incluidos puestos financieros públicos. • Tasas de desempleo a largo plazo (1 año o más de desempleo), por género, grupos objetivo o regiones. • Distribución de fuerza labora por nivel de educación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de desempleo por sexo, grupos objetivo y nivel de educación (Registros LFS). • Incidencia de trabajo forzado, incluidas las peores formas de trabajo infantil y trabajo doméstico. • Casos reportados de violaciones al derecho al trabajo, incluido trabajo forzado, discriminación, peores formas de trabajo infantil y trabajo doméstico y terminación ilegal del empleo y proporción de víctimas que recibieron compensación adecuada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Índices Gini y proporción de los quintiles de ingresos más bajos/más altos o gastos de consumo (antes y después de los impuestos) 			

Fuente: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oficina Ecuador

Elaboración: David Guarderas

Adaptación de los indicadores estructurales propuestos por el ACNUDH al contexto ecuatoriano

Con respecto a la adaptación de los indicadores estructurales, no fue necesario realizar ninguna propuesta diferente, por cuanto aquellos planteados por el ACNUDH, hacen referencia a la normativa legal básica del derecho y se encuentran planteados en términos generales. Así, por ejemplo, el indicador “Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT relevantes al derecho al trabajo, ratificados por el Estado”, puede ser utilizado en cualquier contexto local, presentando diferencias únicamente en los resultados del indicador.

Sin embargo, en este apartado se analiza la utilidad de los indicadores para establecer el alcance de la normativa legal y su contribución al pleno goce del derecho al trabajo en el Ecuador.

De acuerdo a la metodología presentada en el capítulo anterior, los atributos del derecho que serán considerados son:

1. Acceso a trabajo decente y productivo
2. Condiciones de trabajo justas y seguras
3. Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional
4. Protección contra trabajo forzado y desempleo.

En este sentido, existen cuatro indicadores que son transversales para los cuatro atributos, y se analizarán por separado, su utilidad y relevancia en el contexto ecuatoriano:

Indicador 1

Nombre: Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT relevantes al derecho al trabajo ratificados por el Estado.

Análisis de utilidad y relevancia:

Los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, constituyen obligaciones jurídicas ineludibles, que de no ser cumplidas, pueden ocasionar fuertes demandas y sanciones en las cortes internacionales. Este hecho se convierte en uno de los pilares fundamentales que sostienen el tema de la disertación, por cuanto el pleno goce de derechos en la sociedad ecuatoriana, va más allá de la voluntad política de los gobernantes o de un giro ideológico momentáneo del Estado. La garantía, protección y respecto de los derechos humanos no es cuestionable, debido a que los instrumentos internacionales que los promueven, han sido suscritos y ratificados por el Ecuador. Por lo tanto, la creación de un sistema de indicadores que permita monitorear su cumplimiento y vigencia, se vuelve indispensable, más allá de todos los beneficios que el propio sistema puede generar para la elaboración de políticas públicas focalizadas.

Indicador 2

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho al trabajo en la Constitución.

Análisis de utilidad y relevancia:

Adicional a lo expuesto en el análisis del indicador 1, la Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, eleva el trabajo a la categoría de derecho, con lo cual, aparece una nueva obligación jurídica para el Estado en el plano nacional. En este sentido, el tratamiento de la variable trabajo bajo el enfoque de derechos, pretende dar escrito cumplimiento a una norma constitucional que no puede estar sujeta al plano discrecional.

Indicador 3

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas internas para implementar el derecho al trabajo, incluidos reglamentos sobre igualdad de oportunidades que eliminen las discriminaciones y medidas especiales para grupos objetivo –mujeres, niños, indígenas, migrantes, personas con discapacidad.

Análisis de utilidad y relevancia:

El conocimiento de la cobertura de leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos con respecto al derecho al trabajo, es fundamental para sustentar las acciones de política pública que el sistema de indicadores pretende medir. En el caso de no existir una base legal sólida, ninguno de los indicadores de proceso y resultado, tendrían posibilidades de mejorar con el paso del tiempo. Es decir, si no existe la normativa legal adecuada, la ejecución de planes y programas enfocados a alcanzar el pleno goce del derecho, no podría llevarse a cabo.

Indicador 4

Nombre: Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas por cada 100.000 personas, incluidos en sindicatos, involucradas en la promoción y protección del derecho al trabajo.

Análisis de utilidad y relevancia:

Este indicador es sumamente útil para evidenciar el grado de involucramiento de las personas en la problemática del empleo, considerando que el empoderamiento social, logra mejores resultados en la lucha por el pleno goce de derechos. Es decir, el indicador será una buena medida del interés de la sociedad por el estado y vigencia de sus derechos.

Ahora, para medir específicamente el **acceso a trabajo decente y productivo**, y, **condiciones de trabajo justas y seguras** (atributos 1 y 2 respectivamente), se utilizan los siguientes cinco indicadores:

Indicador 5

Nombre: Plazo y cobertura de política nacional de empleo total y productivo

Análisis de utilidad y relevancia:

Permite evidenciar el interés y compromiso del Estado para alcanzar mejores niveles de empleo en la sociedad.

Indicador 6

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas y procedimientos que garanticen condiciones laborales seguras y sanas, incluido el ambiente libre de acoso sexual y establecimiento de una entidad de seguimiento independiente.

Análisis de utilidad y relevancia:

Este indicador permite evidenciar la preocupación y compromiso del Estado con las condiciones del trabajo, considerando aspectos de discriminación, equidad y grupos vulnerables.

Indicador 7

Nombre: Máximo número de horas laborales por semana estipuladas en la ley

Análisis de utilidad y relevancia:

El indicador permitirá establecer las reglas de juego para otras mediciones. Es decir, el número máximo de horas laborables establecido por la ley, será uno de los criterios para medir el subempleo y conocer sobre las condiciones de trabajo en grupos vulnerables.

Indicador 8

Nombre: Edad mínima de empleo por tipo de ocupación

Análisis de utilidad y relevancia:

El indicador permite normar la edad mínima de trabajo por tipo de ocupación y establece directrices para la elaboración de planes y programas que busquen la inclusión de personas jóvenes en el mercado laboral.

Indicador 9

Nombre: Duración de licencia de maternidad, paternidad y parental y derechos a licencias médicas y proporción de salarios pagados durante el período de la cobertura

Análisis de utilidad y relevancia:

El indicador permite conocer que tan avanzada es la legislación laboral en cuanto al reconocimiento de aspectos integrales inherentes a las personas.

Adicionalmente, para medir específicamente **capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional** (atributo 3), se utilizan los siguientes dos indicadores:

Indicador 10

Nombre: Plazo y cobertura de la política nacional para la educación vocacional y mejora de habilidades

Análisis de utilidad y relevancia:

El indicador permite evidenciar si el Estado reconoce la libertad de las personas para elegir su ocupación y si presta los incentivos necesarios para el desarrollo de nuevas habilidades.

Indicador 11

Nombre: Proporción de regiones administrativas con agencias públicas especializadas para ayudar a las personas a encontrar trabajo

Análisis de utilidad y relevancia:

El indicador ayuda a conocer el nivel de desconcentración territorial de los servicios de ayuda para encontrar empleo. Lo anterior, en correspondencia con el enfoque de derechos, que considera aspectos de equidad también en el territorio.

Finalmente, para explorar exclusivamente la **protección contra el trabajo forzado y desempleo** (atributo 4), se utilizan los siguientes dos indicadores estructurales:

Indicador 12

Nombre: Plazo y cobertura de programas de concientización sobre estándares laborales

Análisis de utilidad y relevancia:

Permite conocer el interés y compromiso del Estado sobre el conocimiento general de las normas y estándares laborales.

Indicador 13

Nombre: Plazo y cobertura de la política para la eliminación del trabajo forzado, trabajo infantil, trabajos de migrantes y trabajo doméstico.

Análisis de utilidad y relevancia:

Evidencia el compromiso del Estado en contra la eliminación del trabajo forzado, trabajo infantil, trata de personas con fines de explotación laboral y otras formas de trabajo consideradas como precarias.

A manera de conclusión del proceso de adaptación de indicadores estructurales al contexto ecuatoriano, se puede decir que aunque estos puedan ser de alcance universal, son especialmente útiles y relevantes en el plano nacional para:

- a) Establecer el sustento legal para la elaboración de políticas públicas que promuevan el pleno goce del derecho al trabajo.
- b) Conocer las normas legales que el Estado debe proteger y respetar, para no cometer violaciones entorno al derecho, que puedan ser imputables tanto en el plano nacional, como internacional.
- c) Evidenciar el interés y compromiso del Estado para que la sociedad alcance el pleno goce del derecho al trabajo.
- d) Conocer el alcance de la normativa legal vigente y si es que existe la necesidad de reformas para viabilizar el enfoque de derechos en la sociedad.

Adaptación de los indicadores de proceso propuestos por el ACNUDH al contexto ecuatoriano

En el proceso de búsqueda de indicadores de proceso que reflejen de mejor manera la realidad ecuatoriana, se analizan por separado, cada uno de los indicadores propuestos por el ACNUDH para el plano universal, y se realiza una propuesta para el plano local. Cabe mencionar que en la mayoría de casos, un indicador propuesto por Naciones Unidas, se expresa en dos o más indicadores a ser contruidos con los datos disponibles, procurando siempre, estricta correspondencia con la realidad que el indicador inicial pretende evidenciar. A esto se suma, el apego total a la metodología expuesta en el capítulo anterior.

Finalmente, tal como se hizo en el apartado para la adaptación de los indicadores estructurales, se realiza un análisis de utilidad y relevancia para cada indicador, procurando determinar su contribución para alcanzar, mediante los instrumentos de política pública, mejores niveles en el goce del derecho al trabajo.

Para medir específicamente el **acceso a trabajo decente y productivo** (atributo 1), se plantean desde el ACNUDH, cinco indicadores que se presentan a continuación con su respectivo análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 14

Nombre ACNUDH: Proporción de población objetivo recibiendo apoyo efectivo para su entrada/regreso al mercado laboral

En el cuadro N° 4 se presenta la propuesta para el Ecuador del indicador 14, con su respectivo análisis de utilidad y relevancia:

Cuadro N° 4

Adaptación del indicador 14 al contexto ecuatoriano

Proporción de población objetivo recibiendo apoyo efectivo para su entrada/regreso al mercado laboral	
Indicador	Utilidad/relevancia
14.1 Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad	Si el porcentaje de personas desocupadas que recibe capacitación en programas estatales es alto, se podrá visualizar los esfuerzos del Estado para fomentar la entrada/regreso al mercado laboral. Lo anterior, procurando evidenciar situaciones de discriminación o vulnerabilidad, al desagregar las cifras por sexo y etnicidad.
14.2 Método de búsqueda de trabajo entre personas desocupadas, por sexo y etnicidad	Permitirá evidenciar si entre los métodos de búsqueda de empleo, se encuentra algún tipo de programa estatal
14.3 Razón por la que dejó de buscar trabajo entre personas desocupadas ocultas, por sexo y etnicidad	Muestra la percepción de las y los individuos acerca de las oportunidades en el mercado laboral. Lo anterior es un termómetro de las acciones de política pública que se están llevando a cabo
14.4 Nivel de instrucción de personas desocupadas, por sexo y etnicidad	Si el nivel de instrucción entre personas desocupadas mejora en distintos periodos de evaluación, nos da un parámetro para profundizar en las razones de dicha mejora y si estas pueden atribuirse a acciones de política pública

Fuente y elaboración: David Guarderas

Indicador 15

Nombre ACNUDH: Crecimiento anual de la tasa de empleo por nivel de educación

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 15, se ha propuesto únicamente el indicador, *tasa de crecimiento anual personas ocupadas por nivel de educación*, mismo que es particularmente útil para determinar qué tipo de instrucción poseen los ocupados que más crecen, y en este sentido, visualizar las acciones de política pública en torno a un nivel específico de la población.

Indicador 16

Nombre ACNUDH: Promedio de tiempo en trabajo doméstico o en empresas familiares no remunerado

En el cuadro N° 5 se presenta la propuesta para el Ecuador del indicador 16, con su respectivo análisis de utilidad y relevancia:

Cuadro N° 5

Adaptación del indicador 16 al contexto ecuatoriano

Promedio de tiempo en trabajo doméstico o en empresas familiares no remunerado	
Indicador	Utilidad/relevancia
16.1 Promedio de tiempo haciendo labores del hogar por nivel de instrucción, sexo y etnicidad	Permite evidenciar sobre quienes recae la mayor carga de trabajo en el hogar, en búsqueda de situaciones de vulnerabilidad en las personas
16.2 Porcentaje de personas haciendo trabajo doméstico no remunerado por nivel de instrucción, sexo y etnicidad	Establece el porcentaje de personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, siendo especialmente útil para establecer grupos vulnerables

Fuente y elaboración: David Guarderas

Indicador 17

Nombre ACNUDH: Proporción solicitudes para cuidado infantil aceptadas

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 17, se ha propuesto únicamente el indicador, *personas en la PEA que reciben servicio de guardería*. Esta es una medida importante al determinar las condiciones de trabajo de una persona. Por sobre todas las cosas, ninguna actividad productiva puede contraponerse a los roles de maternidad o paternidad inherentes al ser humano. En este sentido, si un trabajo otorga servicios de cuidado infantil, la productividad de madres o padres se incrementará notoriamente.

Indicador 18

Nombre ACNUDH: Proporción de personas ocupadas que fueron de contratos precarios a contratos estables durante el periodo reportado

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 18, se ha propuesto únicamente el indicador, *tipo de contrato por nivel de instrucción y sexo*, el cual permite, a través de un monitoreo periódico, analizar la precarización laboral.

Ahora, para medir específicamente las **acondiciones justas y seguras de trabajo** (atributo 2), se plantean desde el ACNUDH, tres indicadores. Sin embargo, los indicadores *proporción y frecuencia de empresas inspeccionadas de conformidad con estándares laborales; proporción de inspecciones resultando en acción administrativa o judicial; y, proporción de ocupados, incluyendo empleados domésticos, quienes tienen un salario cubierto bajo legislación*, no serán calculados por falta de confiabilidad en los registros administrativos que fueron proporcionados por el Ministerio de Relaciones Laborales. Adicionalmente, con base en la información disponible en el plano nacional, no se pudo encontrar un equivalente para los indicadores mencionados.

Para medir la **capacitación y desarrollo profesional** (atributo 3), se plantean desde el ACNUDH, 3 indicadores que se presentan a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 19

Nombre ACNUDH: Proporción de la fuerza laboral tomando algún tipo de capacitación durante el tiempo de su empleo.

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 19, se ha propuesto únicamente el indicador, *porcentaje de personas ocupadas y subocupadas recibiendo capacitación de programas estatales, por sexo y etnicidad*; siendo particularmente útil, para evidenciar los esfuerzos de los programas estatales que buscan promover el desarrollo profesional.

Indicador 20

Nombre ACNUDH: Proporción de personas desocupadas involucradas en programas de capacitación, incluyendo trabajo públicos.

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 20, se ha propuesto únicamente el indicador, *porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad*. Esta medición, junto con el indicador 19, permiten establecer si los programas estatales de capacitación se encuentran dirigidos principalmente a personas ocupadas o desocupadas.

Cabe mencionar que el indicador 20 que aporta al atributo *capacitación y desarrollo profesional*, es igual al indicador 14.1, utilizado para medir el atributo *acceso a trabajo decente y productivo*; con lo cual, se establece que un mismo indicador puede ser utilizado en dos contextos diferentes.

Indicador 21

Nombre ACNUDH: Mejoramiento de ratio de matriculación a nivel secundario y terciario en periodo reportado

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 21, se propone el indicador, *tasa neta de asistencia primaria, secundaria y superior, por sexo y etnicidad*, con el fin de conocer mediante una evaluación periódica, cómo mejora la capacitación formal de las personas en el Ecuador.

Finalmente, para medir específicamente la **protección contra trabajo forzado y desempleo** (atributo 4), se plantean desde el ACNUDH, 3 indicadores que se presentan a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 22

Nombre ACNUDH: Proporción de personas trabajadoras subocupadas que ahora son ocupadas en el periodo reportado.

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 22, se propone el indicador, *condición de actividad por sexo y etnicidad*, el cual a través de un monitoreo periódico, permite evidenciar cómo mejora o se deteriora, el tipo de ocupación de las personas. Esto constituye una buena medida para evidenciar si existen acciones de política pública en contra del trabajo forzado y el desempleo.

Indicador 23

Nombre ACNUDH: Proporción de niños y niñas en la PEA

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 23, se propone el indicador, *porcentaje de niños y niñas en la PEA por edad y etnicidad*, el cual es particularmente útil para evidenciar la realidad de este grupo vulnerable. La intención es mostrar reducciones en el indicador y establecer correlaciones con los planes y programas nacionales que llevan a cabo para el efecto.

Indicador 24

Nombre ACNUDH: Proporción de personas desocupadas cubiertas por seguro de desempleo o beneficios de seguridad social

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 24, se propone el indicador, *porcentaje de personas desocupadas afiliadas a la seguridad social, por sexo y etnicidad*. La intención es conocer los mecanismos de protección con que cuentan las personas desempleadas y como estos evolucionan a lo largo del tiempo. Para el caso ecuatoriano, se consideran los siguientes seguros: IESS, seguro general; IESS, seguro voluntario; seguro campesino; ISSFA, ISSPOL; seguro privado con hospitalización; seguro privado sin hospitalización; y, seguros municipales.

A manera de conclusión del proceso de adaptación de indicadores de proceso al contexto ecuatoriano, se puede afirmar que el 90% de los indicadores propuestos por el ACNUDH, tiene uno o más indicadores factibles de calcular con la información disponible en el plano nacional. Adicionalmente, las mediciones propuestas por el autor de esta disertación, no alteran la naturaleza de lo que se pretende evidenciar en cada uno de los atributos, tal como se ha demostrado en los análisis individuales de utilidad y relevancia realizados para cada indicador. Finalmente, el cuadro N° 6 presenta un resumen de la adaptación a la realidad ecuatoriana de los indicadores de proceso.

Cuadro N° 6

Indicadores de proceso propuestos por ACNUDH y su adaptación al contexto ecuatoriano

Atributo: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo	
ONU	Contexto Ecuatoriano
Proporción de población objetivo recibiendo apoyo efectivo para su entrada/regreso al mercado laboral	Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad
	Método de búsqueda de trabajo entre personas desocupadas, por sexo y etnicidad
	Razón por la que dejó de buscar trabajo entre personas desocupadas ocultas, por sexo y etnicidad
	Nivel de instrucción de personas desocupadas, por sexo y etnicidad
Crecimiento anual de la tasa de empleo por nivel de educación	Tasa de crecimiento anual personas ocupadas por nivel de educación
Promedio de tiempo en trabajo domestico o en empresas familiares no remunerado	Promedio tiempo haciendo labores del hogar por nivel de instrucción, sexo y etnicidad
	Porcentaje de personas haciendo trabajo domestico no remunerado por nivel de instrucción, sexo y etnicidad
Proporción de solicitudes para cuidado infantil aceptadas	Personas en la PEA que reciben servicio de guardería
Proporción de personas ocupadas que fueron de contratos precarios a contratos estables durante el periodo reportado	Tipo de contrato por nivel de instrucción y sexo
Atributo: Condiciones justas y seguras de trabajo	
Proporción y frecuencia de empresas inspeccionadas por conformidad con estándares laborales, y, proporción de inspecciones resultando en acción administrativa o judicial	
Proporción de empresas inspeccionadas que conforme a estándares laborales	
Proporción de personas ocupadas, quienes tienen un salario cubierto bajo legislación (ejemplo: salario mínimo) y/o procesos de fijar salarios que involucra aliados sociales (sindicatos)	Lista de ocupaciones con salarios básicos establecidos por ley
	Proporción de ocupados en estas ocupaciones
	Sistema tripartito de fijación de salario
Atributo: Capacitación y desarrollo profesional	
Proporción de la fuerza laboral tomando algún tipo de capacitación durante el tiempo de su empleo	Porcentaje de personas ocupadas y subocupadas recibiendo capacitación de programas estatales, por sexo y etnicidad
Proporción de personas desocupadas involucradas en programas de capacitación, incluyendo trabajo públicos	Porcentaje de personas desocupadas recibiendo capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad
Mejoramiento de ratio de matriculación a nivel secundario y terciario en periodo reportado	Tasa neta de asistencia primaria, secundaria y superior
Atributo: Protección contra trabajo forzado y desempleo	
Proporción de personas trabajadoras subocupadas que ahora son ocupadas en el periodo reportado	Condición de Actividad por sexo y etnicidad
Proporción de niños y niñas en la PEA	Porcentaje de niños y niñas en la PEA por edad y etnicidad
Proporción de personas desocupadas cubiertas por seguro de desempleo o beneficios de seguridad social	Porcentaje de personas desocupadas afiliadas a la seguridad social, por sexo y etnicidad

Fuente: David Guarderas; Proyecto SIDERECHOS, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Elaboración: David Guarderas

Adaptación de los indicadores de resultado propuestos por el ACNUDH al contexto ecuatoriano

Siguiendo con el esquema de adaptación a la realidad ecuatoriana de los indicadores propuestos por Naciones Unidas, se analizan ahora los indicadores de resultado. En primer lugar, conviene resaltar lo expuesto en el marco metodológico del capítulo anterior, que señala la utilidad de los indicadores de resultado para describir los logros, individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho humano en un determinado contexto. En segundo lugar, es necesario aclarar que si bien la configuración metodológica utilizada, mantiene una relación de causa – efecto entre los tres niveles de indicadores, éstos no son capaces, por sí solos, de confirmar dicha relación. Para poder hacerlo, es necesario investigar una a una, las posibles razones que pueden producir una causalidad, lo cual debe ser objeto de otras investigaciones específicamente diseñadas.

Ahora, para medir el **acceso a trabajo decente y productivo** (atributo 1), el ACNUDH ha propuesto cuatro indicadores que serán expuestos a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 25

Nombre ACNUDH: Relación de empleo a población por sexo, grupos objetivo y nivel de educación

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 25, se propone el indicador, *relación de personas ocupadas a PEA, por sexo, etnicidad, área, edad y nivel de instrucción*. La utilidad de esta medida es conocer el estado del empleo y su evolución, con el mayor nivel de desagregación posible. Si bien es cierto, los indicadores con enfoque de derechos permiten explorar nuevas realidades en torno a la variable que se esté tratando, no podemos dejar de lado la medición del objetivo primordial de cualquier política pública en torno al trabajo. Este objetivo, es incrementar los niveles de empleo para todas y todos, para lo cual, el indicador planteado por el autor de esta disertación, cumple un papel primordial.

Indicador 26

Nombre ACNUDH: Proporción de personas que trabajan voluntariamente a medio tiempo, del total de personas trabajadoras a medio tiempo

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 26, se propone el indicador, *porcentaje de personas empleadas a tiempo completo y a medio tiempo que desean trabajar más horas, por sexo, etnicidad, área y edad*. A criterio del autor de esta disertación, la medida es especialmente útil para conocer las preferencias de los y las ecuatorianas en torno a la elección ocio-consumo.

Indicador 27

Nombre ACNUDH: Porcentaje de mujeres ocupadas remuneradas en sectores no agrícolas

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 27, se acepta sin modificaciones, el enunciado propuesto por ACNUDH. Este indicador es especialmente útil para evidenciar situaciones de discriminación en contra de las mujeres, luego de mediciones con carácter periódico. Una vez que se calculen y presenten los valores de los indicadores en el capítulo siguiente, se podrá concluir sobre los niveles de precarización laboral en mujeres y otros grupos vulnerables.

Indicador 28

Nombre ACNUDH: Proporción de personas ocupadas precarias

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 28, se propone el indicador, *tipo de contrato y nivel de instrucción por sexo y etnicidad*, mismo que contribuye a evidenciar situaciones de precarización laboral y constituye una guía para la formulación de política pública focalizada.

Para medir **condiciones justas y seguras de trabajo** (atributo 2), el ACNUDH ha propuesto dos indicadores que serán expuestos a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 29

Nombre ACNUDH: Relación de salarios de mujeres a hombres por sector, sexo, etnicidad, edad y nivel de escolaridad

Análisis de utilidad y relevancia:

Con objeto de evidenciar claramente la discriminación salarial, para el indicador 29 se propone la elaboración de una *Regresión minceriana con las variables sector, sexo, etnicidad, edad y nivel de escolaridad*. La utilidad de dicha regresión es establecer la contribución (negativa o positiva) de los distintos grupos objetivos en la formación del ingreso de los asalariados. Adicionalmente, se propone el indicador, *promedio de renta primaria por nivel de instrucción, sexo, etnicidad y área*, mismo que permitirá reafirmar los resultados de discriminación salarial que sean encontrados con el uso de la regresión minceriana.

Indicador 30

Nombre ACNUDH: Proporción de posiciones identificadas (directivos, gerentes públicos y privados) dadas a grupos objetivo

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 30, se propone el indicador, *grupo de ocupación por área, sexo y etnicidad*, el cual permitirá evidenciar nuevas situaciones de inequidad, esta vez con respecto a la distribución de las ocupaciones mejor remuneradas.

Para medir ***capacitación y desarrollo profesional*** (atributo 3), el ACNUDH ha propuesto dos indicadores que serán expuestos a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 31

Nombre ACNUDH: Desocupación a largo plazo (un año o más de desocupación)

Análisis de utilidad y relevancia:

La propuesta para el indicador 31 es el indicador *desempleo estructural por sexo y etnicidad*, mismo que permite evidenciar que grupos vulnerables presentan mayor dificultad para reingresar al mercado laboral. Esta medición constituye una nueva señal para la correcta focalización de políticas públicas.

Indicador 32

Nombre ACNUDH: Distribución de la fuerza laboral por nivel de educación

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 32, la propuesta consiste en medir la *condición de actividad por nivel de instrucción, etnicidad y sexo*. Esta medida es particularmente relevante para conocer qué nivel de instrucción presenta cada categoría de ocupación, y de esta manera, direccionar mejor las políticas educativas.

Para medir la ***protección contra trabajo forzado y desempleo*** (atributo 4), el ACNUDH ha propuesto dos indicadores que serán expuestos a continuación con su correspondiente análisis de utilidad y relevancia.

Indicador 33

Nombre ACNUDH: Tasa de desocupación por sexo, grupos objetivo y nivel de educación

Análisis de utilidad y relevancia:

Con respecto al indicador 33, se acepta completamente el indicador propuesto por Naciones Unidas, toda vez que éste es fundamental para medir el objetivo principal de la política pública del trabajo. Dicho objetivo consiste en la reducción equitativa de la tasa de desocupación, medida para grupos vulnerables.

Indicador 34

Nombre ACNUDH: Incidencia de trabajo forzoso, incluyendo domestico no remunerado y trabajo infantil

Análisis de utilidad y relevancia:

Otro de los aspectos fundamentales que las medidas estatales deben apuntar a reducir, es sin duda, la incidencia de trabajo forzoso y trabajo infantil. Para medir aquello, se plantea el uso de dos indicadores, el *porcentaje de trabajo doméstico no remunerado por sexo y etnicidad*; y, el *porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian por etnicidad*. La cuantificación periódica de estos indicadores permitirá evaluar la interacción de múltiples planes y programas, enfocados en alcanzar el pleno goce del derecho al trabajo, sobre todo, para grupos vulnerables.

Finalmente, para concluir con la adaptación de los indicadores de resultado propuestos por el ACNUDH a la realidad y contexto ecuatoriano, se expone un indicador común para los 4 atributos.

Indicador 35

Nombre ACNUDH: Coeficiente de Gini de ingresos

Análisis de utilidad y relevancia:

Para el indicador 35, se plantea el *Coeficiente de Gini de consumo por provincia*, que en mientras presente valores más cercanos a cero, evidenciará los resultados de una política pública enfocada en alcanzar mejores niveles de equidad, a través de un mejor tratamiento de la variable trabajo.

Cabe mencionar que el 100% de los indicadores de resultados propuestos por Naciones Unidas, tiene uno o más indicadores que serán contruidos con la información disponible en el plano nacional. El resumen de la adaptación propuesta se presenta en el cuadro N° 7.

Una vez establecidos los indicadores que serán aplicables a la realidad ecuatoriana en cada uno de los niveles (estructurales, proceso y resultado), se procederá a la construcción de los mismos y la consecuente presentación de resultados. Cabe mencionar que para cada indicador se busca alcanzar el mayor nivel de desagregación posible, con el fin de evidenciar las situaciones de discriminación y vulnerabilidad que pueden presentarse en grupos específicos. Lo anterior, en correspondencia con los principios del enfoque de derechos humanos, que buscan contar con información adecuada para la generación de políticas públicas focalizadas de gran impacto social.

Cuadro N° 7

Indicadores de resultado propuestos por ACNUDH y su adaptación al contexto ecuatoriano

Atributo: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo	
ONU	Contexto ecuatoriano
Relación de empleo a población por sexo, grupos objetivo y nivel de educación	Relación de personas ocupadas a PEA por sexo, etnicidad, área, edad y nivel de instrucción
Proporción de personas que trabajan voluntariamente a medio tiempo, del total de personas trabajadoras a medio tiempo	Porcentaje de personas empleadas a tiempo completo y a medio tiempo que desean trabajar más horas, por sexo, etnicidad, área y edad.
Porcentaje mujeres ocupadas remuneradas en sectores no agrícolas	
Proporción de personas ocupadas precarias	Tipo de contrato y nivel de instrucción, por sexo y etnicidad
Atributo: Condiciones justas y seguras de trabajo	
Relación de salarios de mujeres a hombres por sector y otros grupos objetivo	Regresión minceriana que mide discriminación salarial
	Promedio de renta primaria por grupos objetivo
Proporción de posiciones identificadas (directivos, gerentes públicos y privados) dadas a grupos objetivo	Grupo de ocupación por área, sexo y etnicidad
Atributo: Capacitación y desarrollo profesional	
Desocupación a largo plazo (un año o más de desocupación)	Desempleo estructural por sexo y etnicidad
Distribución de la fuerza laboral por nivel de educación	Condición de actividad por nivel de instrucción, sexo y etnicidad
Atributo: Protección contra trabajo forzado y desempleo	
Tasa de desocupación por sexo, grupos objetivo, nivel de educación	Tasa de desocupación por sexo, grupos objetivo, nivel de educación
Incidencia de trabajo forzoso incluyendo domestico no remunerado y trabajo infantil	Porcentaje de trabajo doméstico no remunerado por sexo y etnicidad
	Porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian por etnicidad
Coeficiente de Gini de ingresos*	Coeficiente de Gini de consumo

Fuente: David Guarderas; Proyecto SIDERECHOS, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Elaboración: David Guarderas

* Común a todos los atributos

Presentación de resultados del sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos

En esta sección se presentan los resultados de los indicadores estructurales, de proceso y resultado que conforman el sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos. En este punto, es conveniente exponer las razones por las cuales se le ha otorgado la categoría de sistema al conjunto de indicadores que se presentará a continuación.

Un sistema es entendido como una configuración ordenada de información que mantiene una lógica secuencial en el ingreso, procesamiento y salida de datos. En este sentido, el marco metodológico del ACNUDH utilizado para la construcción de los indicadores del derecho al trabajo, permite presentar una configuración ordenada de información a través de tres categorías bien definidas: indicadores estructurales, de proceso y resultado. Adicionalmente, al adoptar la subdivisión de un derecho entorno a sus atributos, el ordenamiento de los indicadores conformando un sistema es aún más evidente.

Con respecto a la lógica secuencial en el tratamiento de la información, la metodología del ACNUDH plantea que existe una relación de causalidad entre las distintas categorías de indicadores. Por lo tanto, se evidencia de manera clara la segunda característica de la definición de sistema expuesta inicialmente. A través de estos argumentos, la presentación de los resultados de los indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, puede considerarse hecha a través de un *sistema*.

Indicadores estructurales

Para la presentación de los indicadores estructurales, se estimó conveniente analizar individualmente cada uno de los 13 indicadores y exponer los principales hallazgos, a la luz del enfoque teórico de esta disertación. En este sentido, en lugar de presentar el resultado *bruto* de cada indicador, se opta por analizar y contextualizar dicho resultado, explicando su aporte para la medición del trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos. Sin embargo, si se desea consultar la *materia prima* de los indicadores, éstos se adjuntan en el Anexo B.

Para los atributos del derecho al trabajo, ***acceso a trabajo decente y productivo; condiciones de trabajo justas y seguras; capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional; y, protección contra el trabajo forzado y el desempleo***, se presentan cuatro indicadores (cuadros 8, 9, 10 y 11, respectivamente).

Cuadro N° 8

Indicador 1: Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT relevantes al derecho al trabajo ratificados por el Estado

Hallazgos	Análisis
El Ecuador ha ratificado 72 de 150 tratados internacionales vigentes respecto al derecho al trabajo, es decir el 48%. Los ámbitos de intervención de los tratados incluyen: protección contra trabajo forzoso, derecho de sindicación, seguridad de enfermedad, protección a grupos vulnerables, descanso semanal, vacaciones pagadas, edad mínima para pescadores, seguridad social, discriminación, igualdad de género, trabajo forzado y trata, entre otros.	Existe la suficiente normativa legal que ampare el pleno goce del derecho al trabajo por parte de las y los habitantes del Ecuador. Dicha normativa es congruente con el enfoque de derechos, por cuanto aborda diversidad de aspectos que buscan reducir la discriminación y vulnerabilidad en las personas, así como fomentar mejores niveles de equidad en la sociedad.

Fuente: Tratados internacionales ratificados por el Estado

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 9

Indicador 2: Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho al trabajo en la Constitución

Hallazgos	Análisis
Existen 11 artículos diferentes con contenido sobre el trabajo tratado como derecho. Se establecen los ámbitos de obligación del Estado y se profundiza sobre los aspectos instrumentales del derecho, haciendo énfasis en aspectos de dignidad y no discriminación para grupos vulnerables.	Existe un fuerte respaldo constitucional a los diferentes aspectos que rodean al trabajo tratado como derecho. Se consideran aspectos como remuneraciones justas, condiciones saludables de trabajo, seguridad social para todas y todos, no discriminación en el trabajo, protección ante la explotación laboral y la dignidad como principio transversal.

Fuente: Constitución Política de la República del Ecuador, 2008.

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 10

Indicador 3: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas internas para implementar el derecho al trabajo

Hallazgos	Análisis
Se han identificado 19 normativas internas para la implementación del derecho al trabajo, dentro de las cuales se incluyen leyes orgánicas y especiales sobre el derecho al trabajo, leyes sobre asociación para el trabajo y la producción, ley sobre discapacidades, codificación de ley del anciano, ley de desarrollo agrario, Codificación del Código de la niñez y adolescencia, ley de la juventud y ley de amparo laboral. En estos instrumentos se hace referencia a grupos vulnerables y se consideran aspectos de justicia y dignidad humana como elementos transversales.	Existe la suficiente normativa legal que ampare el pleno goce del derecho al trabajo por parte de las y los habitantes del Ecuador. Dicha normativa es congruente con el enfoque de derechos, por cuanto aborda diversidad de aspectos que buscan reducir la discriminación y vulnerabilidad de en las personas, así como fomentar mejores niveles de equidad en la sociedad.

Fuente: Normativa legal ecuatoriana vigente; Sistema LEXIS

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 11

Indicador 4: Número de organizaciones no gubernamentales registradas para la promoción y protección del derecho al trabajo

Hallazgos	Análisis
Según el Registro Único de Organizaciones no Gubernamentales de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, existen 1.767 organizaciones que han obtenido personería jurídica en el ex Ministerio de Trabajo (hoy Ministerio de Relaciones laborales).	Se evidencia una importante participación de la sociedad civil en aspectos relacionados con la promoción y protección de sus derechos. La conciencia colectiva ha evolucionado en pos de mejores condiciones laborales y se muestra favorable a establecer procesos de conquistas laborales.

Fuente: Registro único de organizaciones no gubernamentales, Secretaría de Pueblos y Nacionalidades
Elaboración: David Guarderas

Para los atributos del derecho al trabajo, **acceso a trabajo decente y productivo**, y, **condiciones de trabajo justas y seguras**, se presentan cinco indicadores (cuadros 12, 13, 14, 15 y 16 respectivamente).

Cuadro N° 12

Indicador 5: Plazo y cobertura de política nacional de empleo total y productivo

Hallazgos	Análisis
El Plan Nacional para el Buen Vivir constituye el principal instrumento de planificación de la política del Estado, y a través de sus objetivos 1 y 6, establece las metas nacionales para garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Nuevamente se evidencian criterios transversales de inclusión de grupos vulnerables como lineamientos para el diseño de políticas públicas con carácter focalizado.	A más de contar con una base legal sumamente amplia para garantizar el pleno goce del derecho al trabajo, el Ecuador tiene claros los objetivos del proceso de desarrollo, plasmados en un instrumento de alcance nacional, que también considera al trabajo como un derecho humano. En este sentido, se presenta una clara coherencia entre los tratados internacionales ratificados por el Estado, la Constitución, las normas legales internas y el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009.
Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 13

Indicador 6: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas y procedimientos que garanticen condiciones laborales seguras y sanas, incluido el ambiente libre de acoso sexual

Hallazgos	Análisis
La legislación ecuatoriana incluye varios instrumentos y artículos que promueven no solo mayores niveles de empleo, sino también la existencia de condiciones adecuadas y dignas para el desenvolvimiento de ésta capacidad humana. Adicionalmente, de manera explícita, el Código Penal tipifica como delito solicitar favores de naturaleza sexual en el ámbito laboral	El Código del trabajo presenta un detalle minucioso de normas que favorecen a menores de edad, mujeres, minorías y otros grupos vulnerables. Adicionalmente, busca generar las mejores condiciones dentro de los distintos ámbitos de trabajo, preocupándose por la salud ocupacional, riesgos laborales, comedores, acoso sexual, entre otros aspectos. De igual manera, insta mecanismos e instancias de verificación para dar cumplimiento a lo estipulado en sus artículos.

Fuente: Normativa legal ecuatoriana vigente; Sistema LEXIS
Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 14

Indicador 7: Máximo número de horas laborales por semana estipuladas en la ley

Hallazgos	Análisis
En la codificación del Código del Trabajo, se estipula el tiempo máximo de la jornada laboral en 8 horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta semanales. Adicionalmente, se establece que el tiempo máximo en subsuelo será de 6 horas.	El establecimiento del tiempo máximo para la jornada laboral, responde a un proceso arduo de luchas y conquistas sociales, por parte de las diferentes asociaciones de trabajadores a lo largo de la historia del país. Cabe mencionar que la jornada de 8 horas diarias, es considerada un estándar dentro de las legislaciones laborales de gran parte de los países del mundo.

Fuente: Codificación del código del trabajo
Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 15

Indicador 8: Edad mínima de empleo por tipo de ocupación

Hallazgos	Análisis
El Código de la niñez y adolescencia, fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, salvo para los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas.	La sola existencia de una edad mínima para trabajar, es un elemento importante en el afán de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Adicionalmente, dada la idiosincrasia propia de nuestro pueblo, el instrumento normativo también fija los parámetros para los trabajos de naturaleza ancestral, a fin de que éstos tampoco vulneren los derechos de la niñez y la adolescencia.

Fuente: Código de la niñez y la adolescencia
Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 16

Indicador 9: Duración de licencia de maternidad, paternidad y parental; derechos a licencias médicas y proporción de salarios pagados durante el período de la cobertura

Hallazgos	Análisis
Tanto la Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP, la Codificación del Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, establecen los criterios bajo los cuales, se otorgan los beneficios de maternidad y paternidad, así como otras compensaciones por enfermedad y calamidad doméstica	Más allá de la duración específica de las licencias de paternidad o maternidad y las compensaciones monetarias por calamidades domésticas, el hecho de que el Ecuador cuente con este tipo de beneficios tipificados en la ley, presenta garantías importantes para el pleno goce del derecho al trabajo.

Fuente: Ley Orgánica del Servicio Público, Codificación del Código del trabajo, Ley de Seguridad Social.
Elaboración: David Guarderas

Para el atributo del derecho al trabajo, **capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional**, se presentan dos indicadores (cuadros 17 y 18 respectivamente).

Cuadro N° 17

Indicador 10: Plazo y cobertura de la política nacional para la educación vocacional y mejora de habilidades

Hallazgos	Análisis
Siendo el Plan Nacional para el Buen Vivir el instrumento fundamental de la planificación de la política pública, el objetivo 6 plantea “Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo”. Adicionalmente, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional tiene 4.574 cursos para formar y capacitar a 70.497 participantes por año, en los Centros Operativos y Coordinaciones a nivel nacional, haciendo énfasis en los grupos menos favorecidos	El hecho de que exista una política nacional para fomentar la capacitación y mejora de habilidades, da cuenta de los esfuerzos estatales por promover el desarrollo de las y los trabajadores. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta, si es que dicha política se encuentra dado los resultados deseados. En todo caso, por primera vez en la historia nacional, se puede hablar de que la promoción del empleo, ocupa un sitio de <i>política de Estado</i> .

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir, SENPLADES 2009.

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 18

Indicador 11: Proporción de regiones administrativas con agencias públicas especializadas para ayudar a las personas a encontrar trabajo

Hallazgos	Análisis
El Ministerio de Relaciones Laborales ha instalado oficinas de colocación y capacitación en Quito, Cuenca y Machala. En tres de las 9 regiones del país hay oficinas gubernamentales, lo cual representa el 33%.	La desconcentración regional bajo una lógica de equidad territorial, constituye actualmente una política de Estado. Se espera que en el corto plazo, todos los servicios que prestan las Instituciones Públicas, puedan ser llevados al territorio. Una vez más, se evidencia la transversalidad el principio de equidad de la política pública con respecto al empleo, en correspondencia con el enfoque de derechos humanos.

Fuente: Ing. Gabriela Maldonado, Ministerio de Relaciones Laborales

Elaboración: David Guarderas

Finalmente, para el atributo del derecho al trabajo, **protección contra el trabajo forzado y desempleo**, se presentan dos indicadores (cuadros 19 y 20 respectivamente).

Cuadro N° 19

Indicador 12: Plazo y cobertura de programas de concientización sobre estándares laborales

Hallazgos	Análisis
El Ministerio de Relaciones Laborales, se encuentra llevando a cabo varios proyectos de inversión, por un monto aproximado de 4 millones de dólares para el 2011, con objeto de capacitar a empleados y empleadores, sobre la normativa legal que ampara al derecho al trabajo.	La difusión masiva sobre las disposiciones legales relativas al derecho al trabajo, contribuyen de manera importante, a concientizar a la ciudadanía sobre sus deberes y derechos, reduciendo la vulnerabilidad de las personas por desconocimiento de causa.

Fuente: Programación Anual de Inversiones 2011, Ministerio de Relaciones Laborales, Sistema e-SIGEF

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 20

Indicador 13: Plazo y cobertura de la política para la eliminación del trabajo forzado, trabajo infantil, trabajos de migrantes y trabajo doméstico.

Hallazgos	Análisis
En el Ecuador existen políticas de Estado encaminadas a la eliminación de diversas formas de explotación laboral, dentro de las cuales se encuentra la política 1.3 y 6.2 del PNBV. Adicionalmente, existen programas de distintos ministerios en temas de erradicación del trabajo infantil, erradicación del trabajo forzado, inclusión de personas migrantes y trabajo doméstico digno.	La erradicación del trabajo infantil, protección contra la trata de personas y otras formas de explotación, reconocimiento del trabajo doméstico e inclusión de las personas migrantes, constituyen elementos transversales de la política pública ecuatoriana. Sin embargo, el riesgo de caer en la pura retórica, es alto. La implementación de este tipo de políticas tiene un alto costo económico, en un contexto de volatilidad de los ingresos fiscales. De todas maneras, es sumamente valioso que por primera vez en la historia, se consideren aspectos de protección de la dignidad humana, en la planificación de los planes y programas estatales.

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir, SENPLADES 2009. Programación Anual de Inversiones 2011, sistema e-SIGEF.

Elaboración: David Guarderas

Hasta el momento se han presentado los resultados de los indicadores estructurales para medir el trabajo en el Ecuador bajo el enfoque de derechos. Una síntesis de los principales hallazgos encontrados, se expondrá dentro de las conclusiones finales de esta disertación. Sin embargo, cabe mencionar que el principal aporte de los indicadores analizados, fue determinar que el Ecuador cuenta con una amplia base legal que ampara el pleno goce del derecho al trabajo. De igual manera, se evidencian de manera transversal, los principios del enfoque de derechos en las políticas públicas estatales que han sido consideradas.

Indicadores de proceso

Antes de exponer cada uno de los indicadores de proceso, es necesario aclarar que el procesamiento de datos de la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU), publicada por el INEC, requirió de una carga operativa sumamente grande y altamente costosa, con el objeto de alcanzar los niveles de desagregación necesarios, en concordancia con el enfoque de derechos. En este sentido, se consultaron los resultados de un procesamiento piloto de datos realizado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el marco del Proyecto SIDERECHOS. El autor de esta disertación fue parte del equipo de diseño del Proyecto, así como administrador de varios contratos de consultoría para el procesamiento de datos.

Finalmente, se debe mencionar que las cifras resultado del cruce de variables de la ENEMDU, fueron presentadas por el proyecto SIDERECHOS, sin contexto alguno (*solo procesamiento de datos*). En este sentido, uno de los valores agregados de la disertación, es la interpretación de las cifras a la luz del *enfoque de derechos humanos* y su correspondiente aporte a las *teorías del desarrollo*, tal como

se sustentó en la fundamentación teórica. Es decir, ***se utilizaron cifras aisladas y se construyó un sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos.***

A continuación se presentan los resultados de los indicadores de *proceso* utilizados para medir el derecho al trabajo en el Ecuador. Adicionalmente, se realiza una interpretación de los valores obtenidos, procurando siempre, evidenciar situaciones de discriminación y vulnerabilidad en los grupos objetivos.

Indicador 14

Nombre: Proporción de población objetivo recibiendo apoyo efectivo para su entrada/regreso al mercado laboral

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

Para determinar el porcentaje de población objetivo que recibe algún tipo de apoyo para entrar o regresar al mercado laboral, se realizan cuatro mediciones que responden a la disponibilidad de información y su relevancia dentro del contexto ecuatoriano, tal como se vio en el capítulo anterior.

14.1 Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales²⁹, por sexo y etnicidad

En el cuadro N° 21 se presentan los resultados para el indicador 14.1.

Cuadro N° 21
Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad

Condición de Actividad	En los últimos 12 meses, ¿asistió o asiste al SECAP?	Hombre (%)	Mujer (%)	Indígena (%)	Blanca mestiza (%)	Afroecuatoriana (%)	Total (%)
Personas desocupadas	<i>Si</i>	4	4	9	4	8	4
	<i>No</i>	96	96	91	96	92	96
	Total	100	100	100	100	100	100
	Total número	141.261	165.540	7.221	284.592	14.988	306.801

Fuente: INEC, ENEMDUR
Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El porcentaje de personas desempleadas que reciben capacitación es del 4%, tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, al observar la etnicidad de los sujetos, se evidencia que el porcentaje aumenta al 9 y 8% para personas indígenas y afroecuatorianas, respectivamente. El

²⁹ El SECAP es considerado como la principal instancia de capacitación estatal, sin que esto excluya a otros programas que se lleven a cabo a nivel ministerial.

resultado anterior muestra que existe el doble de interés por capacitarse en personas de grupos étnicos considerados vulnerables. De igual manera, el dato podría evidenciar que la focalización de los programas de capacitación que brinda el SECAP, está en mayor parte dirigida a personas indígenas y afroecuatorianas.

14.2 Método de búsqueda de trabajo entre personas desocupadas, por sexo y etnicidad

En el cuadro N° 22 se presentan los resultados para el indicador 14.2.

Cuadro N° 22
Método de búsqueda de trabajo entre personas desocupadas, por sexo y etnicidad

<i>Método</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Total (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca ó mestiza (%)</i>	<i>Afroecuatoriana (%)</i>
<i>Acudir a sitios de contratación temporal</i>	6,0	3,9	4,9	5,9	4,6	9,3
<i>Hablar con amigos o parientes</i>	29,2	22,4	25,6	10,5	25,8	32,9
<i>Buscar en la prensa o radio</i>	4,8	7,1	6,0	4,2	6,2	5,0
<i>Acudir a agencias de empleo</i>	3,5	3,6	3,5		3,4	7,1
<i>Tratar de establecer su propio taller, negocio</i>	1,0	1,7	1,4		1,3	3,6
<i>Asistir a entrevistas</i>	2,0	3,8	2,9	2,5	3,0	2,7
<i>Colocar carteles en tiendas o negocios</i>	0,3	0,1	0,2		0,2	
<i>Buscar por Internet</i>	3,7	3,6	3,7		4,1	
<i>Enviar hoja de vida</i>	16,8	14,8	15,7	0,5	16,8	10,4
<i>Otra gestión</i>	0,5	0,4	0,4		0,5	0,6
<i>No realizó ninguna gestión</i>	32,2	38,6	35,6	76,3	34,3	28,4
Total personas desocupadas (nacional)	100	100	100	100	100	100
Total número	215.833	246.890	462.723	18.231	416.327	28.166

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El método más utilizado de búsqueda de trabajo entre desocupados es hablar con amigos o parientes, en espera de alguna recomendación o ayuda. Sorprende el dato de “no realizó ninguna gestión”, con el 39% de las mujeres y el 32% de los hombres, mientras que en el caso indígena, el porcentaje alcanza el 76%. Sin embargo, el indicador no permite evidenciar la existencia de programas de estatales de apoyo para el reingreso al mercado laboral de personas desempleadas.

14.3 Razón por la que dejó de buscar trabajo entre personas desocupadas ocultas, por sexo y etnicidad

En el cuadro N° 23 se presentan los resultados para el indicador 14.3.

Cuadro N° 23

Razón por la que dejó de buscar trabajo entre personas desocupadas ocultas, por sexo y etnicidad

<i>Razón</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Total (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca ó mestiza (%)</i>	<i>Afro ecuatoriana (%)</i>	<i>Total (%)</i>
<i>Traba. ocasional</i>	9,6	3,2	5,9	5,3	6,2	3,0	5,9
<i>Tiene trabajo para empezar inmediatamente</i>	1,8	0,2	0,9		0,9	2,7	0,9
<i>Espera respuesta a una gestión</i>	6,8	3,5	4,9	1,8	5,1	6,4	4,9
<i>Espera respuesta de un empleador</i>	7,6	4,9	6,0	4,3	6,4	2,8	6,0
<i>Espera cosecha o temporada de trabajo</i>	14,5	7,0	10,1	11,6	9,8	12,9	10,1
<i>Piensa que no le darán trabajo</i>	16,0	18,6	17,5	6,9	18,6	17,1	17,5
<i>No cree poder encontrar</i>	43,7	62,6	54,6	70,1	53,1	55,1	54,6
<i>Total personas desocupadas (nacional)</i>	100	100	100	100	100	100	100
Total número	69.495	95.182	164.677	13.913	142.774	7.989	164.676

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Con respecto a la razón por la que una persona dejó de buscar trabajo, en el cuadro N° 23 se evidencia que la principal razón, en todos los niveles de desagregación, es “no cree poder encontrar”. Este dato es aún más alarmante para las personas indígenas, alcanzando el 70%. Definitivamente, la forma de entender su condición de desempleo, es una medida del grave nivel de vulnerabilidad de los pueblos indígenas con respecto al empleo.

14.4 Nivel de instrucción de personas desocupadas, por sexo y etnicidad

En el cuadro N° 24 se presentan los resultados para el indicador 14.4.

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Se presentan grandes inequidades con respecto al nivel de instrucción de las personas desocupadas. Mientras el 23% de los hombres y el 26% de mujeres tienen educación superior, al desagregar la cifra por etnicidad, encontramos que ésta llega apenas al 4% en personas indígenas y 10% en afroecuatorianas.

Cuadro N° 24

Nivel de instrucción de personas desocupadas, por sexo y etnicidad

Nivel de instrucción	Hombres (%)	Mujeres (%)	Indígena (%)	Blanca ó mestiza (%)	Afroecuatoriana (%)
<i>Ninguno</i>	1,2	1,6	4,7	1,2	2,4
<i>Centro de alfabetización</i>	0,6	1,6		1,1	2,5
<i>Primaria</i>	20,1	20,3	36,6	19,1	25,8
<i>Educación básica</i>	13,3	10,8	20,0	11,2	18,3
<i>Secundaria</i>	29,2	27,9	29,2	28,3	32,2
<i>Educación media</i>	11,6	9,9	4,5	11,2	8,1
<i>Superior no universitaria</i>	0,7	0,4	1,2	0,5	0,3
<i>Superior universitaria</i>	22,9	26,1	3,8	26,5	10,3
<i>Postgrado</i>	0,4	1,3		1,0	
Total	100	100	100	100	100
Total número	215.832	246.889	18.230	416.326	28.165

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Indicador 15

Nombre: Tasa de crecimiento anual de personas ocupadas por nivel de educación**Atributos:** Acceso a trabajo decente y trabajo productivo**Resultado:**

El resultado del indicador 15 se presenta en el cuadro N° 25.

Cuadro N° 25

Tasa de crecimiento anual de personas ocupadas por nivel de educación

Nivel de instrucción	Encuestas Nacionales (Urbano - Rural)					
	dic-08 (%)	dic-09 (%)	Crecimiento 09-08 (%)	dic-09 (%)	dic-10 (%)	Crecimiento 10-09 (%)
<i>Ninguno</i>	36,7	38,3	1,6	38,3	36,3	-2,0
<i>Centro de alfabetización</i>	36,5	38,2	1,7	38,2	37,0	-1,2
<i>Primaria</i>	48,6	51,4	2,8	51,4	50,2	-1,2
<i>Educación básica</i>	18,6	23,3	4,7	23,3	22,8	-0,5
<i>Secundaria</i>	62,6	65,4	2,8	65,4	62,1	-3,3
<i>Educación media</i>	31,7	35,3	3,6	35,3	37,8	2,5
<i>Superior no universitaria</i>	64,6	77,6	13,0	77,6	79,2	1,6
<i>Superior universitaria</i>	74,5	77,1	2,6	77,1	72,5	-4,6
<i>Postgrado</i>	92,0	89,9	-2,1	89,9	87,6	-2,3

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 25 se presenta la tasa de crecimiento de personas ocupadas por nivel de educación, para los periodos 2008-2009 y 2009-2010. Los únicos niveles que presentan crecimiento en dos periodos consecutivos son educación media y superior no universitaria, mientras que solo post-grado mantiene decrecimientos consecutivos. Las cifras anteriores deben monitorearse de manera periódica buscando obtener series de tiempo más amplias, con el afán de enfocar las políticas educativas, hacia los niveles de educación que más demanda el mercado laboral.

Indicador 16

Nombre: Promedio de tiempo en trabajo doméstico o en empresas familiares no remunerado

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

Para conocer el tiempo promedio en trabajo doméstico o en empresas familiares no remunerado por grupos objetivo, se plantean dos indicadores.

16.1 Promedio de tiempo haciendo labores del hogar por nivel de instrucción, sexo y etnicidad

En los cuadros N° 26 y 27, se presentan los resultados para el indicador 16.1

Cuadro N° 26

Promedio de tiempo haciendo labores del hogar por nivel de instrucción y sexo (horas/semana)

Sexo	Nivel de instrucción	Arreglo de casa	Compras	Arreglo de ropa	Preparación alimentos	Cuidado de niños, niñas y personas adultas mayores	Ayudar en tareas escolares	Total - Horas	Total números de observaciones
Hombre	Ninguno	2,47	2,02	1,42	3,68	0,93	0,32	10,84	142.207
	Centro de alfabetización	2,71	1,98	1,37	3,22	1,53	0,35	11,17	18.586
	Primaria	2,5	2,08	1,37	3,15	1,44	0,74	11,28	997.992
	Educación básica	2,14	0,77	1,02	1,06	0,85	0,65	6,48	947.354
	Secundaria	2,6	1,64	1,38	2,64	1,69	0,96	10,92	730.589
	Educación media	2,47	1	1,36	1,93	1,33	0,97	9,06	255.334
	Superior no universitaria	3,2	1,75	1,54	2,57	1,89	1,45	12,39	23.283
	Superior universitaria	2,69	1,54	1,23	2,59	1,6	1,08	10,73	547.412
	Postgrado	2,91	1,76	1,03	2,49	0,75	1	9,93	30.956
	Total	2,46	1,49	1,26	2,36	1,33	0,81	9,72	3.693.714
Mujer	Ninguno	4,24	2,08	3,98	12,14	2,49	0,31	25,25	333.365
	Centro de alfabetización	5,46	2,22	5,82	14,25	4,77	1,51	34,03	60.170
	Primaria	5,21	2,2	5,08	13,71	4,25	1,66	32,11	1.637.129
	Educación básica	2,77	0,81	2,18	3,54	2,01	0,96	12,26	1.109.227
	Secundaria	5,06	2,12	4,62	12,34	4,96	2,36	31,46	1.239.182
	Educación media	3,78	1,11	3,14	5,84	3,2	1,35	18,41	359.774
	Superior no universitaria	5,12	1,83	3,71	10,51	4,02	1,75	26,95	27.832
	Superior universitaria	4,3	1,8	3,45	8,89	3,45	1,88	23,78	805.605
	Postgrado	3,9	1,54	2,64	8,62	2,35	1,04	20,09	31.579
	Total	4,41	1,77	3,97	10,07	3,67	1,6	25,48	5.603.863

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 27
Promedio de tiempo haciendo labores del hogar por nivel de instrucción y etnicidad
(horas/semana)

<i>Etnicidad</i>	<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Arreglo de casa</i>	<i>Compras</i>	<i>Arreglo de ropa</i>	<i>Preparación de alimentos</i>	<i>Cuidado de niños, niñas y personas adultas mayores</i>	<i>Ayudar en tareas escolares</i>	<i>Total - Horas</i>	<i>Total números de observaciones</i>
<i>Indígena</i>	<i>Ninguno</i>	3,93	2,92	3,56	10,88	2,47	0,86	21,61	117.209
	<i>Centro de alfabetización</i>	4,05	2,5	3,34	10,48	3,19	0,38	23,94	11.124
	<i>Primaria</i>	3,63	2,05	3,16	8,77	3,07	1,17	21,86	202.624
	<i>Educación básica</i>	2,11	0,62	1,63	2,75	1,44	0,67	9,22	177.602
	<i>Secundaria</i>	4,18	1,77	3,4	6,96	3,65	1,76	21,72	65.794
	<i>Educación media</i>	3,42	0,69	2,53	4,99	1,58	1,29	14,5	31.914
	<i>Superior no universitaria</i>	4,95	2,75	1,83	4,87	1,67	1,32	17,38	2.029
	<i>Superior universitaria</i>	3,89	1,79	2,92	6,44	2,51	1,62	19,17	19.563
	<i>Postgrado</i>	3,92	1,59	0,89	2,13	4,15	0,17	12,85	1.696
	Total	3,33	1,71	2,78	7,01	2,47	1,04	17,77	629.556
<i>Blanca ó mestiza</i>	<i>Ninguno</i>	3,94	2,13	3,41	9,52	3,73	1,96	21	340.916
	<i>Centro de alfabetización</i>	4,89	2,11	4,94	12	4,16	1,32	29,42	63.951
	<i>Primaria</i>	4,26	2,3	3,75	9,81	3,44	1,42	24,35	2.314.702
	<i>Educación básica</i>	2,58	0,89	1,81	2,72	1,74	1,18	9,72	1.779.186
	<i>Secundaria</i>	4,19	2	3,45	8,88	3,76	1,89	23,92	1.814.048
	<i>Educación media</i>	3,36	1,22	2,52	4,26	2,49	1,31	14,4	560.003
	<i>Superior no universitaria</i>	4,26	1,75	2,78	7,01	3,14	1,64	20,59	48.025
	<i>Superior universitaria</i>	3,66	1,7	2,54	6,34	2,72	1,55	18,5	1.304.254
	<i>Postgrado</i>	3,38	1,64	1,88	5,62	1,5	1,06	15,09	60.235
	Total	3,71	1,74	2,97	7,12	2,97	1,51	19,33	8.285.321
<i>Afroecuatoriana</i>	<i>Ninguno</i>	4,43	1,6	3,91	9,73	2,16	0,6	22,43	16.116
	<i>Centro de alfabetización</i>	5,73	2	6,12	9,16	3,82	2,4	29,22	3.680
	<i>Primaria</i>	6,73	4,21	6,09	12,18	6,05	3,74	28,12	107.041
	<i>Educación básica</i>	2,6	0,65	1,67	2,24	1,47	0,78	9,41	92.187
	<i>Secundaria</i>	5,23	3,1	4,95	9,31	5,54	2,9	25,76	87.419
	<i>Educación media</i>	3,57	1,46	3,08	5,92	5,75	1,86	21,64	22.513
	<i>Superior no universitaria</i>	2,27	1,96	1,68	5,37	1,28	1,12	13,68	1.060
	<i>Superior universitaria</i>	3,26	1,7	3,04	6,46	2,09	1,59	18,14	26.785
	<i>Postgrado</i>	5	2	0	12	0	0	19	604
	Total	4,71	2,51	4,13	7,93	4,21	2,32	21,26	357.404

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El promedio de tiempo haciendo labores del hogar es de 9,72 horas semanales para hombres y 25,48 horas semanales para mujeres. Al cruzar la variable por nivel de instrucción, los hombres con educación superior no universitaria son los que más trabajan en el hogar de su grupo, y de igual manera, las mujeres solamente alfabetas con 34 horas semanales.

Al cruzar la variable por etnicidad, se concluye que las personas que más horas por semana dedican a estas actividades son las personas blancas-mestizas únicamente alfabetas (29,4), seguidas por los y las afroecuatorianas con igual nivel de educación (29,2).

El análisis anterior muestra claramente una situación menos favorable tanto para las mujeres, como para las personas con menores niveles de instrucción. Cabe mencionar que la variable etnicidad, no juega un papel determinante.

16.2 Porcentaje de personas haciendo trabajo doméstico no remunerado por nivel de instrucción, sexo y etnicidad

En el cuadro N° 28 se presenta el resultado del indicador 16.2

Cuadro N° 28
Porcentaje de personas haciendo trabajo doméstico no remunerado por nivel de instrucción, sexo y etnicidad

<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca ó mestiza (%)</i>	<i>Afroecuatoriana (%)</i>
<i>Ninguno</i>	5,1	35,6	33,5	13,7	8,5
<i>Centro de alfabetización</i>	4,0	21,8	31,7	10,0	5,1
<i>Primaria</i>	4,2	22,5	24,9	9,4	5,5
<i>Educación básica</i>	36,8	55,8	78,5	35,5	20,2
<i>Secundaria</i>	4,6	12,2	27,5	7,0	2,6
<i>Educación media</i>	20,7	24,3	65,2	19,5	9,4
<i>Superior no universitaria</i>	1,7	6,1		3,9	
<i>Superior universitaria</i>	2,4	6,8	19,3	4,3	4,4
<i>Postgrado</i>		1,4		0,6	
Total	7,2	18,7	37,0	9,7	5,7

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El cuadro N° 13 muestra que el 2,4% de hombres con educación superior universitaria realiza trabajo doméstico no remunerado, mientras que el porcentaje asciende al 6,8% en las mujeres del mismo nivel educativo. Para los indígenas con educación universitaria, el porcentaje alcanza el 19,3%. Lo anterior, muestra fuertes niveles de inequidad entre ambos sexos y en personas indígenas.

Indicador 17

Nombre: Personas en la PEA que reciben servicio de guardería

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Con respecto a este indicador, el porcentaje es irrisorio con apenas el 1,1% de la PEA. Al desagregar la cifra por etnicidad, el valor del indicador se mantiene de igual manera sumamente bajo. En este sentido, dadas las inmensas prioridades de la política pública, la cual se enfoca principalmente en la generación de empleo, no se han generado aún los mecanismos para abordar la problemática del cuidado infantil para los hijos de las y los trabajadores. Sin embargo, el hecho de plantear este indicador, introduce al debate aspectos integrales del trabajo en el Ecuador.

Indicador 18

Nombre: Tipo de contrato por nivel de instrucción y sexo

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

El resultado del indicador 18 se presenta en el cuadro N° 29.

Cuadro N° 29
Tipo de contrato y nivel de instrucción por sexo

Sexo	Tipo de contrato	Ninguno	Alfabetización	Primaria	Básica	Secundaria	Media	Superior no universitaria	Superior Universitaria	Post-grado	Total
Hombre	Nombramiento	1,3%	1,9%	2,6%	0,5%	8,9%	2,8%	40,4%	23,3%	49,2%	9,1%
	Contrato permanente/ indefinido/ estable o de planta	11,6%	8,8%	18,1%	11,1%	33,8%	19,3%	27,6%	42,3%	29,4%	26,8%
	Contrato temporal, ocasional o eventual	12,7%	32,7%	26,4%	37,4%	36,9%	46,4%	27,6%	31,2%	21,5%	31,6%
	Por obra, a destajo	4,7%	7,6%	4,9%	4,3%	2,5%	1,8%		0,3%		3,0%
	Por horas	1,8%		2,2%	2,7%	2,0%	2,6%	2,8%	1,0%		1,9%
	Por jornal	67,8%	49,0%	45,9%	44,1%	15,8%	27,0%	1,5%	2,0%		27,4%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Total	63.712	10.097	758.404	150.888	665.908	91.479	17.950	397.421	35.024	2.190.883
Mujer	Nombramiento	0,3%		1,9%		7,7%	1,7%	50,1%	26,9%	40,4%	13,8%
	Contrato permanente/ indefinido/ estable o de planta	17,0%	40,8%	26,6%	18,3%	36,7%	24,0%	22,1%	40,3%	29,5%	33,9%
	Contrato temporal, ocasional o eventual	26,3%	31,4%	47,9%	57,4%	48,1%	67,6%	24,1%	31,9%	29,6%	42,4%
	Por obra, a destajo	8,1%		3,7%	2,4%	1,1%	1,4%		0,3%		1,5%
	Por horas	10,3%		4,7%	5,6%	3,6%	3,1%	1,0%	0,5%	0,5%	2,8%
	Por jornal	38,0%	27,9%	15,2%	16,4%	2,8%	2,2%	2,8%	0,1%		5,7%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Total	18.666	6.142	248.000	42.917	332.666	54.266	15.958	407.028	21.921	1.147.564

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 29 se evidencia que el 64% de los hombres no tienen contratos estables o permanentes, frente al 52% de las mujeres. Este dato evidencia un aspecto desconocido de la realidad del trabajo en el Ecuador, por cuanto, en la mayoría de indicadores, las mujeres se encuentran en una situación menos favorable que los hombres. Esta es una excepción.

Ahora, para medir específicamente las **condiciones justas y seguras de trabajo** (atributo 2), se plantean desde el ACNUDH, tres indicadores. Sin embargo, los indicadores *proporción y frecuencia de empresas inspeccionadas de conformidad con estándares laborales; proporción de inspecciones resultando en acción administrativa o judicial; y, proporción de ocupados, incluyendo empleados domésticos, quienes tienen un salario cubierto bajo legislación*, no serán calculados por falta de confiabilidad en los registros administrativos que fueron proporcionados por el Ministerio de Relaciones Laborales. Adicionalmente, con base en la información disponible en el plano nacional, no se pudo encontrar un equivalente para los indicadores mencionados.

Indicador 19

Nombre: Porcentaje de personas ocupadas y subocupadas recibiendo capacitación de programas estatales, por sexo y etnicidad

Atributos: Capacitación y desarrollo profesional

Resultado:

El resultado del indicador 19 se presenta en el cuadro N° 30.

Cuadro N° 30

Porcentaje de personas ocupadas y subocupadas recibiendo capacitación de programas estatales, por sexo y etnicidad

Condición de Actividad	En los últimos 12 meses asistió o asiste al SECAP?	Hombre (%)	Mujer (%)	Indígena (%)	Blanca ó mestiza (%)	Afroecuatoriana (%)	Total (%)
Empleados y subempleados	Si	2,47	2,48	4,72	2,39	2,70	2,48
	No	97,5	97,5	95,3	97,6	97,3	97,5
	Total	100	100	100	100	100	100
	Total número	1.877.113	1.370.697	123.731	3.001.109	117.958	3.247.810

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Con respecto al porcentaje de personas ocupadas y subocupadas recibiendo capacitación por sexo y etnicidad, no existen variaciones considerables entre las diferentes desagregaciones. Así el porcentaje para los hombres es igual al de las mujeres y se encuentra entre el 2,39 y 4,72% entre las 3 etnias. Este indicador no permite evidenciar el verdadero alcance de los esfuerzos estatales por

capacitar a la fuerza laboral, debido a que la única instancia de instrucción considerada, es el SECAP. No obstante, se puede profundizar en los planes y programas que llevan a cabo los distintos ministerios y analizar su cobertura.

Ante esta situación, cabe aclarar que esta disertación introduce por primera vez en el país, las mediciones con enfoque de derechos. Por lo tanto, la ampliación, actualización y profundización de los indicadores aquí tratados, puede ser sujeto de nuevas investigaciones, y por qué no, de la implementación de una política de alcance nacional, para medir el desarrollo con enfoque de derechos.

Indicador 20

Nombre: Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad

Atributos: Capacitación y desarrollo profesional

Resultado:

En el cuadro N° 31 se presentan los resultados del indicador 20.

Cuadro N° 31

Porcentaje de personas desocupadas que reciben capacitación en programas estatales, por sexo y etnicidad

<i>Condición de actividad</i>	<i>En los últimos 12 meses asistió o asiste al SECAP?</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca ó mestiza (%)</i>	<i>Afroecuatoriana (%)</i>	<i>Total (%)</i>
<i>Personas Desocupadas</i>	<i>Si</i>	4,2	3,6	9	4	8	4
	<i>No</i>	95,8	96,4	91	96	92	96
	Total	100	100	100	100	100	100
	Total número	141.261	165.540	7.221	284.592	14.988	306.801

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El porcentaje de personas desocupadas recibiendo capacitación por parte del principal programa Estatal (SECAP), es del 4% para hombres y mujeres en general, 9% para indígenas y 8% para personas afroecuatorianas. En el análisis del indicador N° 19, se expusieron las limitaciones en el cálculo final de las personas beneficiarias de programas de capacitación del Estado. Por esta razón, no ahondaremos más en el indicador N° 20. Sin embargo, la razón de colocarlo en el texto de la disertación, responde a la necesidad de visualizar el sistema de indicadores en su totalidad.

Indicador 21

Nombre: Tasa neta de asistencia primaria, secundaria y superior, por sexo y etnicidad

Atributos: Capacitación y desarrollo profesional

Resultado:

En el cuadro N° 32 se presentan los resultados del indicador 21.

Cuadro N° 32
Tasa neta de asistencia primaria, secundaria y superior, por sexo y etnicidad

<i>Nivel</i>	<i>Etnicidad</i>	<i>Obs. (%)</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Básica	<i>Indígena</i>	%	90,5	88,2	89,3
		<i>n</i>	120.563	116.351	236.914
	<i>Blanca o mestiza</i>	%	91,8	92,1	91,9
		<i>n</i>	1.313.990	1.231.342	2.545.332
	<i>Afroecuatoriana</i>	%	91,0	93,5	92,2
		<i>n</i>	69.282	64.552	133.834
Media	<i>Indígena</i>	%	36,7	35,9	36,3
		<i>n</i>	12.552	14.185	26.737
	<i>Blanca o mestiza</i>	%	45,7	52,0	48,8
		<i>n</i>	187.452	210.728	398.180
	<i>Afroecuatoriana</i>	%	38,8	40,5	39,6
		<i>n</i>	8.263	7.593	15.856
Superior	<i>Indígena</i>	%	9,1	8,2	8,7
		<i>n</i>	5.138	4.437	9.575
	<i>Blanca o mestiza</i>	%	21,5	24,9	23,2
		<i>n</i>	168.786	188.632	357.418
	<i>Afroecuatoriana</i>	%	7,1	15,7	11,2
		<i>n</i>	2.620	5.317	7.937

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

La tasa neta de asistencia primaria para indígenas, blancos/metizos y afroecuatorianos alcanza un promedio del 91%, sin que se presenten diferencias significativas entre hombres y mujeres. Con respecto al nivel superior, el promedio de las tres etnias es del 43%, pero a nivel desagregado, el porcentaje es del 9% para indígenas, 11% para afroecuatorianos y 23% para blancos/metizos. Estos datos muestran avances importantes en cuanto a la universalización y equidad en el acceso a la educación básica, lo cual es fundamental dentro de los procesos de acumulación de capital humana. En varias investigaciones sobre la contribución de los distintos niveles de formación al desarrollo, se ha evidenciado que la educación primaria, contribuye en mayor medida a la reducción de la pobreza.

Indicador 22

Nombre: Condición de actividad por sexo y etnicidad

Atributos: Protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

En el cuadro N° 33 se presentan los resultados del indicador 22.

Cuadro N° 33
Condición de actividad por sexo y etnicidad

<i>Etnicidad</i>	<i>Condición de actividad</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Total (%)</i>
Indígena	<i>Personas ocupadas, adecuadas no Apropriadas</i>	5,9	2,6	4,3
	<i>Personas ocupadas apropiadas</i>	33,0	17,3	25,5
	<i>Personas subocupadas visibles</i>	7,4	9,9	8,6
	<i>Personas subocupadas invisibles</i>	36,1	41,1	38,5
	<i>Personas ocupadas no clasificadas</i>	0,7	0,7	0,7
	<i>Personas subocupadas otras</i>	13,8	24,5	18,9
	<i>Personas desocupadas abiertas</i>	0,7	0,9	0,8
	<i>Desocupadas Ocultas</i>	2,3	3,0	2,7
	Total	100	100	100
	Total número	272.666	246.606	519.272
Blanca o mestiza	<i>Personas ocupadas, adecuadas no Apropriadas</i>	12,1	16,2	13,7
	<i>Personas ocupadas apropiadas</i>	48,3	31,2	41,5
	<i>Personas subocupadas visibles</i>	11,6	14,4	12,7
	<i>Personas subocupadas invisibles</i>	17,6	20,5	18,8
	<i>Personas ocupadas no clasificadas</i>	2,2	2,0	2,1
	<i>Personas subocupadas otras</i>	2,7	5,9	4,0
	<i>Personas desocupadas abiertas</i>	3,8	6,1	4,7
	<i>Desocupadas Ocultas</i>	1,7	3,6	2,5
	Total	100	100	100
	Total número	3.501.301	2.294.128	5.795.429
Afroecuatorialiana	<i>Personas ocupadas, adecuadas no Apropriadas</i>	8,6	14,9	11,0
	<i>Personas ocupadas apropiadas</i>	44,5	29,3	38,8
	<i>Personas subocupadas visibles</i>	15,7	16,4	16,0
	<i>Personas subocupadas invisibles</i>	17,9	22,9	19,8
	<i>Personas ocupadas no clasificadas</i>	1,7	0,4	1,2
	<i>Personas subocupadas otras</i>	2,1	3,4	2,6
	<i>Personas desocupadas abiertas</i>	7,0	8,8	7,7
	<i>Desocupadas Ocultas</i>	2,4	4,0	3,0
	Total	100	100	100
	Total número	162.649	99.613	262.262

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 33 se presenta la condición de actividad por sexo y etnicidad, y aunque el indicador por sí solo no puede establecer la proporción de trabajadores que pasan de subocupados a ocupados, sí nos presenta el punto de partida para el periodo t, que será comparado con el resultado en t+1. En este sentido, el 57 y 76% de hombres y mujeres indígenas respectivamente, se encuentra subocupado, frente al 32 y 41% de hombres y mujeres mestizas. Es decir, nuevamente se confirma la condición de vulnerabilidad para personas indígenas, con respecto a su condición de ocupación frente a personas mestizas.

Indicador 23

Nombre: Porcentaje de niños y niñas en la PEA por edad y etnicidad

Atributos: Protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

En el cuadro N° 34 se presentan los resultados del indicador 23.

Cuadro N° 34
Porcentaje de niños y niñas en la PEA por edad y etnicidad

<i>Etnicidad</i>	<i>PEA</i>	<i>5 a 7 años (%)</i>	<i>8 a 14 años (%)</i>	<i>Total (%)</i>
Indígena	<i>Inactiva</i>	93,3	72,7	77,7
	<i>Activa</i>	6,7	27,3	22,3
	Total	100	100	100
	Total número	59.114	183.057	242.171
Blanca ó mestiza	<i>Inactiva</i>	99,5	94,8	96,0
	<i>Activa</i>	0,5	5,2	4,0
	Total	100	100	100
	Total número	634.190	1.865.150	2.499.340
Afroecuatorina	<i>Inactiva</i>	99,6	96,4	97,3
	<i>Activa</i>	0,4	3,6	2,7
	Total	100	100	100
	Total número	37.360	92.905	130.265

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 34 se evidencia que existen 157.500 niños y niñas, entre 5 y 14 años, que son parte de la PEA en el Ecuador, de los cuales, el 63% son mestizos; el 34% indígenas y un 2% afroecuatorianos. Más allá de la desagregación de las cifras, el resultado global de niños y niñas trabajadoras, evidencia una realidad que se encuentra lejos de ser solucionada. Este indicador, se convierte en un argumento fuerte, para la correcta focalización de planes y programas estatales, que debidamente respaldados en la normativa legal vigente, apunten a reducir las cifras de trabajo infantil.

Indicador 24

Nombre: Porcentaje de personas desocupadas afiliadas a la seguridad social, por sexo y etnicidad

Atributos: Protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

En el cuadro N° 35 se presentan los resultados del indicador 24.

Cuadro N° 35

Porcentaje de personas desocupadas afiliadas a la seguridad social, por sexo y etnicidad

Sexo	Seguridad Social	Desocupadas Abiertas (%)	Desocupadas Ocultas (%)
Hombre	<i>IESS, seguro general</i>	4,1	3,5
	<i>IESS, seguro gnrl. voluntario</i>	1,4	
	<i>IESS, seguro campesino</i>	2,2	7,9
	<i>ISSFA, ISSPOL</i>	0,5	1,2
	<i>Seguro privado con hospitalización</i>	1,8	0,2
	<i>Seguro privado sin hospitalización</i>	0,7	
	<i>Seguros municipales</i>	0,7	0,8
	<i>Ninguno</i>	88,7	86,4
	Total	100	100
Mujer	<i>IESS, seguro general</i>	4,9	1,3
	<i>IESS, seguro gnrl. voluntario</i>	1,4	0,2
	<i>IESS, seguro campesino</i>	1,6	4,5
	<i>ISSFA, ISSPOL</i>	0,8	0,9
	<i>Seguro privado con hospitalización</i>	0,5	0,6
	<i>Seguros municipales</i>	4,9	1,4
	<i>Ninguno</i>	85,8	91,1
	Total	100	100
Indígena	<i>IESS, seguro general</i>	3,3	
	<i>IESS, seguro campesino</i>	1,7	6,1
	<i>Ninguno</i>	95,0	93,9
	Total	100	100
Blanca ó mestiza	<i>IESS, seguro general</i>	4,2	2,5
	<i>IESS, seguro gnrl. voluntario</i>	1,3	0,2
	<i>IESS, seguro campesino</i>	1,9	5,6
	<i>ISSFA, ISSPOL</i>	0,7	1,1
	<i>Seguro privado con hospitalización</i>	1,2	0,5
	<i>Seguro privado sin hospitalización</i>	0,4	
	<i>Seguros municipales</i>	2,5	1,3
	<i>Ninguno</i>	87,7	88,8
	Total	100	100
Afroecuatoriana	<i>IESS, seguro general</i>	8,8	1,4
	<i>IESS, seguro gnrl. voluntario</i>	2,4	
	<i>IESS, seguro campesino</i>	1,8	11,2
	<i>ISSFA, ISSPOL</i>		1,4
	<i>Seguros municipales</i>	7,8	
	<i>Ninguno</i>	79,2	86,0
	Total	100	100

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El 88% de los desocupados no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, y en los indígenas, ésta tasa aumenta al 95%. Claramente se presenta una situación de vulnerabilidad de las personas desempleadas, aun cuando varias de las normas constitucionales y legales que se analizaron en los indicadores estructurales, hablan de la protección contra el desempleo y la seguridad social. En este sentido, se deben fortalecer las acciones de política pública estatal, para garantizar cobertura a los sectores desprotegidos.

Habiendo expuestos los resultados de los indicadores de proceso para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, se ha podido extraer una serie de hallazgos que serán presentados de manera general, en las conclusiones de esta disertación. Sin embargo, vale la pena destacar que los indicadores analizados, evidencian varias situaciones de discriminación para las mujeres y otros grupos vulnerables, sobre todo, en los niveles de protección social frente al desempleo, subocupación y trabajo no remunerado.

Indicadores de resultado

Para concluir con la presentación del sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, expondremos los indicadores de resultado contruidos para cada atributo con el mayor nivel de desagregación posible.

Indicador 25

Nombre: Relación de personas ocupadas a PEA, por sexo, etnicidad, área, edad y nivel de instrucción

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

En el cuadro N° 36 se presentan los resultados del indicador 25.

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El cuadro N° 36 presenta la relación de ocupación de la PEA, evidenciando que el nivel de ocupación de hombres es 4 puntos porcentuales superior al de las mujeres. Con respecto a la etnicidad, no se presentan diferencias sustanciales entre los distintos grupos. En referencia al nivel de instrucción, no hay diferencias significativas entre los grupos. El valor total de indicador significa que el 93% de la PEA se encuentra ocupada, dándonos una pauta de que el problema del empleo se presenta de manera más fuerte en los aspectos cualitativos del mismo, es decir la calidad de la ocupación.

Cuadro N° 36

Relación de personas ocupadas a PEA, por sexo, etnicidad, área, edad y nivel de instrucción

Desagregación	PEA	Personas Ocupadas	Relación ocupadas/población (%)
Sexo			
Hombre	3.948.226	3.732.393	95
Mujer	2.643.528	2.396.639	91
Etnicidad			
Indígena	519.273	501.042	96
Blanca ó mestiza	5.795.428	5.379.102	93
Afroecuatoriana	262.264	234.099	89
Otra	14.789	14.789	100
Área			
Urbana	4.370.495	4.001.764	92
Rural	2.221.258	2.127.268	96
Edad			
De 0 a 14 años	159.039	147.512	93
De 15 a 22 años	1.022.408	851.587	83
De 23 a 34 años	1.685.859	1.534.823	91
De 35 a 64 años	3.259.322	3.137.588	96
De 65 o más años	465.126	457.522	98
Nivel de instrucción			
Ninguno	307.636	301.051	98
Centro de alfabetización	54.265	48.970	90
Primaria	2.276.995	2.183.583	96
Educación básica	489.987	434.544	89
Secundaria	1.838.896	1.706.857	93
Educación media	272.168	222.567	82
Superior no universitaria	46.239	43.875	95
Superior universitaria	1.232.248	1.118.338	91
Postgrado	73.321	69.246	94
Total	6.591.754	6.129.032	93

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Indicador 26

Nombre: Porcentaje de personas empleadas a tiempo completo y a medio tiempo, que desean trabajar más horas, por sexo, etnicidad, área y edad

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

El resultado del indicador 26 se presenta en el cuadro N° 37.

Cuadro N° 37

Porcentaje de personas empleadas a tiempo completo y a medio tiempo, que desean trabajar más horas, por sexo, etnicidad, área y edad.

Desagregación	Trabaja 21 horas o más por semana				Trabaja 20 horas o menos por semana				Total			
	Trabajar más horas en su trabajo actual (%)	Trabajar más horas en otro trabajo (%)	Cambiar el trabajo por otro con más horas (%)	No desea trabajar más horas (%)	Trabajar más horas en su trabajo actual (%)	Trabajar más horas en otro trabajo (%)	Cambiar el trabajo por otro con más horas (%)	No desea trabajar más horas (%)	Trabajar más horas en su trabajo actual (%)	Trabajar más horas en otro trabajo (%)	Cambiar el trabajo por otro con más horas (%)	No desea trabajar más horas (%)
Total	8	9	7	77	18	16	15	51	9	10	8	73
Sexo												
Hombre	9	9	7	75	20	17	15	48	10	10	8	72
Mujer	7	8	5	81	16	16	16	53	8	9	7	75
Etnicidad												
Indígena	7	7	5	81	11	5	6	78	8	7	5	81
Blanca o mestiza	8	9	7	77	19	18	16	48	10	10	8	73
Afroecuatoriana	8	12	9	72	19	15	23	42	9	12	11	67
Área												
Urbana	8	8	7	77	20	19	20	40	9	10	9	73
Rural	9	9	5	76	15	12	9	64	10	10	6	74
Edad												
De 15 a 22 años	8	8	10	75	13	16	16	56	9	9	11	71
De 23 a 34 años	8	9	9	74	21	22	23	33	9	11	10	70
De 35 a 64 años	9	9	5	77	23	21	18	38	10	11	7	73
De 65 o más años	5	4	2	90	12	6	3	80	6	4	2	88

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 37 se presenta una constante con respecto al número de horas adicionales que los trabajadores a tiempo completo desean trabajar. En todas las categorías de desagregación, el 72% o más, no desea trabajar más horas. Con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, el 40% o más no desea trabajar más horas, cumpliéndose para todas las categorías.

Indicador 27

Nombre: Porcentaje de mujeres ocupadas remuneradas en sectores no agrícolas

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

En el cuadro N° 38 se presentan los resultados para el indicador 27.

Cuadro N° 38
Porcentaje de mujeres ocupadas en sectores no agrícolas por área y nivel de instrucción

Nivel de Instrucción	Urbana			Rural		
	Sector informal (%)	Trabajo doméstico (%)	Sector moderno (%)	Sector informal (%)	Trabajo doméstico (%)	Sector moderno (%)
Ninguno	66,9	7,6	6,1	11,3	1,9	0,3
Centro de alfabetización	73,7	9,3	13,5	17,3	4,4	3,9
Primaria	62,7	18,5	12,8	22,8	5,3	4,7
Educación básica	51,5	18,9	25,7	10,7	4,9	3,7
Secundaria	53,5	9,2	34,3	33,7	6,3	20,9
Educación media	42,3	6,2	49,0	27,1	8,9	18,0
Superior no universitaria	15,7		81,5	18,4	2,5	66,7
Superior universitaria	20,8	0,8	77,4	21,2	0,8	65,7
Postgrado	4,1		95,9			100,0
Total	45,1	9,0	42,4	21,3	4,8	10,4

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El cuadro N° 38 presenta el porcentaje de mujeres ocupadas en sectores no agrícolas, evidenciándose que a nivel urbano, el sector informal y el sector moderno concentran la mayor cantidad de mano de obra, con el 45 y 42% respectivamente. Adicionalmente, se presenta que el 74% de las mujeres que asistieron únicamente a un centro de alfabetización, trabajan en el sector informal, mientras que apenas el 34% de mujeres con instrucción secundaria, trabajan en el sector moderno de la economía.

Indicador 28

Nombre: Tipo de contrato y nivel de instrucción por sexo y etnicidad

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo

Resultado:

En los cuadros N° 39 y 40, se presentan los resultados del indicador 28.

Cuadro N° 39
Tipo de contrato y nivel de instrucción por sexo

Sexo	Tipo de contrato	Ninguno	Alfabetización	Primaria	Edu. Básica	Secundaria	Edu. Media	Superior no universitaria	Superior Universitaria	Post-grado	Total
Hombre	Nombramiento	1,3%	1,9%	2,6%	0,5%	8,9%	2,8%	40,4%	23,3%	49,2%	9,1%
	Contrato permanente / indefinido / estable o de planta	11,6%	8,8%	18,1%	11,1%	33,8%	19,3%	27,6%	42,3%	29,4%	26,8%
	Contrato temporal, ocasional o eventual	12,7%	32,7%	26,4%	37,4%	36,9%	46,4%	27,6%	31,2%	21,5%	31,6%
	Por obra, a destajo	4,7%	7,6%	4,9%	4,3%	2,5%	1,8%		0,3%		3,0%
	Por horas	1,8%		2,2%	2,7%	2,0%	2,6%	2,8%	1,0%		1,9%
	Por jornal	67,8%	49,0%	45,9%	44,1%	15,8%	27,0%	1,5%	2,0%		27,4%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mujer	Nombramiento	0,3%		1,9%		7,7%	1,7%	50,1%	26,9%	40,4%	13,8%
	Contrato permanente / indefinido / estable o de planta	17,0%	40,8%	26,6%	18,3%	36,7%	24,0%	22,1%	40,3%	29,5%	33,9%
	Contrato temporal, ocasional o eventual	26,3%	31,4%	47,9%	57,4%	48,1%	67,6%	24,1%	31,9%	29,6%	42,4%
	Por obra, a destajo	8,1%		3,7%	2,4%	1,1%	1,4%		0,3%		1,5%
	Por horas	10,3%		4,7%	5,6%	3,6%	3,1%	1,0%	0,5%	0,5%	2,8%
	Por jornal	38,0%	27,9%	15,2%	16,4%	2,8%	2,2%	2,8%	0,1%		5,7%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Con respecto al nivel de precarización laboral entre hombres y mujeres, en el cuadro N° 39 se establece que el 64% de los hombres se encuentran en esta situación, frente al 52% de mujeres.

Cuadro N° 40
Tipo de contrato y nivel de instrucción por etnicidad

<i>Etnicidad</i>	<i>Tipo de contrato</i>	<i>Ninguno</i>	<i>Alfabetiz</i>	<i>Primaria</i>	<i>Edu. Básica</i>	<i>Secundaria</i>	<i>Edu. Media</i>	<i>Superior no universitaria</i>	<i>Superior Universitaria</i>	<i>Post-grado</i>	<i>Total</i>
Indígena	<i>Nombramiento</i>			2,8%		8,1%		32,5%	35,6%	90,9%	7,2%
	<i>Contrato permanente / indefinido / estable o de planta</i>	6,8%	24,0%	19,7%	14,4%	27,4%	18,7%	37,4%	15,8%	9,1%	19,8%
	<i>Contrato temporal, ocasional o eventual</i>	6,3%	16,4%	24,0%	42,4%	33,4%	53,4%	30,2%	43,4%		28,9%
	<i>Por obra, a destajo</i>	21,7%		8,8%	6,0%	9,8%	5,0%		3,9%		8,9%
	<i>Por horas</i>	9,6%		5,0%	7,4%	6,5%	8,2%				5,4%
	<i>Por jornal</i>	55,6%	59,6%	39,8%	29,8%	15,0%	14,7%		1,4%		29,8%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Blanco(a) mestizo(a)	<i>Nombramiento</i>	1,3%	1,4%	2,5%	0,4%	8,6%	2,3%	46,0%	24,9%	45,3%	11,0%
	<i>Contrato permanente / indefinido / estable o de planta</i>	12,9%	19,2%	20,2%	12,7%	35,3%	21,1%	23,4%	41,9%	30,2%	29,9%
	<i>Contrato temporal, ocasional o eventual</i>	16,8%	34,8%	32,0%	41,4%	40,8%	54,0%	26,3%	31,1%	24,3%	35,4%
	<i>Por obra, a destajo</i>	3,6%	5,7%	4,2%	3,9%	1,8%	1,6%		0,2%		2,2%
	<i>Por horas</i>	2,7%		2,6%	3,1%	2,4%	2,7%	2,1%	0,8%	0,2%	2,0%
	<i>Por jornal</i>	62,7%	38,9%	38,6%	38,4%	11,2%	18,2%	2,3%	1,1%		19,5%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Afroecuatoriano(a)	<i>Nombramiento</i>			1,3%	1,0%	7,4%	5,3%	34,0%	29,3%		7,6%
	<i>Contrato permanente / indefinido / estable o de planta</i>	28,9%	41,4%	21,1%	9,8%	31,2%	22,1%	55,2%	27,8%		25,4%
	<i>Contrato temporal, ocasional o eventual</i>	17,5%	23,1%	35,7%	47,9%	41,7%	59,2%	10,8%	42,3%	100%	40,2%
	<i>Por obra, a destajo</i>			6,8%		2,5%					3,3%
	<i>Por horas</i>	8,4%		4,2%	2,3%	2,7%	1,6%		0,6%		3,0%
	<i>Por jornal</i>	45,2%	35,5%	30,9%	38,9%	14,5%	11,8%				20,5%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 40 se evidencia que la precarización laboral se da en mayor grado en indígenas y afroecuatorianos con el 73 y 67% respectivamente, mientras que esta situación se presenta en el 59% de personas ocupadas blancas o mestizas.

Indicador 29

Nombre: Relación de salarios de mujeres a hombres por sector, sexo, etnicidad, edad y nivel de escolaridad

Atributos: Condiciones justas y seguras de trabajo

Resultado:

Indicador 29.1

A través de una *regresión minceriana con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios*, se pretende establecer la contribución (negativa o positiva) de los distintos grupos objetivos en la formación del ingreso de los asalariados. Los resultados del modelo se presentan a continuación:

Variable dependiente: logaritmo natural del ingreso total de personas asalariadas

Método: Weighted least squares

Cuadro N° 41
Regresión minceriana que mide discriminación salarial

Resumen del Modelo				
R	R Cuadrado	R Cuadrado Ajustado	Error Estándar de Estimación	
.668 ^a	0,446	0,446	7,91121	

Modelo	B	Error estándar	t	Sig.
(Constante)	4,346	0,027	160,702	0
Mujer	-0,163	0,01	-15,762	0
Escolaridad	-0,009	0,004	-2,113	0,035
Escolaridad al cuadrado	0,004	0	20,985	0
Experiencia laboral	0,036	0,001	28,01	0
Experiencia laboral al cuadrado	0	0	-21,914	0
Jefe de Hogar	0,163	0,011	14,495	0
Indígena	-0,064	0,021	-3,036	0,002
Afroecuatoriano	-0,019	0,022	-0,883	0,377
Adulto mayor	0,123	0,036	3,361	0,001
Sector Moderno	0,441	0,01	42,723	0

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo Urbana y Rural
Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El cuadro N° 41 muestra que la condición de mujer, resta 16 centavos por cada dólar de ingreso, ser indígena resta 6 centavos y afroecuatoriano 2 centavos. Por otro lado, las variables que contribuyen positivamente a la formación del ingreso son: la escolaridad (0,4 centavos), condición de jefe de hogar (16 centavos) y adulto mayor (12 centavos). En este sentido, se evidencia una clara discriminación salarial por grupos vulnerables, por cuanto, ser mujer e indígena significa que automáticamente la persona gana un 22% menos. En cambio, pertenecer al sector moderno en el Ecuador contribuye con 44 centavos a cada dólar de ingreso, y como vimos anteriormente, pertenecer a dicho sector para una mujer campesina es extremadamente difícil. Sin educación universitaria o más, menos del 21% de mujeres del sector rural se encuentran en el sector moderno. Concluyendo, el 80% de mujeres indígenas sin formación superior del sector rural, gana 66 centavos menos que un hombre que trabaja en el sector moderno de la economía, por cada dólar de ingreso.

Indicador 29.2

Para complementar los resultados obtenidos con el indicador 29.1, en los cuadros N° 42, 43 y 44, se presenta el *promedio de renta primaria* por nivel de instrucción, sexo, área geográfica y etnicidad.

Cuadro N° 42
Promedio de renta primaria por nivel de instrucción y sexo

<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Renta primaria hombre</i>	<i>Renta primaria mujer</i>
<i>Ninguno</i>	205,8	147,7
<i>Centro de alfabetización</i>	231,7	135,7
<i>Primaria</i>	323,1	214,6
<i>Educación Básica</i>	168,8	145,3
<i>Secundaria</i>	463,1	327,2
<i>Educación Media</i>	227,0	208,8
<i>Superior no universitaria</i>	782,2	474,4
<i>Superior Universitaria</i>	937,9	500,8
<i>Post-grado</i>	1622,7	909,9
Total	460,3	324,3

Fuente: INEC, ENEMDUR, Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 43
Promedio de renta primaria por área

<i>Área</i>	<i>Renta Primaria</i>
<i>Urbana</i>	483,03
<i>Rural</i>	241,58
Total	410,20

Fuente: INEC, ENEMDUR
Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 44

Promedio de renta primaria por nivel de instrucción y etnicidad

<i>Etnicidad</i>	<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Renta Primaria</i>
<i>Indígena</i>	<i>Ninguno</i>	124
	<i>Centro de alfabetización</i>	133
	<i>Primaria</i>	315
	<i>Educación Básica</i>	162
	<i>Secundaria</i>	235
	<i>Educación Media</i>	139
	<i>Superior no universitaria</i>	423
	<i>Superior Universitaria</i>	448
	<i>Post-grado</i>	1.433
	Total	262
<i>Blanco(a) mestizo(a)</i>	<i>Ninguno</i>	203
	<i>Centro de alfabetización</i>	195
	<i>Primaria</i>	290
	<i>Educación Básica</i>	165
	<i>Secundaria</i>	422
	<i>Educación Media</i>	225
	<i>Superior no universitaria</i>	665
	<i>Superior Universitaria</i>	739
	<i>Post-grado</i>	1.327
	Total	426
<i>Afroecuatoriano(a)</i>	<i>Ninguno</i>	234
	<i>Centro de alfabetización</i>	138
	<i>Primaria</i>	248
	<i>Educación Básica</i>	122
	<i>Secundaria</i>	353
	<i>Educación Media</i>	179
	<i>Superior no universitaria</i>	494
	<i>Superior Universitaria</i>	476
	<i>Post-grado</i>	769
	Total	298

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

El cuadro N° 42 evidencia que el promedio de la renta primaria de los hombres, es 50% mayor a la de las mujeres sin importar el nivel de instrucción. El cuadro N° 43 presenta que el promedio de la renta primaria urbana, es mayor en el 100% al promedio de la renta primaria rural.

Finalmente, el cuadro N° 44 presenta las diferencias entre los promedios de la renta primaria percibida entre distintas etnias por cada nivel de educación. Así por ejemplo, para el nivel de

educación básica, una persona blanca o mestiza percibe en promedio, 165 dólares mensuales, un indígena 162 dólares y un afroecuatoriano 122 dólares mensuales. En el nivel de educación superior, un afroecuatoriano y un indígena perciben, en promedio, 60% menos renta primaria mensual que una persona blanca o mestiza.

Indicador 30

Nombre: Grupo de ocupación por área, sexo y etnicidad

Atributos: Condiciones justas y seguras de trabajo

Resultado:

El resultado del indicador 30 se presenta en los cuadros N° 45 y 46.

Cuadro N° 45
Grupo de ocupación por área y sexo

Área	Grupo de Ocupación	Hombre (%)	Mujer (%)	Total (%)
Urbana	Fuerzas armadas	98,7	1,3	100
	Personal direct./admin. pública y empresas	66,6	33,4	100
	Profesionales científicos e intelectuales	48,9	51,1	100
	Técnicos y profesionales de nivel medio	52,5	47,5	100
	Empleados de oficina	41,5	58,5	100
	Trabajad. de los servicios y comerciantes	41,7	58,3	100
	Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros	82,1	17,9	100
	Oficiales operarios y artesanos	81,2	18,8	100
	Operadores de instalac. máquinas y montad.	93,6	6,4	100
	Trabajadores no calificados	55,0	45,0	100
	Total	58,4	41,6	100
Rural	Fuerzas armadas	100,0		100
	Personal direct./admin. pública y empresas	89,9	10,1	100
	Profesionales científicos e intelectuales	44,8	55,2	100
	Técnicos y profesionales de nivel medio	41,8	58,2	100
	Empleados de oficina	46,4	53,6	100
	Trabajad. de los servicios y comerciantes	33,3	66,7	100
	Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros	70,2	29,8	100
	Oficiales operarios y artesanos	77,7	22,3	100
	Operadores de instalac. máquinas y montad.	86,9	13,1	100
	Trabajadores no calificados	61,8	38,2	100
	Total	64,1	35,9	100

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 46
Grupo de ocupación por área y etnicidad

Área	Grupo de Ocupación	Indígena (%)	Blanca ó mestiza (%)	Afroecuatoriana (%)	Otra (%)	Total (%)
Urbana	<i>Fuerzas armadas</i>	0,8	93,6	5,5		100
	<i>Personal direct./admin. pública y empresas</i>	0,5	97,7	1,8		100
	<i>Profesionales científicos e intelectuales</i>	1,1	96,6	2,3	0,0	100
	<i>Técnicos y profesionales de nivel medio</i>	0,7	96,8	2,3	0,2	100
	<i>Empleados de oficina</i>	1,2	95,2	3,5	0,1	100
	<i>Trabajad. de los servicios y comerciantes</i>	3,2	92,3	4,5	0,1	100
	<i>Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros</i>	3,9	91,2	4,3	0,7	100
	<i>Oficiales operarios y artesanos</i>	3,4	92,1	4,4	0,1	100
	<i>Operadores de instalac. máquinas y montad.</i>	1,4	95,4	3,0	0,2	100
	<i>Trabajadores no calificados</i>	3,6	89,6	6,5	0,3	100
	Total	2,6	92,9	4,3	0,2	100
Rural	<i>Fuerzas armadas</i>		89,2	10,8		100
	<i>Personal direct./admin. pública y empresas</i>	16,7	77,1	3,0	3,2	100
	<i>Profesionales científicos e intelectuales</i>	11,7	86,0	1,7	0,6	100
	<i>Técnicos y profesionales de nivel medio</i>	16,2	78,7	5,1		100
	<i>Empleados de oficina</i>	8,9	88,7	1,7	0,6	100
	<i>Trabajad. de los servicios y comerciantes</i>	6,7	88,4	4,5	0,4	100
	<i>Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros</i>	22,0	74,6	3,1	0,3	100
	<i>Oficiales operarios y artesanos</i>	15,7	82,3	1,8	0,2	100
	<i>Operadores de instalac. máquinas y montad.</i>	8,3	87,8	3,3	0,5	100
	<i>Trabajadores no calificados</i>	18,9	78,1	2,6	0,4	100
	Total	18,1	78,6	2,9	0,4	100

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 45 se evidencia que el porcentaje de hombres que ocupan cargos directivos, tanto en el área urbana como en el área rural, es en promedio, 57% mayor al de mujeres.

En el cuadro N° 46, se evidencia que en el sector urbano, casi la totalidad de los puestos directivos se encuentran ocupados por personas blancas o mestizas con el 98%, mientras que en el sector rural, este porcentaje disminuye al 77% y se observa un 17% de indígenas en posiciones directivas.

Indicador 31

Nombre: Desempleo estructural por sexo y etnicidad

Atributos: Capacitación y desarrollo profesional

Resultado:

El resultado del indicador 31 se presenta en los cuadro N° 47 y 48.

Cuadro N° 47
Desempleo estructural por sexo

<i>Tiempo sin trabajar</i>	<i>Hombres</i>	<i>Porcentaje de la PEA (%)</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Porcentaje de la PEA (%)</i>
<i>Hasta 6 meses</i>	105.340	2,9	65.236	2,4
<i>Hasta 45 semanas</i>	116.058	3,1	91.836	3,2
<i>Hasta 52 semanas</i>	145.333	3,8	134.266	4,8
<i>Por lo menos 1 año</i>	29.275	0,7	42.430	1,6
<i>Total sin trabajo</i>	145.336	3,7	134.265	5,1

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 48
Desempleo estructural por etnicidad

<i>Tiempo sin trabajar</i>	<i>Indígena</i>	<i>Porcentaje de la PEA (%)</i>	<i>Blanca o mestiza</i>	<i>Porcentaje de la PEA (%)</i>	<i>Afroecuatoriana</i>	<i>Porcentaje de la PEA (%)</i>
<i>Hasta 6 meses</i>	6.173	1,3	163.157	2,9	12.018	4,5
<i>Hasta 52 semanas</i>	7.536	1,5	253.550	4,5	18.512	6,9
<i>Por lo menos un año</i>	853	0,1	66.830	1,2	4.022	1,5
<i>Total personas sin trabajar</i>	7.538	1,5	253.551	4,4	18.512	7,1

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En los cuadros N° 47 y 48, se presenta del desempleo estructural por sexo y etnicidad, evidenciándose que las mujeres alcanzan un 1,6% de la PEA y los hombres el 0,7%. Adicionalmente, los afroecuatorianos tienen un 1,5% de desempleo estructural, frente al 1,2% de Blancos o Mestizos y el 0,1% de los indígenas.

Indicador 32

Nombre: Condición de actividad por nivel de instrucción, etnicidad y sexo

Atributos: Capacitación y desarrollo profesional

Resultado:

El resultado del indicador 32 se presenta en los cuadros N° 49 y 50.

Cuadro N° 49
Condición de actividad por nivel de instrucción y sexo

Sexo	Nivel de instrucción	Ocupados(as) Adecuados(as) no Apropiados(as)	Ocupados(as) Apropiados(as)	Subocupados(as)	Desocupados(as)	Ocupados(as) no Clasificados(as)	Total
Hombre	Ninguno	0,8%	3,8%	6,1%	1,2%	1,0%	4,0%
	Alfabetización	0,3%	0,5%	0,8%	0,6%	0,2%	0,6%
	Primaria	14,5%	41,2%	44,1%	20,1%	7,6%	37,3%
	Educación Básica	1,4%	4,2%	15,3%	13,3%	4,1%	8,1%
	Secundaria	35,6%	31,8%	20,9%	29,2%	21,2%	28,2%
	Educación Media	1,7%	3,0%	5,0%	11,6%	2,0%	4,0%
	Superior no universitaria	2,3%	0,5%	0,3%	0,7%	1,8%	0,7%
	Universitaria	38,9%	14,2%	7,4%	22,9%	56,5%	16,1%
	Post-grado	4,6%	0,8%	0,2%	0,4%	5,7%	1,1%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mujer	Ninguno	0,2%	4,4%	9,3%	1,6%	1,3%	5,6%
	Alfabetización	0,1%	1,1%	1,6%	1,6%	0,1%	1,2%
	Primaria	8,6%	33,4%	38,6%	20,3%	17,5%	30,5%
	Educación Básica	1,0%	2,3%	10,2%	10,8%	3,8%	6,4%
	Secundaria	22,4%	34,7%	24,6%	27,9%	19,5%	27,5%
	Educación Media	2,3%	3,7%	4,5%	9,9%	0,5%	4,4%
	Superior no universitaria	2,7%	0,6%	0,3%	0,4%		0,8%
	Superior Universitaria	59,5%	18,4%	10,8%	26,1%	55,4%	22,6%
	Post-grado	3,2%	1,4%	0,2%	1,3%	1,8%	1,1%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Cuadro N° 50

Condición de actividad por nivel de instrucción y etnicidad

<i>Etnicidad</i>	<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Ocupadas adecuadas no apropiadas (%)</i>	<i>Ocupadas apropiadas (%)</i>	<i>Subocupadas (%)</i>	<i>Desocupadas (%)</i>	<i>Ocupadas no clasificadas (%)</i>	<i>Total (%)</i>
<i>Indígena</i>	Ninguno		16,3	21,1	4,7	8,6	18,3
	Alfabetización	0,6	2,3	2,1		1,9	2,0
	Primaria	35,3	51,6	36,4	36,6	33,6	40,2
	Básica	1,9	5,3	22,1	20,0	39,7	17,0
	Secundaria	29,1	16,8	12,2	29,2	11,8	14,7
	Media		2,2	4,1	4,5	4,5	3,5
	Superior no universitaria	4,4	0,4	0,1	1,2		0,4
	Universitaria	23,2	5,0	1,7	3,8		3,6
	Postgrado	5,4		0,2			0,4
	Total	100	100	100	100	100	100
<i>Blanca o mestiza</i>	Ninguno	0,5	3,3	5,4	1,2	0,7	3,5
	Alfabetización	0,2	0,6	1,0	1,1	0,1	0,7
	Primaria	10,8	38,0	42,2	19,1	10,1	33,8
	Básica	1,2	3,5	11,5	11,2	3,0	6,6
	Secundaria	29,2	33,4	24,0	28,3	20,0	28,8
	Media	2,0	3,1	5,0	11,2	1,4	4,2
	Superior no universitaria	2,5	0,5	0,3	0,5	1,2	0,7
	Universitaria	49,7	16,4	10,3	26,5	58,9	20,4
	Postgrado	3,9	1,1	0,2	1,0	4,6	1,2
	Total	100	100	100	100	100	100
<i>Afroecuatoriana</i>	Ninguno	1,9	4,2	5,2	2,4	9,8	4,2
	Alfabetización		0,6	1,2	2,5		0,9
	Primaria	20,9	42,8	43,4	25,8	30,7	38,6
	Básica	1,1	4,3	8,7	18,3		7,0
	Secundaria	39,0	35,6	29,8	32,2	55,7	33,6
	Media	1,4	5,6	3,6	8,1		4,6
	Superior no universitaria	1,1	0,7	0,2	0,3		0,5
	Universitaria	32,6	6,1	8,1	10,3	3,8	10,2
	Postgrado	2,1	0,1				0,3
	Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: INEC, ENEMDUR, Proyecto SIDERECHOS, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 49 se evidencia que la mayoría de hombres y mujeres desocupados tienen educación secundaria con el 29 y 28% respectivamente, mientras que el 23% de hombres desempleados tienen educación superior, frente al 26% de mujeres.

Con respecto a la condición de actividad por nivel de instrucción y etnicidad, en el cuadro N° 50 se evidencia que el porcentaje de desocupados afroecuatorianos e indígenas con educación universitaria, 10 y 4% respectivamente, es mucho menor al de blancos/mestizos cuyo porcentaje es el 27%.

Indicador 33

Nombre: Tasa de desocupación por sexo, grupos objetivo y nivel de educación

Atributos: Protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

En el cuadro N° 51 se presenta el resultado del indicador 33.

Cuadro N° 51
Tasa de desocupación por nivel de instrucción, sexo y etnicidad

<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca o mestiza (%)</i>	<i>Afroecuatoriana (%)</i>
<i>Ninguno</i>	1,7	2,6	0,9	2,5	6,2
<i>Centro de alfabetización</i>	5,5	12,9		11,1	28,7
<i>Primaria</i>	2,9	6,2	3,2	4,1	7,2
<i>Educación básica</i>	9,0	15,7	4,1	12,2	27,9
<i>Secundaria</i>	5,7	9,5	7,0	7,0	10,3
<i>Educación media</i>	16,0	21,3	4,6	19,2	18,9
<i>Superior no universitaria</i>	5,3	4,8	10,0	4,8	6,9
<i>Superior universitaria</i>	7,8	10,8	3,8	9,3	10,9
<i>Postgrado</i>	2,1	10,5		5,8	
Total	5,5	9,3	3,5	7,2	10,7

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

En el cuadro N° 51 se presenta la tasa de desocupación por nivel de instrucción, sexo y etnicidad, evidenciándose una enorme desigualdad entre los hombres y las mujeres con Post-grado. Mientras los primeros presentan una tasa desocupación del 2,1%, las mujeres alcanzan un 10,5%. Sin embargo, al comparar el mismo grado de instrucción entre las diferentes etnias, solo las personas blancas o mestizas presentan desempleo, mientras que indígenas y afroecuatorianos tienen una tasa

0. Para el nivel de educación básico, el grupo de afroecuatorianos presenta una tasa del 28% de desocupación, frente al 12,2 y 4,1% en personas Blancas-mestizas e indígenas respectivamente.

Indicador 34

Nombre: Incidencia de trabajo forzoso, incluyendo domestico no remunerado y trabajo infantil

Atributos: Protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

Para medir la incidencia de trabajo forzoso, incluyendo domestico no remunerado y trabajo infantil, se plantean a su vez dos indicadores.

34.1 Porcentaje de trabajo doméstico no remunerado por sexo y etnicidad

El resultado del indicador 34.1 se presenta en el cuadro N° 52.

Cuadro N° 52.
Porcentaje de trabajo doméstico no remunerado por sexo y etnicidad

<i>Categoría de ocupación (persona)</i>	<i>Hombre (%)</i>	<i>Mujer (%)</i>	<i>Total (%)</i>	<i>Indígena (%)</i>	<i>Blanca ó mestiza (%)</i>	<i>Afroecuatoriana (%)</i>	<i>Otra (%)</i>
Empleada de gobierno	7,4	9,2	8,1	3,1	8,6	7,2	3,2
Empleada privado	32,8	28,7	31,2	10,1	33,0	33,4	19,4
Empleada tercerizada	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	
Jornalera o peón	18,6	3,0	12,5	11,2	12,4	15,1	21,4
Patrono	5,1	2,2	4,0	1,7	4,2	2,9	3,8
Cuenta propia	28,1	29,7	28,7	35,0	28,2	28,2	31,6
Trabajo del hogar no remunerado	7,0	18,1	11,4	36,1	9,4	5,3	18,5
Trabajo no del hogar no remunerado	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	
Ayudante no remunerada de asalariado/jornalero	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	
Empleada doméstica	0,4	8,4	3,5	2,1	3,5	7,5	1,9
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: INEC, ENEMDUR.

Elaboración: David Guarderas

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Con respecto al Cuadro N° 52, el 7% de hombres y el 18% de las mujeres realizan trabajo en el hogar no remunerado, mientras que el porcentaje más alto en este tipo de ocupación corresponde a las personas indígenas con el 36%, seguido por los blancos-mestizos con el 9%.

34.2 Porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian

El resultado del indicador 34.2 se presenta en el cuadro N° 53.

Cuadro N° 53
Porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian por etnicidad

	Trabajo infantil*	Trabajadores infantiles*	Resto PEA	Total PEA
%	Indígena	1,5	98,5	100
	Blanca o mestiza	0,5	99,5	100
	Afroecuatoriana	0,6	99,4	100
	Otra	3,4	96,6	100
	Total	0,6	99,4	100
Número	Indígena	7.789	511.483	519.272
	Blanca o mestiza	28.977	5.766.451	5.795.428
	Afroecuatoriana	1.574	260.690	262.264
	Otra	503	14.287	14.790
	Total	39.551	6.552.203	6.591.754

Fuente: INEC, ENEMDUR

Elaboración: David Guarderas

* Trabajo infantil se define como personas menores de 15 años que forman parte de la PEA y no estudian.

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Aunque los porcentajes de niños y niñas que trabajan y no estudian es bajo con respecto al total de la PEA, no se puede ignorar que esto significa 39.551 personas. Adicionalmente, la realidad del trabajo infantil den el Ecuador presenta cifras ocultas que no están evidenciadas en la encuesta oficial del INEC. Según datos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se la cifra de niños y niñas que no estudian se podría estimar en 120.000 personas. Los y las niñas indígenas son los que más trabajan.

Indicador 35

Nombre ACNUDH: Coeficiente de Gini de consumo por provincia

Atributos: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo; condiciones justas y seguras de trabajo; capacitación y desarrollo profesional; protección contra trabajo forzado y desempleo

Resultado:

El resultado del indicador 35 se presenta en el cuadro N° 54.

Interpretación bajo el enfoque de derechos

Para concluir con la presentación de resultados del sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos, en el cuadro N° 54 se presenta el coeficiente de Gini de consumo por provincia, siendo Imbabura la que presenta el mayor nivel de desigualdad (0,434), frente a la provincia del El Oro que se mantiene como la de menor nivel (0,312). El promedio a nivel nacional es de 0,381 con una desviación estándar de 0,057.

Cuadro N° 54

Coeficiente de Gini de consumo por provincia

<i>Provincia</i>	<i>Promedio</i>	<i>Número parroquias</i>	<i>Des estándar</i>
Azuay	0,389	74	0,047
Bolívar	0,407	26	0,055
Cañar	0,403	33	0,049
Carchi	0,394	32	0,035
Cotopaxi	0,414	40	0,057
Chimborazo	0,432	54	0,057
El Oro	0,312	61	0,035
Esmeraldas	0,353	63	0,026
Guayas	0,331	63	0,042
Imbabura	0,434	42	0,048
Loja	0,387	89	0,044
Los Ríos	0,333	27	0,028
Manabí	0,344	72	0,024
Morona Santiago	0,400	55	0,055
Napo	0,389	22	0,057
Pastaza	0,405	20	0,058
Pichincha	0,412	64	0,055
Tungurahua	0,387	52	0,033
Zamora Chinchipe	0,388	30	0,055
Galápagos	0,333	7	0,036
Sucumbíos	0,380	31	0,048
Orellana	0,370	16	0,083
No delimitadas	0,334	5	0,025
Total	0,381	978	0,057

Fuente: INEC, ECV 2006. Elaboración: David Guarderas

Hasta este momento, se han presentado los resultados para 35 indicadores que componen el sistema para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos. Adicionalmente, se ha realizado el análisis e interpretación de los valores encontrados, procurando siempre evidenciar situaciones de inequidad, vulnerabilidad y discriminación en los grupos objetivo. Existen múltiples situaciones que han sido encontradas mediante el análisis de los valores obtenidos, las mismas que serán expuestas en las conclusiones de esta disertación. Sin embargo, cabe mencionar que este primer momento en las mediciones de variables socioeconómicas bajo el enfoque de derechos, puede ser ampliado, profundizado y sometido a nuevas investigaciones, no solo del derecho al trabajo, si no de cualquiera de los otros 11 derechos para los cuales existen esbozos de posibles indicadores. Por esta razón, las matrices de indicadores *ilustrativos* para otras variables, se presentan en el anexo A. Cabe mencionar que la metodología utilizada, puede ser extendida a la medición de cualquier otro derecho humano, realizando la misma adaptación que hizo el autor de esta disertación para el derecho al trabajo.

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la disertación.

Conclusiones

Luego de haber realizado una exploración teórica, con carácter histórico en la medida de lo posible, de la evolución de las principales teorías del desarrollo, iniciando con los postulados de la escuela clásica, que conciben el desarrollo únicamente como crecimiento económico, hasta llegar a los planteamientos de Amartya Sen, de un desarrollo visto como libertad real, y finalmente, el enfoque de derechos humanos que postula las bases sobre las cuales construir dicha libertad, expondremos las principales conclusiones que culminan la investigación realizada en el marco de esta disertación de grado.

De la fundamentación teórica

A través de la fundamentación teórica de la disertación, se estableció que las dos razones principales que sustentan y justifican la implementación de los derechos humanos en la sociedad, son las siguientes:

1. Los derechos humanos constituyen una obligación ineludible para los estados, por cuanto existen numerosos tratados internacionales ratificados, que comprometen jurídicamente a las partes, a promover, respetar y garantizar dichos derechos.
2. El pleno goce de derechos en una sociedad, permite instrumentar y materializar el *desarrollo humano*, visto como libertad real. Es decir, si los derechos son garantizados, las personas pueden ejercer el máximo nivel de libertad, que les permite llevar el tipo de vida que tienen razones para valorar.

El punto 2, permite responder al **objetivo específico N° 1** de esta disertación, el cual busca *identificar los principales aportes del enfoque de derechos humanos a las teorías del desarrollo*. En este sentido, se concluye que el vínculo entre el enfoque de derechos y la teoría del desarrollo humano de Amartya SEN (desarrollo como *libertad real*), se encuentra en la materialización de la libertad, a través del pleno goce de derechos de las personas. Finalmente, una vez que el enfoque de derechos humanos fue conectado con la *ciencia económica*, a través de una de sus principales escuelas de pensamiento, *la economía del desarrollo*, se estableció que el mecanismo más adecuado para medir el pleno goce de derechos, es contar con un sistema de indicadores con enfoque de derechos.

Del uso de indicadores *para promover y monitorear la implementación de los Derechos Humanos*

En el capítulo referente al *uso de indicadores para promover y monitorear la implementación de los derechos humanos*, se estableció que la principal utilidad de estos indicadores, es ayudar a los estados y a las diferentes instancias internacionales, a evaluar el progreso en la implementación de los derechos humanos. Adicionalmente, se expuso que los indicadores con enfoque de derechos,

son sumamente útiles para evidenciar situaciones desatendidas o silenciadas, poniendo de manifiesto problemas sociales no considerados. Esto es de vital importancia a la hora de focalizar y optimizar el uso de recursos escasos.

En referencia al **objetivo específico N°2**, el cual plantea *establecer un marco metodológico que permita la construcción de un sistema indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos*, dentro del capítulo uno, se concluye que para poder generar indicadores con enfoque de derechos, es necesario contar con un marco conceptual y metodológico que delimite claramente, los aspectos que los indicadores pretenden medir. En este sentido, siguiendo una propuesta metodológica elaborada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se determinó que la mejor manera de medir el derecho al trabajo en el Ecuador, es mediante una configuración ordenada de indicadores estructurales, de proceso y resultado. Esta configuración permitió conocer los aspectos relacionados a la normativa local e internacional que avala la realización del derecho, evidenciar los esfuerzos y el compromiso del Estado con la garantía del derecho; y por último, identificar los resultados que se esperan obtener, luego de la aplicación de política pública focaliza en grupos vulnerables.

Adicionalmente, dada la amplitud de las cuestiones que rodean al empleo, la metodología permitió enfocarnos en aquellos atributos de la variable considerados por los expertos (ACNUDH) como fundamentales, a la hora de establecer mediciones con enfoque de derechos³⁰. Los atributos tratados fueron acceso a trabajo decente y trabajo productivo; condiciones justas y seguras de trabajo; capacitación y desarrollo profesional; y, protección contra trabajo forzado y desempleo

Finalmente, las conclusiones del capítulo uno, permitieron responder a la ***pregunta general*** de la investigación, que cuestiona sobre *cuál es el mecanismo adecuado para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos*. En este sentido, se concluye que solo un sistema de indicadores, especialmente diseñado a la luz de una metodología con enfoque de derechos, es capaz de generar la información necesaria para conocer el estado del derecho al trabajo en el Ecuador.

De la adaptación de los indicadores propuestos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos al contexto ecuatoriano

En referencia al **objetivo específico N°3**, el cual busca *establecer indicadores adecuados para medir el estado del derecho al trabajo en el Ecuador*, en el capítulo II, se realizó la adaptación de los indicadores propuestos por el ACNUDH a la realidad ecuatoriana. El objeto de la adaptación, fue precisamente, contar con indicadores adecuados y representativos para el contexto nacional, que

³⁰ Recordemos los atributos tratados: Acceso a trabajo decente y trabajo productivo, Condiciones justas y seguras de trabajo, Capacitación y desarrollo profesional, Protección contra trabajo forzado y desempleo

fueran posibles de construir con la información disponible y sobretodo, que puedan ser utilizados para la formulación de políticas públicas, en favor de los grupos más vulnerables del país.

En el proceso de adaptación de indicadores, se realizó además, un análisis de la representatividad y utilidad de las mediciones propuestas en el marco de esta disertación, para evidenciar aspectos de inequidad y discriminación en la sociedad ecuatoriana, con respecto a la variable trabajo. En este sentido, se pudo concluir que la adaptación realizada fue fundamental para la posterior elaboración de los indicadores, no solo para asegurar que los mismos pudieran ser actualizados de manera periódica en base a la información disponible, sino para evidenciar un aporte adicional a la propuesta de Naciones Unidas. En varias conversaciones mantenidas con expertos del ACNUDH, las recomendaciones realizadas por éstos, se enfocaron en la necesidad de discutir y argumentar la pertinencia de los indicadores sugeridos. Por lo tanto, la decisión de realizar una propuesta propia fue acertada y contó con el respaldo de especialistas en la materia.

De la presentación de resultados del sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador con enfoque de derechos

Una vez planteado el marco metodológico y realizada la adaptación al contexto ecuatoriano de los indicadores propuestos por el ACNUDH, se procedió construir cada indicador, estimando dependiendo del caso, sus valores cuantitativos y cualitativos. En este sentido, fue en el capítulo III en donde se resolvió el **objetivo general de la disertación**, el cual planteaba *construir un sistema de indicadores para medir el trabajo en el Ecuador bajo el enfoque de derechos*. Dicha construcción se efectiviza sólo mediante la presentación de resultados de los indicadores estructurales, de proceso y de resultado. A continuación se presentan los principales hallazgos.

A nivel estructural, el país cuenta con una base normativa sumamente amplia de principios constitucionales, leyes, reglamentos y acuerdos ministeriales para poder garantizar condiciones dignas de empleo en el Ecuador. Dicha normativa considera a grupos vulnerables y minorías, con tratamientos especiales en cada caso, así como contempla sanciones claras a la violación de derechos.

Dentro de los principales instrumentos normativos para garantizar el pleno goce del derecho al trabajo, se encuentran 72 convenios y tratados internacionales que abarcan aspectos como trabajo forzoso, salarios mínimos, sindicación y negociación colectiva, descanso semanal, edad mínima, compensaciones por accidentes laborales, prestaciones de invalidez y vejez, igualdad para remuneración de las mujeres, protección de la maternidad, no discriminación, entre otros.

Adicionalmente, la Constitución del Ecuador dedica 14 artículos específicos para el tratamiento del empleo en el país. Se establece la obligación del Estado para garantizar el derecho al trabajo, la existencia de remuneraciones justas, seguridad social para todas las personas, la incorporación de los jóvenes al trabajo, no discriminación para mujeres embarazadas, igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, entre otros aspectos.

En este sentido, podemos concluir que las reformas legales no son tan necesarias como lo son la implementación de políticas públicas que garanticen la aplicación de la normativa, incluyendo un sistema judicial eficiente y oportuno para efectivizar las sanciones.

Con respecto a los indicadores de proceso, que son los encargados de evidenciar los esfuerzos actuales que realiza el Estado en materia de política pública, éstos presentan severas inequidades en las condiciones de acceso y empleo de los y las ecuatorianas. En este sentido, cuando la información es desagregada por sexo, etnicidad, condiciones geográficas y grupos etarios, la existencia de mejores realidades para hombres jóvenes en cuanto capacitación, remuneraciones, estabilidad y condiciones generales del empleo, es evidente.

Cuando el 70% de las personas indígenas deja de buscar trabajo porque no cree poder encontrar, se evidencia una difícil realidad de este grupo objetivo. Históricamente, las personas indígenas han sido invisibilizadas y discriminadas en cuanto al acceso al trabajo, y la forma en que éstas asumen su condición de desempleo, muestra el claro pesimismo que tienen ante las oportunidades que la sociedad les pueda ofrecer.

Otra de las medidas de inequidad encontrada, es la diferencia en la carga de trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Mientras los primeros dedican, en promedio, 10 horas a la semana, las mujeres destinan 26 horas a la semana.

Un dato alarmante, constituye la cobertura de los servicios de seguridad social para personas desempleadas. El 88% de las y los desocupados, no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, y en personas indígenas, ésta tasa aumenta al 95%. Lo anterior es un claro ejemplo de que a pesar de que existe la normativa para universalizar los servicios de seguridad social, aún se está muy lejos de cumplirla. Sin embargo, otro beneficio de utilizar medidas con enfoque de derechos, se encuentra en la incorporación de elementos cuantitativos, al debate nacional sobre las condiciones del empleo. Es decir, los indicadores con enfoque de derechos, cumplen su propósito de llevar a la luz, situaciones olvidadas o no evidenciadas de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Con respecto a los indicadores de resultado, se concluye que su principal utilidad, se encuentra en la capacidad de éstos para medir las mejoras en las condiciones del empleo, luego de aplicación de programas con carácter focalizado. Dichos programas deben ser creados con base en la información obtenida en los indicadores de proceso. En este sentido, estableciendo relaciones de causa – efecto sobre cualquiera de los niveles inferiores del esquema (estructurales o de proceso), los impactos de las políticas públicas se evidenciarán a través de los indicadores de resultado.

Esta conclusión permite establecer un nuevo alcance para posteriores trabajos, que consideren no solo la medición en el periodo actual de los diferentes indicadores, sino induciendo a un monitoreo dinámico de estos. Un monitoreo que evidencie el mejoramiento o deterioro del derecho, luego de la aplicación de políticas públicas y que se vuelve indispensable para establecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados.

Uno de los hallazgos más importantes, es el nivel de discriminación salarial que existe en el Ecuador. Mediante el uso de métodos de regresión, se demostró que la condición de mujer, resta 16 centavos

por cada dólar de ingreso, ser indígena resta 6 centavos y afroecuatoriana 2 centavos. Por otro lado, las variables que contribuyen positivamente a la formación del ingreso son: la escolaridad (0,4 centavos), la condición de jefe de hogar (16 centavos) y adulto mayor (12 centavos). En este sentido, se evidencia una clara discriminación salarial por grupos vulnerables, por cuanto, ser mujer e indígena significa que automáticamente la persona gana un 22% menos. En cambio, pertenecer al sector moderno en el Ecuador, contribuye con 44 centavos a cada dólar de ingreso. Sin embargo, pertenecer a dicho sector para una mujer campesina es extremadamente difícil. Sin educación universitaria o más, menos del 21% de mujeres del sector rural se encuentran en el sector moderno.

Adicionalmente, el promedio de la renta primaria de los hombres, es 50% mayor al de las mujeres, sin importar el nivel de instrucción. En el nivel de educación superior, una persona afroecuatoriana o indígena, perciben en promedio, un 60% menos renta primaria mensual que una persona blanca o mestiza.

Finalmente, se puede concluir que el sistema de indicadores en su conjunto, permitió abrir la puerta a un nuevo debate: el tratamiento de las variables socio-económicas de la economía, vistas como derechos inalienables de las personas. Esto no se encuentra en un contexto aislado, sino inserto en un nuevo paradigma del desarrollo de los pueblos, que busca alcanzar la libertad real para todos y todas. Una libertad que se materializa en el pleno goce de derechos, y que brinda a las y los individuos, la oportunidad de realizar en su vida diaria, aquellas actividades que tienen razones para valorar.

Recomendaciones

Sin duda, la elaboración de ésta disertación, permitió abrir las puertas para futuras investigaciones en el marco del tema tratado. En este sentido, se plantean recomendaciones puntuales para la academia y el ejercicio profesional de los y las economistas.

En primer lugar, se recomienda extender la medición del derecho al trabajo, hacia otras variables de tipo socio - económico como la educación, la vivienda, la salud, entre otras, que de seguro presentan realidades aún no exploradas, en el marco del enfoque de derechos. Para el efecto, se presentan como cuadros anexos, las listas de los indicadores sugeridos por el ACNUDH para once derechos diferentes. Este hecho facilita continuar con la valoración cuantitativa de los derechos humanos, por contar con un referente importante de indicadores para cada derecho, los mismos que deberán ser adaptados a la realidad ecuatoriana, tal como se hizo con el derecho al trabajo en esta disertación.

En segundo lugar, los aportes teóricos realizados, permiten establecer nuevos paradigmas en cuanto a los objetivos del proceso de desarrollo, y por lo tanto, las acciones de política pública deben estar orientadas hacia el alcance de dichos objetivos. Los planes, programas y proyectos deberían ser focalizados para reducir las vulnerabilidades e inequidades que se evidencian en las mediciones con enfoque derechos, aún más cuando las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por el Estado, obligan al Ecuador a garantizar, respetar y promover el pleno goce de los derechos humanos.

En una recomendación de carácter general para los y las economistas, se plantea que sólo el cuestionamiento metódico y riguroso, aún de los paradigmas más básicos de la teoría económica, permite enriquecer el entendimiento de los fenómenos sociales que afectan a la sociedad. Nada está dado, nada viene impuesto, ninguna teoría o escuela de pensamiento puede determinar el destino de los pueblos. La obligación de generar modelos y estrategias propias, atañe a las y los profesionales de la economía, que conllevan una responsabilidad enorme, en la construcción del futuro de la sociedad. En este sentido, el enfoque de derechos se presenta como una alternativa frente a los paradigmas tradicionales del desarrollo, siendo recomendable que se generen espacios de discusión sobre los alcances y ventajas del mismo. Para este propósito, la disertación presentada contribuye como un primer peldaño en la discusión de métodos alternativos para valorar el avance del proceso de desarrollo.

Adicionalmente, se desea hacer un llamado a la construcción de relaciones interdisciplinarias que permitan tratar de manera integral los fenómenos sociales. Uno de los principales errores en la generación de políticas públicas efectivas, es el análisis de los hechos a partir de una sola disciplina. En este sentido, se recomienda la interacción de la economía con otras fuentes de conocimiento como la sociología, el derecho, la filosofía, la antropología, entre otras, para lograr mejores y más completas interpretaciones de los problemas sociales.

Finalmente, las y los economistas serán los responsables del futuro de un pueblo que en la materialización de sus derechos, podrá experimentar del verdadero desarrollo humano, es decir, será *verdaderamente libre*.

Referencias Bibliográficas

- Adelman, Irma (1974). *Teorías del Desarrollo Económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Arndt, H.W (1987). *Economic development, The history of an idea*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Barbancho, Alfonso, (2009). *Apuntes de Econometría*. Santiago: Atom. En: <http://blogdeeconometria.blogspot.com/2009/04/estimacion-modelo-de-crecimiento-de.html>. (Acceso: 18 de julio de 2011)
- Bustelo, Pablo (1998). *Teorías contemporáneas del desarrollo económico*. Madrid: Aceprensa.
- Coleman, James (1988). *Social capital in the creation of human capital*. Chicago: publicado en el American Journal of Sociology.
- Cortina, Adela (2002). *Por una ética del consumo*. Madrid: Taurus.
- Escribano, Gonzalo. *Introducción a las teorías del desarrollo*. Documento de la UNED. En: http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema1/tema01_1.pdf (Acceso: 15 de mayo de 2011).
- Goulet, Denis (1997). *Ética del desarrollo*. Madrid: IEPALA.
- Hicks, Streetten (1979). *Indicators of development: the search for a Basic Needs Yardstick*. Chicago: Elsevier, journal of World Development.
- Hidalgo, Luis, (1998). *El pensamiento económico sobre el desarrollo*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Hirschman, Albert (1984). *De la economía a la política y más allá*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hunt, Diana (1989). *Economic theories of development*. Londres: Rowman-Littlefield.
- Huntington, Samuel (1968). *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.
- Mochón, Francisco, (1987). *Economía: Teoría y Política*. Madrid: Mcgraw-Hill.
- Napoleoni C, (1974). *Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx*. Barcelona: Oikós.
- Organización de las Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Nueva York: 1948.
- Palma, Gabriel (1987). *Dependencia y desarrollo: una visión crítica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Robinson, James (2002). *The polical economy of the kuznets curve*. Boston: Review of development economics. En: http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/908__jr_kuznets.pdf. (Acceso: 21 de mayo de 2011)

Rodríguez, Octavio (1980). *La teoría del subdesarrollo de la CEPAL*. México: Siglo XXI.

Rostow, Walt (1965). *Las etapas del crecimiento económico*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Schumpeter, Joseph. (1976). *Teoría del Desarrollo Económico*. México: FCE.

Sen, Amartya (2000). *Desarrollo y libertad*. Barcelona: Planeta.

Sen, Amartya (2001). *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI*. Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. En: www.iadb.org (Acceso: 13 de mayo de 2011).

Smith, Adam. *La riqueza de las naciones: De las causas del progreso en las facultades productivas del trabajo, y del modo como un producto se distribuye naturalmente entre las diferentes clases del pueblo*. Fundación Universitaria Andaluza. En: <http://www.eumed.net/textos/06/asmith1-4.htm>. (Acceso: 11 abril de 2011).

Anexos

Anexo A

Listas de indicadores ilustrativos de Derechos Humanos

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a la vida (DUDH, Art. 3) (*indicadores relacionados con MDM)				
	Privación arbitraria de la vida	Desaparición de personas	Salud y nutrición	Penas de muerte
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a la vida, ratificados por el Estado Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la vida en la Constitución u otras formas de legislación superior Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para implementar el derecho a la vida 			
	<ul style="list-style-type: none"> Fecha de entrada en vigor y cobertura del procedimiento formal que rige la inspección de celdas policiales, centros de detención y prisiones, por parte de agencias de inspección independientes 	<ul style="list-style-type: none"> Fecha de entrada en vigor y cobertura de la disposición de hábeas corpus en la Constitución 	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo y cobertura de la política nacional sobre salud y nutrición 	<ul style="list-style-type: none"> Número de entidades administrativas subnacionales que han abolido la pena de muerte
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de denuncias recibidas sobre el derecho a la vida, investigadas y adjudicadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de los derechos humanos u otros mecanismos, y la proporción respondida efectivamente por el Gobierno Tipo de acreditación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos mediante las reglas de procedimiento del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales 			
	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de comunicaciones enviadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, respondidas efectivamente por el Gobierno en el periodo del informe Proporción de funcionarios pertenecientes a autoridades competentes (incluidas fuerzas de policía, militares y de seguridad del Estado) capacitados en normas de conducta relacionadas con el uso proporcional de la fuerza, arresto, detención, interrogación o castigo Proporción de funcionarios de las autoridades competentes investigados formalmente por abuso físico o no físico o delitos que causaron la muerte o amenazaron la vida en el periodo del informe Proporción de investigaciones formales de funcionarios de autoridades competentes que resultaron en acciones disciplinarias o en judicialización en el periodo de informe Proporción de perpetradores identificados de casos reportados de privación arbitraria de la vida investigados judicialmente, arrestados, juzgados, condenados o que cumplen sentencia en el periodo de informe 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de comunicaciones enviadas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, respondidas efectivamente por el Gobierno en el periodo de informe Proporción de casos en los que la detención antes del juicio (antes de ser presentado ante un tribunal) excedió el límite de tiempo estipulado legalmente en el periodo de informe Número de peticiones de <i>hábeas corpus</i> y peticiones similares presentadas en los tribunales en el periodo de informe Proporción de perpetradores identificados de casos reportados desapariciones investigados judicialmente, arrestados, juzgados, condenados o que cumplen sentencia en el periodo de informe 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de la población que utiliza una fuente de agua potable mejorada* Proporción de nacimientos atendidos por personal médico calificado* Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía dietario* Proporción de población objetivo cubierta bajo programas públicos de suplementos de nutrición* Proporción de la población que goza de mejores instalaciones sanitarias* Proporción de niños de un año de edad vacunados contra enfermedades prevenibles (por ejemplo, sarampión*) Proporción de casos de enfermedades detectados y curados (por ejemplo, tuberculosis*) 	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas condenadas a la pena de muerte en el periodo de informe Tiempo promedio de espera de personas condenadas a la pena de muerte Proporción de personas acusadas que enfrentan el castigo capital, con acceso a un asesor o ayuda legal Proporción de personas condenadas que enfrentan el castigo capital, que ejercen el derecho a revisión de su sentencia por parte de un tribunal superior Casos reportados de expulsión o expulsión inminente de personas en un país donde pueden enfrentar la pena de muerte
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> Número de homicidios y delitos que amenazan la vida por cada 100.000 habitantes Número de muertes en custodia por cada 1000 personas detenidas con prisión, por causa de muerte (por ejemplo, enfermedad, suicidio, homicidio) Casos reportados de privación arbitraria de la vida (por ejemplo, reportados ante el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias) 	<ul style="list-style-type: none"> Casos reportados de desapariciones (por ejemplo reportados ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias) Proporción de casos de desaparición aclarados, por estado de la persona en la fecha de aclaración (en libertad, en detención o muerto) 	<ul style="list-style-type: none"> Tasas de mortalidad infantil y en menores de cinco años* Expectativa de vida al nacer o al cumplir un año de edad Prevalencia y tasas de muerte asociadas con enfermedades transmisibles y no transmisibles (por ejemplo, VIH/sida, malaria* y tuberculosis*) 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de sentencias de pena de muerte conmutadas Número ejecuciones (bajo pena de muerte)
24. 4.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos				

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a la libertad y seguridad de la persona (DUDH, Art. 3)				
	Arresto y detención con base en cargos penales	Privación administrativa de la libertad	Revisión efectiva por parte de un tribunal	Seguridad contra los delitos y abuso por parte de funcionarios de autoridades competentes
Estructurales	<ul style="list-style-type: none">• Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a la libertad y seguridad de la persona, ratificados por el Estado• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la libertad y seguridad de la persona en la Constitución y otras formas de legislación superior• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales del derecho a la libertad y seguridad de la persona• Tiempo y cobertura del marco de política y administrativo contra cualquier privación arbitraria de la libertad, sea con base en cargos penales, sentencias o decisiones de un tribunal o con fundamentos administrativos (por ejemplo inmigración, enfermedad mental, propósitos educativos, vagancia)• Tipo de acreditación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos mediante las normas de procedimiento del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales			
	<ul style="list-style-type: none">• Plazos legales para que una persona permanezca detenida o arrestada antes de ser informada de las razones para el arresto o la detención; antes de ser presentada ante una autoridad o de que el caso haya sido revisado por una autoridad con facultades judiciales, y por la duración del juicio de una persona detenida			<ul style="list-style-type: none">• Tiempo y cobertura del marco de política y administrativo sobre seguridad, manejo de criminalidad y abusos por parte de funcionarios de las autoridades competentes
De proceso	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de denuncias recibidas por el derecho a la libertad y seguridad de una persona, investigados y adjudicados por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de derechos humanos u otros mecanismos, y la proporción respondida efectivamente por el Gobierno• Proporción de comunicaciones enviadas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria respondidas efectivamente por el Gobierno• Proporción de funcionarios de las autoridades competentes (incluidas fuerzas de policía, militares y de seguridad del Estado) capacitados en normas de conductas relacionadas con el uso proporcional de la fuerza, arresto, detención, interrogación o castigo			
	<ul style="list-style-type: none">• Número/proporción de arrestos o detenciones (antes y pendientes de juicio) con base en la orden de una corte o debido a una acción tomada directamente por autoridades ejecutivas en el período de informe• Número/proporción de acusados liberados antes y durante el juicio, a cambio de fianza o debido a que no se presentaron cargos en el período de informe	<ul style="list-style-type: none">• Número/proporción de restos o detenciones no disposiciones administrativas nacionales (por ejemplo, seguridad, control de inmigración, enfermedad mental, por razones médicas, propósitos educativos, adicción a estupefacientes, obligaciones financieras) en el período informe• Número/proporción de declaratorias de libertad de detenciones administrativas en el periodo de informe	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de casos en que el tiempo en que las personas estuvieron detenidas o arrestadas antes de ser informadas de las razones del arresto, antes de recibir aviso de los cargos (en un sentido legal) o antes de ser informadas de las razones de la detención administrativa, superó el límite de tiempo correspondiente estipulado legalmente• Número de solicitudes de <i>habeas corpus</i> y peticiones similares presentadas ante los tribunales en el periodo de informe• Proporción de solicitudes de fianza aceptadas por el tribunal en el periodo de informe• Proporción de personas arrestadas o detenidas que contaban con acceso a un asesor o ayuda legal• Proporción de casos sujetos a revisión por un tribunal de más alto nivel o entidad de apelaciones• Casos reportados en donde las detenciones antes y durante el juicio excedieron el tiempo límite estipulado legalmente en el periodo de informes	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de funcionarios de las autoridades competentes investigados formalmente por abusos físicos o no físicos o delitos, que incluyen arresto y detención arbitrarios (con base en fundamentos penales o administrativos) en el periodo de informe• Proporción de investigaciones formales contra funcionarios de las autoridades competentes que lleven a acciones disciplinarias o judicialización en el período de informe• Número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas o que cumplen sentencia por delitos violentos (incluidos homicidio, violación, asalto) por cada 100.000 habitantes en el periodo de informe• Proporción de funcionarios de las autoridades competentes asesinados en el cumplimiento de su deber en el periodo de informe• Propietarios de armas de fuego por cada 100.000 habitantes / Número de licencias para porte de armas retiradas en el periodo de informe• Proporción de crímenes violentos con el uso de armas de fuego• Proporción de crímenes violentos informados a la policía (encuesta de victimización) en el periodo de informe
De resultado	<ul style="list-style-type: none">• Número de tensiones por cada 100.000 habitantes, con base en una orden de la corte o debido a acción de autoridades ejecutivas al final del periodo de informe• Casos informados de detenciones arbitrarias, incluidas detenciones posteriores al juicio (por ejemplo, informado al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria) en el periodo de informe		<ul style="list-style-type: none">• Proporción de arrestos y detenciones declaradas ilegales por tribunales nacionales• Proporción de víctimas liberadas y compensadas después de arresto o detención declaradas ilegales por autoridades judiciales	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de la población que se siente “insegura” (por ejemplo caminando sola en un área en la oscuridad o sola en casa en la noche)• Incidencia y prevalencia de abusos o delitos físicos y no físicos, incluidos los de funcionarios de autoridades competentes en cumplimiento del deber, por cada 100.000 habitantes, en el periodo de informe
24.o 4.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos				

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a una alimentación adecuada (DUDH, Art. 25) (*indicadores relacionados con MDM)				
	Nutrición	Seguridad de los alimentos y protección al consumidor	Disponibilidad de alimentos	Acceso a los alimentos
Estructurales	<ul style="list-style-type: none">• Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a una alimentación adecuada, ratificados por el Estado• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a una alimentación adecuada, en la Constitución u otras formas de legislación superior• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para implementar el derecho a una alimentación adecuada• Número de organizaciones registradas y/o activas no gubernamentales (por cada 100.000 habitantes) involucradas en la promoción y protección del derecho a una alimentación adecuada			
	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo y cobertura de la política nacional sobre nutrición y normas para una nutrición adecuada	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo y cobertura de la política nacional sobre seguridad de los alimentos y protección al consumidor• Número de organizaciones registradas y/o activas de la sociedad civil que trabajan en el área de seguridad de los alimentos y protección al consumidor	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo y cobertura de la política nacional sobre producción agrícola y disponibilidad de alimentos• Tiempo y cobertura de la política nacional sobre sequías, escasez de cosechas y manejo de desastres	
De proceso	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de denuncias recibidas sobre el derecho a una alimentación adecuada, investigadas y juzgadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de los derechos humanos u otros mecanismos, y la proporción respondida efectivamente por el Gobierno• Asistencia para el desarrollo oficial neta (ASO) para la seguridad de los alimentos recibida o suministrada como una proporción del gasto público en seguridad de los alimentos o el Ingreso Nacional Bruto			
	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de la población objetivo en quienes se aumentó el nivel mínimo de consumo de energía dietario* en el periodo de informe• Proporción de la población objetivo bajo programas públicos de suplementos de la nutrición• Cobertura de la población objetivo bajo programas públicos sobre educación y conocimiento nutricional• Proporción de la población objetivo a la que se amplió el acceso a una fuente de agua potable mejorada* en el periodo de informe	<ul style="list-style-type: none">• Tasa de disposición o tiempo promedio para juzgar un caso registrado ante un tribunal para el consumidor• Participación del presupuesto público para el sector social destinado a seguridad de los alimentos y protección del consumidor, defensa, educación, investigación e implementación de leyes y regulaciones relevantes para el derecho• Proporción de alimentos que producen y distribuyen establecimientos inspeccionados para verificar estándares de calidad alimentaria y frecuencia de las inspecciones• Proporción de casos juzgados bajo la ley de protección al consumidor y seguridad de los alimentos en el periodo de informe	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de mujeres cabezas de hogar o población objetivo con títulos legales para tierras destinadas a producción agrícola• Tierra irrigada cultivable por persona• Proporción de agricultores que se benefician de la ampliación de servicios• Participación del presupuesto público para fortalecer la producción agrícola nacional (por ejemplo, extensión de la agricultura, riego, crédito, mercadeo)• Proporción de disponibilidad per cápita de alimentos importantes obtenidos mediante producción doméstica, importación y ayuda alimentaria• Índice de dependencia de la importación de cereales en el periodo de informe	<ul style="list-style-type: none">• Participación del consumo de hogares en los principales productos alimenticios para grupos de la población objetivo, alcanzados a través de programas de asistencia pública• Índice de desempleo o tasa promedio de salarios de segmentos objetivo de la fuerza laboral• Proporción de la población objetivo que quedó por encima de la línea pobreza en el periodo de informe• Índices de participación laboral, por sexo y grupos objetivo• Acceso estimado de mujeres y niñas a una alimentación adecuada dentro del hogar• Cobertura de programas para garantizar el acceso a recursos productivos para grupos objetivo
De resultado	<ul style="list-style-type: none">• Prevalecían de niños con bajo peso y desnutrición menores de cinco años de edad*• Proporción de adultos con índice de masa corporal (IMC) <18.5	<ul style="list-style-type: none">• Número de muertes registradas e incidencia de envenenamiento por alimentos relacionados con alimentos adulterados	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilidad per cápita de los principales alimentos de consumo local	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía dietario* / proporción de población desnutrida• Gastos promedio en el hogar en alimentos para los tres deciles más bajos de la población o la población objetivo
	<ul style="list-style-type: none">• Índices de muerte, incluidas tasas de mortalidad infantil y en menores de cinco años, asociados con y prevalencia de la desnutrición (incluidos baja nutrición, exceso de nutrición e ingesta inadecuada de nutrientes)			
24.0 4.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos				

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental (DUDH, Art. 25) (*indicadores relacionados con MDM)					
	Salud sexual y reproductiva	Mortalidad infantil y atención en salud	Medio ambiente natural y entorno ocupacional	Prevención, tratamiento y control de enfermedades	Acceso a instalaciones de salud y medicinas esenciales
Estructural	<ul style="list-style-type: none"> Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental (derecho a la salud), ratificados por el Estado Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la salud, en la Constitución u otras formas de legislación superior Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para implementar el derecho a la salud, incluyendo una ley que prohíba la mutilación genital femenina Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por cada 100.000 habitantes) involucradas en la promoción y protección del derecho a la salud Proporción estimada de nacimientos, muertes y matrimonios registrados mediante el sistema de registro vital 				
	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo y cobertura de la política nacional sobre salud sexual y reproductiva Tiempo y cobertura de la política nacional sobre abortos y determinación del sexo fetal 	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo y cobertura de la política nacional sobre salud y nutrición infantil 	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo y cobertura de la política nacional sobre salud física y mental, Tiempo y cobertura de la política nacional para personas con discapacidad Tiempo y cobertura de la política nacional sobre medicinas, incluida la lista de medicamentos esenciales, medidas para sustitución genérica 		
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de quejas/reclamos recibidas sobre el derecho a la salud, investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de los derechos humanos u otros mecanismos, y la proporción respondida efectivamente por el Gobierno Asistencia neta para el desarrollo oficial (ASO) para la promoción del sector de la salud recibida o provista como una proporción del gasto público en salud o del Ingreso Nacional Bruto* 				
	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de nacimientos atendidos por personal médico calificado* Cobertura de cuidado prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)* Aumento en la proporción de mujeres en edad reproductiva que usan, o cuya pareja usa, métodos de anticoncepción* Necesidades no cubiertas de planificación familiar* Terminación médica del embarazo como una proporción de nacidos vivos Proporción de casos reportados de mutilación genital, violación y otras formas de violencia que restringen la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, respondidas efectivamente por el Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de niños en edad escolar educados sobre temas de salud y nutrición Proporción de niños cubiertos bajo programas de chequeos médicos regulares en el período de informe Proporción de niños alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida Proporción de niños cubiertos bajo programas públicos de suplementos de nutrición Proporción de niños inmunizados contra enfermedades prevenibles por vacuna (por ejemplo, sarampión*) 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de población objetivo a la que se amplió el acceso a una fuente de agua potable mejorada* Proporción de población objetivo a la que se amplió el acceso a servicios sanitarios mejorados* Emisión de CO2 per cápita Número de casos de deterioro de fuentes de agua llevados ante la justicia Proporción de la población u hogares que viven o trabajan en o cerca de condiciones peligrosas rehabilitadas Número de procesos bajo la ley nacional sobre medio ambiente natural o de trabajo Proporción de licencias de conducción retiradas por violaciones a las normas viales 	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de población cubierta por programas de educación sobre transmisión de enfermedades (por ejemplo, VIH/sida*) Proporción de la población (mayor a un año de edad) vacunada contra enfermedades prevenibles Proporción de la población que aplica medidas preventivas efectivas contra enfermedades (por ejemplo, VIH/sida, malaria*) Proporción de casos de enfermedad detectados curados (por ejemplo, tuberculosis*) Proporción de la población que abusa de sustancias, como son drogas y sustancias químicas y psicoactivas, sometida a tratamiento especializado Proporción de instalaciones de salud mental inspeccionadas en el período de informe 	<ul style="list-style-type: none"> Gastos del cápita del gobierno en medicinas y atención primaria salud (Mejoramiento en) Densidad de personal médico y paramédico, camas en hospitales y otras instalaciones primarias de salud Proporción de la población a la que se amplió el acceso a la atención de salud, incluidas medicinas esenciales*, sobre una base sostenible Proporción de la población cubierta por seguro de salud en el período de informe Proporción de personas con discapacidad con acceso a dispositivos de ayuda Participación del gasto público en medicamentos esenciales cubiertos mediante ayuda internacional
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer Tasa de mortalidad perinatal Índice de mortalidad materna* 	<ul style="list-style-type: none"> Tasas de mortalidad infantil en menores de cinco años* Proporción de niños con bajo peso menores de cinco años de edad* 	<ul style="list-style-type: none"> Prevalencia de muertes, lesiones, enfermedades y discapacidad causados por un medio ambiente natural y ocupacional inseguros 	<ul style="list-style-type: none"> Índice de mortalidad asociado con y prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles (por ejemplo, VIH/sida*, malaria*, tuberculosis*) Proporción de personas que abusan de sustancias peligrosas Expectativas de vida al nacer o a la edad de un año y expectativa de vida de acuerdo al estado de salud Índices de suicidio 	
24.04.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos					

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DUDH, Art. 5)				
	Integridad física y mental de personas detenidas o prisioneros	Condiciones de detención	Uso de la fuerza por parte de funcionarios de hacer cumplir la ley	Violencia en la comunidad e intrafamiliar
Estructurales	<ul style="list-style-type: none">• Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificados por el Estado• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la Constitución u otras formas de legislación superior• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para implementar el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos códigos de conducta en pruebas médicas y experimentos científicos en seres humanos• Tipo de acreditación de la Institución Nacional de Derechos Humanos mediante las normas de procedimiento del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales			
	<ul style="list-style-type: none">• Fecha entrada en vigor del código de conducta para funcionarios de autoridades competentes, incluidas normas de conducta para interrogatorio de personas arrestadas, detenidas y prisioneras• Fecha de entrada en vigor y cobertura del procedimiento formal que rige la inspección de celdas de la policía, centros de detención y prisiones, por parte de instituciones de inspección independientes• Tiempo máximo legal para detención en condición de <i>incomunicado</i>• Tiempo y cobertura de la política de salud para centros de detención y prisiones			<ul style="list-style-type: none">• Fecha de entrada en vigor y cobertura de la legislación específica sobre violencia en la comunidad e intrafamiliar• Número de centros de rehabilitación para víctimas de violencia doméstica incluidas mujeres, parejas y niños
De proceso	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de quejas recibidas sobre el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de los derechos humanos u otros mecanismos y la proporción de estas denuncias respondidas efectivamente por el Gobierno• Proporción de comunicaciones enviadas por los Relatores Especiales sobre tortura y violencia contra la mujer, respondidas efectivamente por el Gobierno en el período informe• Proporción de funcionarios de las autoridades competentes (incluidos personal de la policía, militares, agencias de investigación especializadas y personal que custodia) capacitados en normas de conducta relacionados con el uso proporcional de la fuerza, arresto, detención, interrogatorio o castigo			
	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de personas detenidas o prisioneras en instalaciones inspeccionadas por una entidad independiente en el período de informe• Proporción de personal de custodia investigado formalmente por abuso físico y no físico o delitos en personas detenidas o prisioneras (incluida tortura y uso excesivo de la fuerza) en el período de informe• Proporción de investigaciones formales de personal de custodia que llevan a acción disciplinaria o judicialización	<ul style="list-style-type: none">• Ocupación real de las prisiones en proporción con la capacidad de la prisión, de acuerdo con las convenciones relevantes de la ONU sobre condiciones en prisión• Proporción de personas detenidas y condenadas que vive en condiciones que cumplen los requerimientos legalmente establecidos (por ejemplo agua potable, contenido cúbico de aire, espacio mínimo de piso, calefacción)• Número de personal de custodia y otro personal relevante por interno• Proporción de centros de detención y prisiones con instalaciones para separar a las personas bajo custodia (por sexo, edad, acusados/ sentenciados, casos penales./salud mental, relacionados con inmigración u otros casos)	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de funcionarios de las autoridades competentes formalmente investigados por abuso físico y no físico o delitos (incluida tortura y uso excesivo de la fuerza) en el período de informe• Proporción de investigaciones formales de funcionarios de las autoridades competentes que conducen a la acción disciplinaria o judicialización• Proporción de arrestos y otros actos de detención de personas en los cuales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon armas de fuego	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de los gastos públicos sociales en campañas para sensibilizar a las personas sobre la violencia contra las mujeres y los niños (por ejemplo violencia por parte de las parejas, mutilación genital, violación)• Proporción de profesionales de salud y trabajadores sociales capacitados en el manejo de temas de violencia doméstica• Proporción de personal docente capacitado frente al uso de violencia física contra los niños• Proporción de personal docente sujeto a acciones disciplinarias, judicializado por abuso físico y no físico en niños• Proporción de mujeres que informan formas de violencia (física, sexual o psicológica) contra ellas o sus hijos, que inician acción legal o que buscan ayuda en centros policiales o de consejería• Número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas o que cumplen sentencia por crímenes violentos (incluidos homicidio, violación, asalto) por cada 100.000 habitantes en el período de informe
De resultado	<ul style="list-style-type: none">• Incidencia y prevalencia de muerte, lesiones físicas y enfermedades transmisibles y no transmisibles (VIS/sida, malaria/tuberculosis*, enfermedad mental) en custodia• Proporción de personas detenidas o en prisión que permanecen <i>incomunicadas</i> o en confinamiento solitario prolongado• Casos reportados de métodos inhumanos de ejecución y tratamiento de personas sentenciadas a muerte/encarceladas en el período de informe• Proporción de personas detenidas o prisioneras con índice de masa corporal < 18.5		<ul style="list-style-type: none">• Incidencia de muerte y lesiones físicas como resultado de arrestos u otros actos sobre personas detenidas, por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el período de informe	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de niños o estudiantes por cada 1000 matriculados y pacientes que experimentaron castigo corporal en instituciones médicas y de enseñanza• Incidencia y prevalencia de muertes y delitos relacionados con la violencia intrafamiliar o en la comunidad (incluidos homicidios, violación, asalto) en el período de informe
	<ul style="list-style-type: none">• Casos reportados de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por un agente del Estado o cualquier otra persona que actuó bajo autoridad gubernamental o con su complicidad, tolerancia o aquiescencia, pero sin ningún proceso o sin él debido proceso (por ejemplo, según los reportes ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura/Violencia contra la Mujer) en el período de informe• Proporción de víctimas de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que recibieron compensación y rehabilitación en el período de informe			
24. 04.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos				

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a la educación (DUDH, Art. 26) (*indicadores relacionados con MDM)				
	Educación Primaria Universal	Acceso a Educación Secundaria y superior	Currículos Y Recursos Educativos	Oportunidad y Libertad Educacional
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a la vida, ratificados por el Estado • Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la educación en la Constitución u otra forma de legislación superior en la Constitución u otras formas de legislación superior. • Fecha de entrada en vigor y cubrimiento de las leyes nacionales para implementar el derecho a la educación, incluida la prohibición de castigo físico, discriminación en acceso a la educación, hacer que la educación en las instituciones educativas estén libres de barreras y sean incluyentes (por ej: niños con incapacidades, niños en detención, niños migrantes, niños indígenas). • Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales sobre la libertad de personas y grupos (incluidas minorías) para establecer y dirigir instituciones educativas. • Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por c/ 100,000 personas) involucradas en la promoción y protección del derecho a la educación. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cubrimiento del plan de acción adoptado por el Estado parte para implementar el principio de educación primaria obligatoria, gratis para todos. • Duración estipulada de educación obligatoria y edad mínima de admisión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cubrimiento de política nacional de educación para todos, incluida la provisión de medidas provisionales y especiales para grupos objetivo (ej: niños de la calle y niños que trabajan) • Plazo y cubrimiento de política nacional de educación vocacional y técnica. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de un marco regulador incluidos currículos estandarizados para educación a todos los niveles. • Proporción de instituciones educativas a todo nivel que enseñen derechos humanos / número de horas en currículos sobre educación en derechos humanos. • Proporción de instituciones educativas con mecanismos (consejos estudiantiles) para que los estudiantes participen en asuntos que les afecta. 		
Proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de quejas recibidas sobre el derecho a la educación investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, defensor de derechos humanos u otros mecanismos y la proporción de respuestas atendidas por el gobierno. • Gasto público en educación primaria, secundaria y superior como proporción del ingreso interno bruto; asistencia neta de desarrollo oficial (ODA) para educación recibida o provista como proporción del gasto público en educación * 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Relación de Matrículas Netas en Primaria por grupos objetivo, incluidos niños con discapacidades. • Deserción en educación primaria por grados para grupos objetivo. • Proporción de niños matriculados en instituciones públicas de educación primaria. • Proporción de estudiantes (por grupos objetivo) cubiertos por programas financieros públicos adicionales o incentivos para educación primaria. • Proporción de escuelas públicas con cargos de usuario para servicios diferentes a costos de enseñanza. • Proporción de maestros de educación primaria plenamente calificados y capacitados. • Proporción de niños con acceso a educación en su lengua nativa. • Proporción de estudiantes en grado 1 que asistieron a pre-escolar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de transición a educación secundaria por grupos objetivo. • Relación de matrículas brutas para educación secundaria y superior por grupos objetivo • Tasa de deserción en educación secundaria por grados y grupos objetivo. • Proporción de estudiantes matriculados en instituciones de educación pública, secundaria y superior. • Participación en el gasto anual en educación de los hogares por hijo matriculado en escuela pública secundaria o superior. • Proporción de estudiantes (por grupos objetivo) que reciben ayuda o asistencia pública para educación secundaria • Proporción de maestros de educación secundaria o superior, plenamente calificados y entrenados. • Proporción de estudiantes matriculados en programas de educación vocacional a nivel secundaria y pos-secundaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de colegios o instituciones que se conforman a los requerimientos estipulados sobre instalaciones académicas y físicas. • Periodicidad de revisión curricular en todos los niveles. • Número de instituciones educativas reconocidas o inhibidas por niveles durante el periodo del informe por la respectiva o relevante entidad reguladora. • Salario promedio de maestros como porcentaje de los salarios mínimos reglamentados. • Proporción de maestros a todos los niveles que culminan entrenamiento obligatorio durante el periodo del informe. • Relación numérica entre estudiantes y personal docente en educación primaria, secundaria, pública y privada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de instituciones educativas que realizan actividades en “aprendizaje activo”. • Proporción de población adulta amparada con programas de educación básica. • Proporción de estudiantes, por nivel, matriculados en programas de educación continua y a distancia. • Número de instituciones de grupos de población étnica, lingüística, minoritaria y religiosa reconocidos o que reciben ayuda pública. • Proporción de fuerza de trabajo disponible para re-capacitar o aumentar destrezas del personal en instituciones públicas o apoyadas con fondos públicos • Proporción de instituciones de aprendizaje superior que gozan de autonomía gerencial y académica. • Computadores personales en uso por cada 100 habitantes*
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Relación de niñas : niños en educación primaria por grados para grupos objetivo* • Proporción de estudiantes que comienzan grado 1 que llegan a grado 5 (tasa de terminación de educación primaria)* • Proporción de niños fuera de colegio en educación primaria por grupo de edades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relación de niñas /niños en educación* secundaria o superior por grados. • Proporción de niños/niñas que terminan educación secundaria (tasa de terminación secundaria) • Número de graduandos (primer nivel grado universitario) por cada 1000 habitantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • (Mejoramiento en la) cobertura (densidad) de instalaciones de educación primaria, secundaria y superior durante el periodo del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de mujeres y población objetivo con calificación profesional o universitaria.
<ul style="list-style-type: none"> • Tasas de alfabetismo en jóvenes (15-24 años)* y adultos (15+) (que sepan leer, escribir, calcular, resolver problemas y otras habilidades de la vida diaria) 				
24.4.08 Todos los indicadores deben ser desagregados por bases prohibidas de discriminación como hojas de metas aplicables y reflejadas				

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a participar en asuntos públicos (DUDH, Art. 21) (*indicadores relacionados con MDM)			
	Ejercicio de poderes legislativos, ejecutivos y administrativos	Sufragio universal e igual	Acceso a cargos públicos
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a participar en asuntos públicos, ratificados por el Estado • Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a participar en asuntos públicos en la Constitución u otras formas de legislación superior • Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para implementar el derecho a participar en asuntos públicos, incluidos las libertades de opinión, expresión, información, medios de comunicación y asociación. • Fecha de entrada en vigor del sufragio universal, derecho a votar, derecho a participar en elecciones, disposiciones legales que definiendo la ciudadanía y sus limitaciones (incluidos límites de edad) para residentes permanentes, con respecto al derecho a participar en asuntos públicos a nivel nacional y local. • Cuota, tiempo y cobertura de medidas especiales y temporales para poblaciones objetivo en entidades legislativas, ejecutivas, judiciales y nombradas • Tipo de acreditación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos mediante las normas de procedimiento del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales • Número de organizaciones registradas y/o activas no gubernamentales (por cada 100.000 habitantes) involucradas en la promoción y protección del derecho a participar en asuntos públicos 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Periodicidad de elecciones ejecutivas y legislativas a nivel nacional y local • Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes que establecen un órgano electoral nacional independiente 		<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de disposiciones legales que garantizan el acceso a cargos públicos sin discriminación • Fecha de entrada en vigor y cobertura de tribunales administrativos o mecanismos dedicados de compensación judicial para asuntos del servicio público
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de denuncias recibidas sobre el derecho a participar en asuntos públicos, investigadas y juzgadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de los derechos humanos u otros mecanismos y la proporción de estas denuncias respondidas efectivamente por el Gobierno 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Número de comicios (elección, referendo y plebiscito) a nivel nacional y local realizado durante el periodo de informe • Número de legislaciones adoptadas por las asambleas nacionales y subnacionales durante el periodo de informe • Proporción de elecciones y sesiones de órganos elegidos a nivel nacional y local, realizada según el cronograma trazado por lo organismos constitucionales o legales • Proporción de gastos en campañas electorales a nivel nacional y subnacional cubiertos con fondos públicos • Proporción de personal elegido cuyos periodos fueron interrumpidos por causa de interrupción • Proporción de mujeres y grupos objetivos incluidos en los partidos políticos nacionales o presentados como candidatos para elección 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de la población en edad de votar, registrada para hacerlo • Irregularidades informadas (intimidación, corrupción o interferencia arbitrarias) respecto al registro, mantenimiento y revisión del censo electoral • Número de denuncias registradas y tratadas por posición electa durante en el proceso de elección por parte de las autoridades electorales nacionales y subnacionales • Participación del gasto público en elecciones nacionales y subnacionales destinados a campañas para educación y registro de los votantes • Número de partidos políticos registrados o reconocidos a nivel nacional • Proporción de población en edad de votar no afiliada a partidos políticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de vacantes en autoridades públicas (seleccionadas) a nivel nacional y subnacional, cubiertas mediante la elección de mujeres y candidatos de grupos de población objetivo • Proporción de casos llevados ante tribunales administrativos y mecanismos dedicados de indemnización judicial para cuestiones del servicio público juzgadas y finalmente dispuestas durante el periodo de informe • Proporción de cargos en el servicio público reservados a nacionales o ciudadanos
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de escaños en el parlamento*, órganos de elección y nombramiento a nivel subnacional y nacional ocupados por mujeres y grupos objetivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotación promedio de votantes en elecciones nacionales y locales, por sexo y grupos objetivo • Proporción de votos nulos y en blanco en elecciones para legislaturas nacional y subnacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Casos informados de negación de acceso al servicio público o a un cargo público por razón de discriminación • Proporción de cargos públicos ocupados por mujeres y miembros de grupos objetivo
24.04.08 Todos los indicadores deben desagregarse con base en fundamentos de discriminación prohibidos, según sea aplicable y se refleje en los metadatos			

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a vivienda adecuada (DUDH, Art. 25) (*indicadores relacionados con MDM)				
	Habitabilidad	Acceso a Servicios	Asequibilidad a Vivienda	Seguridad de tenencia
Estructurales	<ul style="list-style-type: none">• Tratados internacionales de derechos humanos, relevantes para el derecho a una vivienda adecuada, ratificados por el Estado.• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a vivienda adecuada en la Constitución u otra forma de legislación superior.• Fecha de entrada en vigor y cubrimiento de las leyes nacionales para implementar el derecho a una vivienda adecuada• Tipo de acreditación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos por las reglas de procedimiento del Comité de Coordinación Internacional de Instituciones Nacionales.• Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por c/ 100,000 personas) involucradas en la promoción y protección del derecho a vivienda adecuada.			
	<ul style="list-style-type: none">• Plazo y cubrimiento de la política o estrategia de política nacional de vivienda para la implementación progresiva de medidas, incluidas medidas especiales para grupos objetivo, para el derecho a vivienda adecuada a diferentes niveles del gobierno.• Plazo y cubrimiento de la política nacional de rehabilitación, reasentamiento y manejo de desastres naturales.			<ul style="list-style-type: none">• Fecha de entrada en vigor y cobertura de legislación sobre seguridad de tenencia, herencia equitativa y protección contra desalojo forzado.
De proceso	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de quejas recibidas sobre el derecho a vivienda adecuada investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, el defensor de derechos humanos u otros mecanismos y la proporción que fue respondida efectivamente por el gobierno.• Número y gasto público total en reconstrucción y rehabilitación de vivienda por personas desalojadas/desplazadas durante le periodo del informe.• Asistencia neta de desarrollo oficial (ODA) para vivienda (incluidos servicios básicos y de tierra) recibida o provista como proporción del gasto público en vivienda o GNI *			
	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de habitaciones (ciudades, municipios y pueblos) bajo las disposiciones de códigos de construcción y por legislación en el periodo del informe.• Participación del gasto público en vivienda social o comunitaria.• Área habitable (m2) adicionados mediante reclamación, incluidos sitios peligrosos y cambio en el patrón de uso de la tierra durante el periodo del informe.• Área habitable (m2 per cápita) reservado para vivienda social y comunitaria durante el periodo del informe	<ul style="list-style-type: none">• Distribución de gasto público en provisión y mantenimiento de servicios de sanidad, acueducto, electricidad y conectividad física de las habitaciones.• Proporción de población objetivo a la que se le amplió acceso sostenible a una fuente de agua mejorada*, electricidad y recolección de basuras durante el periodo del informe.	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de hogares que reciben asistencia pública en vivienda, incluidos los que viven en viviendas alquiladas o viviendas subsidiadas para propiedad.• Proporción de hogares objetivo que viven en reasentamientos rehabilitados en el periodo del informe.• Proporción de población sin hogar a la que se le amplió el uso de refugios públicos y comunitarios en el periodo del informe.	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo promedio para negociar conflictos relacionados con derechos de vivienda y de tierra en cortes y tribunales.• Número/proporción de apelaciones legales que buscan impedir desalojos o demoliciones programadas ordenados judicialmente en el periodo del informe.• Número/proporción de procedimientos legales que buscan compensación luego de desalojos durante le periodo del informe, por resultado luego de sentenciar• Número y proporción de personas desplazadas o desalojadas que fueron rehabilitadas o reasentadas durante el periodo del informe.
De resultado	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de población con suficiente espacio de vivienda (personas por habitaciones o habitaciones por hogar) o número promedio de personas por habitación entre hogares objetivo.• Proporción de hogares que viven en estructura permanente de acuerdo con los códigos y estatutos de construcción.• Proporción de hogares que viven en o cercano a condiciones peligrosas.	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de población urbana que vive en barrios marginales*• Proporción de población que usa fuente de agua potable mejorada (pública/privada), instalaciones de sanidad, electricidad y recolección de basuras.• Proporción del presupuesto de hogares de los grupos de población objetivo que gasta en agua, sanidad, electricidad y recolección de basuras.	<ul style="list-style-type: none">• Proporción de hogares que gastan más de “X” % de su ingreso o gasto mensual en vivienda o promedio de alquiler con ingresos inferiores a tres deciles comparado los tres superiores.• Promedio anual de personas sin hogar por 100,000 habitantes.(‘X’ se define normativamente para el contexto de país)	<ul style="list-style-type: none">• Casos reportados de “desalojos forzados” (por ejemplo, reportados a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas) durante el periodo del informe.• Proporción de hogares con protección legal, contractual, estatutaria u otra clase de seguridad que provea garantía de tenencia o proporción de hogares con acceso a tenencia segura.• Proporción de mujeres con títulos de tierras o bienes.
24.4.08	Todos los indicadores deben ser desagregados por bases prohibidas de discriminación como hojas de metas aplicables y reflejadas			

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión (DUDH, Art. 19) (*indicadores relacionados con MDM)			
	Libertad de opinión y para distribuir información	Acceso a información	Deberes y especiales y responsabilidades
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados internacionales de derechos humanos relevantes al derecho a la libertad de opinión y expresión, (DOyE)), ratificados por el Estado. • Fecha de entrada en vigor y cobertura del DOyE en la Constitución u otras formas de legislación superior. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales para implementar DOyE, incluida disponibilidad de revisión judicial de cualquier decisión tomada por el Estado para restringir DOyE. • Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por 100.000 habitantes) involucradas en la promoción y protección del DOyE • Fecha de entrada en vigor y cobertura del código de conducta/ética para periodistas y otros integrantes de los medios. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de la legislación para la protección de libertad de los medios, incluida despenalización de calumnia, difamación o injuria. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales para la protección y seguridad de periodistas y otros integrantes de medios, incluida protección contra divulgación de fuentes. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales para igual oportunidad de acceso a concesiones radiales y frecuencias de transmisión por TV. • Plazo y cobertura de políticas nacionales sobre educación para todos, incluidas disposiciones para medidas especiales temporales para grupos objetivo, currículos de derechos humanos y “aprendizaje activo”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas sobre acceso a la información. • Fecha de establecimiento de un mecanismo de monitoreo independiente (ej: Comisionado de Información) • Fecha de entrada en vigor y cobertura de legislación estadística para proteger la independencia y la calidad de estadísticas oficiales. • Plazo y cubrimiento de política nacional para estimular el acceso a tecnología de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de legislación nacional que prohíba la propaganda de la guerra. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales que prohíban el odio racial, religioso o sexista que constituya incitación de discriminación, hostilidad o violencia.
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de quejas recibidas sobre DOyE investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, defensor de derechos humanos u otros mecanismos y la proporción de respuestas atendidas por el gobierno. • Proporción de comunicaciones enviadas por los Relatores Especiales de las NNUU (ej: Relator Especial sobre promoción y protección de DOyE), respondidas efectivamente por el gobierno. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Número de periódicos, revistas, estaciones de radio, canales de TV, sitios de Internet por propiedad (pública o privada) y cifras de audiencia. • Número de fusiones o adquisiciones de empresas de medios investigadas, sentenciadas y rechazadas por una comisión de competencia independiente durante el periodo del informe. • Número de periódicos, artículos, sitios de Internet y otros canales de medios cerrados o censurados por las autoridades reguladoras. • Proporción de quejas presentadas por periodistas u otras personas de medios investigadas, sentenciadas y aprobadas judicialmente o por otros mecanismos competentes. • Número de media de grupos étnicos, lingüísticos, minoritarios y religiosos reconocidos o que reciben ayuda oficial. • Proporción de solicitudes para sostener manifestaciones aceptadas por autoridades administrativas. • Proporción de colegios/escuelas que se ocupan en actividades de “aprendizaje activo”, dando a los niños la oportunidad de expresarse libremente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de solicitudes de información por parte de los medios, respondidas efectivamente por el gobierno. • Suscripciones y promedio de ventas diarias de periódicos nacionales y regionales. • Proporción de población con acceso a emisiones de radio y TV. • Número de dominios de Internet registrados por cada 1.000 habitantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de acciones judiciales sobre supuesta calumnia, difamación e injuria investigadas y que resulten en condena. • Proporción de acciones judiciales contra propaganda de guerra investigadas y que resulten en condena. • Proporción de acciones (cuasi) judiciales contra la propagación de odio racial, religioso o sexista investigadas y que resulten en condena
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Número de periodistas y otros miembros de los medios que hayan reportado sanciones, presión política o corporativa para la publicación de información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casos reportados de no divulgación de documentos, archivos y datos administrativos o corporativos de interés público (ej: registros judiciales, exportaciones de armas, datos ambientales, buscadores de asilos) • Proporción de población lingüística con acceso a emisiones de los medios en su idioma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de víctimas de calumnia, difamación e injuria que hayan recibido compensación y rehabilitación.
	<ul style="list-style-type: none"> • Casos reportados de asesinatos, desapariciones, detenciones y torturas contra periodistas, defensores de derechos humanos u otras personas que hayan ejercido sus RFoE, perpetrados por un agente del Estado o por otra persona que actúe bajo autoridad oficial o con su complicidad, tolerancia y aquiescencia, pero sin ningún proceso judicial debido (ej: reportados a procedimientos especiales de las UN) 		
24.4.08	Todos los indicadores deben ser desagregados por bases prohibidas de discriminación como hojas de metas aplicables y reflejadas		

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a la seguridad social (DUDH, Art. 22) (*indicadores relacionados con MDM)				
	Seguridad de ingresos para trabajadores	Acceso asequible a la atención de salud	Subsidios a la familia, hijos y adultos dependientes	Esquemas de asistencia social por objetivo
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT, relevantes al derecho a la seguridad social ratificados por el Estado. • Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la seguridad social en la Constitución u otras formas de legislación superior. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales para implementar el derecho a la seguridad social, incluidos los casos de enfermedad, vejez, desempleo, accidentes ocupacionales, maternidad, paternidad, discapacidad e invalidez, sobrevivientes y huérfanos, salud (incluida salud reproductiva) y subsidios a la familia y a los hijos. • Plazo y cobertura de la política de implementación universal del derecho a la seguridad social. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de seguro o esquema de seguridad social basada en impuestos. • Periodo de calificación legal prescrito, tasa de aportes (duración del tiempo de licencia de maternidad) y tasa de beneficios bajo diferentes esquemas. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de acuerdos internacionales sobre exportación de beneficios de seguridad social (incluida la doble tributación) al país de origen para trabajadores migrantes y sus familias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas sobre seguro de salud obligatorio. • Plazo y cobertura de políticas nacionales sobre salud y acceso a la atención de salud, incluida salud reproductiva y para personas con discapacidades. • Plazo y cobertura de las políticas nacionales sobre medicamentos, incluidos medicamentos genéricos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de asistencia pública para la familia, incluidas familias de un solo padre, hijos y adultos dependientes. • Periodo de calificación legal, tasa de aportes, duración y tasa de subvenciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cobertura de programas de asistencia social y esquemas no contributivos para personas en situaciones específicas de necesidad (por ej: personas desplazadas internamente, refugiados, víctimas de la guerra, desempleados a largo plazo, personas sin hogar). • Plazo y cobertura de políticas nacionales sobre desempleo.
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de quejas recibidas sobre el derecho a la seguridad social investigadas y adjudicadas por la institución nacional de derechos humanos, defensor de derechos humanos u otros mecanismos relevantes y la proporción de éstas eficientemente atendidas por el gobierno. • Proporción de población objetivo informada debidamente acerca de sus derechos y beneficios (en dinero o especie) bajo esquemas de seguridad social aplicables. • Asistencia neta oficial para el desarrollo (ODA) para implementar este derecho, recibido o provisto como una proporción de gasto público en seguridad social e Ingresos Nacionales Brutos. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Número de trabajadores registrados recientemente como participantes en el esquema de seguridad social durante el periodo del informe. • Proporción de solicitudes de beneficios (como desempleo, pensión), revisadas y atendidas durante el periodo del informe. • Proporción de casos o quejas, referentes a obligaciones de seguridad de empresas, respondidas de manera efectiva por el gobierno o por la respectiva entidad de seguridad social. • Proporción de empresas cubiertas por las normas nacionales de seguridad social y proporción de las mismas sujetas a acción o proceso administrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto público per cápita en instalaciones de salud primaria (incluida salud reproductiva) y medicinas esenciales. • Número de personas objetivo registradas recientemente como participantes en el sistema de seguridad social durante el periodo del informe. • Proporción de gastos de hogares en productos y servicios de salud cubiertos por seguro de salud/ asistencia pública. • Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud capacitado* • Proporción de población objetivo dentro de X hora del personal médico y para-médico y facilidades relevantes de atención en salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto público en subvención a la familia, hijos y adultos dependientes o esquemas de beneficios por beneficiario. • Proporción de gasto de hogares (alimentación, salud, atención diaria, educación, vivienda) en niños y adultos dependientes cubiertos por la asistencia oficial. • (Mejoramiento en) Densidad de centros de atención y hogares para la tercera edad para la población objetivo o regiones durante el periodo del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gastos públicos para esquemas de asistencia social objetivo por beneficiario. • (Mejora en) cubrimiento de oficinas y personal administrativo que presta asistencia social por objetivo. • Proporción de solicitudes de asistencia social (ej: transferencia de ingresos, vivienda subsidiada, calamidades) revisadas y atendidas.
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de fuerza laboral que participa en esquemas de seguridad social. • Proporción de trabajadores cubiertos por la seguridad social que recibieron beneficios de seguridad social estipulada durante el periodo del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de población cubierta por seguro de salud (público o privado) • Proporción de personas con acceso asequible a salud, incluidos medicamentos * esenciales, sobre una base sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporciones de familias, niños y dependientes con derecho que reciben asistencia oficial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de población en situaciones específicas de necesidades que reciben asistencia social para alimentación, vivienda, salud, educación, y servicios de emergencia o alivio.
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de personas en la economía forma o informal por debajo de la línea de pobreza nacional antes y después de transferencias sociales* 			
24.4.08	Todos los indicadores deben ser desagregados con base en los campos de prohibición de la discriminación, como se aplica y refleja en las metahojas			

Lista de indicadores ilustrativos sobre el derecho a un juicio justo (DUDH, Art. 10-11)					
	Acceso e igualdad ante cortes y tribunales	Audiencia pública por cortes competentes e independientes	Presunción de inocencia y garantías en la determinación de cargos penales	Protección especial a los niños/niñas	Revisión por una instancia superior
Estructurales	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tratados internacionales de derechos humanos internacionales, relevantes al derecho a un juicio justo, ratificados por el Estado.</i> • <i>Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a un juicio justo en la Constitución u otras formas de legislación superior.</i> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de leyes nacionales para implementar el derecho a un juicio justo, incluidos procedimientos para el nombramiento, remuneración, despido de personas que ejerzan funciones judiciales • Número de organizaciones no gubernamentales registradas y/o activas (por c/ 100,000 personas) involucradas en la promoción y protección del derecho a un juicio justo. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de legislación que garantice acceso no discriminatorio a cortes (ej: para mujeres, niños y migrantes no acompañados) • Fecha de entrada en vigor y periodicidad de revisión de códigos de procedimiento civil y penal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazo y cobertura de políticas nacionales sobre servicios judiciales, incluidas fortalezas judiciales, contra extorsión, soborno y corrupción. • Fechas de entrada en vigor y cobertura de entidades reguladoras para la carrera/profesión judicial y legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Fechas límite identificadas/ señaladas para guiar etapas previas y en juicio en la determinación de cargos contra una persona. • Plazo y cobertura de políticas nacionales sobre la provisión de asistencia legal a grupos específicos de población. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura de tribunales de menores. • Fecha de entrada en vigor y cobertura de sistemas de rehabilitación para niñez involucrada en delitos. • Edad legal para la responsabilidad penal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a apelar ante una instancia superior y a la completa revisión de aspectos legales y materiales de la condena y sentencia de una persona
De proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de quejas recibidas sobre el derecho a un juicio justo investigadas y calificadas por la institución nacional de derechos humanos, defensor de derechos humanos u otros mecanismos y la proporción de respuestas efectivamente provistas por el gobierno. • Número de comunicaciones enviadas por el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados y proporción respondida por el gobierno. • Proporción de jueces, fiscales y abogados entrenados en derechos humanos y normas afines para la administración de justicia. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de población cubierta dentro de X horas por un tribunal plenamente funcionando o número de personas con funciones judiciales por 100,000 habitantes. • Proporción de solicitudes de asistencia legal e intérpretes gratis que se han atendido (procesos civiles y penales) anualmente. Número / proporción de casos referidos a resolución alternativa de conflictos (RAC) • Proporción de delitos (ej: violación asalto físico, violencia doméstica) reportados a la policía (estudio de victimización) • Proporción de víctimas de delitos enviados a la corte por la policía que confirma cargos o comparecen en procesos ante jueces o fiscales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de personas con funciones judiciales (ej: jueces y fiscales) investigados formalmente por violación de deber, irregularidades, abusos (ej: corrupción). • Proporción de investigaciones formales de personas con funciones judiciales que resulten en acción disciplinaria o en proceso judicial. • Número/Proporción de civiles juzgados por cortes militares o cortes especiales. • Número promedio de casos asignados/ terminados por personas con funciones judiciales en los diferentes niveles de la justicia. • Distribución del gasto público en tribunales y sistema de procesamiento. • Salario promedio de personas con funciones judiciales como porcentaje de salarios mínimos reglamentados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de casos en que expiró el plazo temporal legal para que 1 persona arrestada reciba notificación del cargo del que se acusa y en una lengua que comprenda. • Proporción de personas atendidas por los tribunales que tasan los servicios recibidos como altamente asequible en su idioma (estudio de usuario de tribunales) • Proporción de personas acusadas de un delito que tienen acceso a facilidades adecuadas y abogados para su defensa. • Proporción de casos pendientes y duración promedio de juicios penales. • Proporción de casos en los que el tiempo entre el arresto y el juicio excedieron los plazos estatutarios u obligados. • Casos reportados de asesinatos, asaltos, amenazas y despido arbitrario de personas con funciones judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de fiscales y abogados de la defensa que trabajan en casos de niños/niñas/jóvenes con entrenamiento especializado en justicia juvenil. • Proporción de detenidos juveniles a los que se provee asistencia legal gratis dentro de 24 horas luego de que inicie la custodia. • Proporción de jóvenes en custodia que reciben educación / entrenamiento vocacional por maestros entrenados por las mismas horas que un estudiante de la misma edad en libertad. • Proporción de tribunales adaptados para el manejo de casos de niños/niñas/jóvenes • Proporción de jóvenes condenados sentenciados a prisión. • Proporción de jóvenes con acceso a servicios de rehabilitación luego de ser dejados en libertad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de condenas por delitos graves en los que la persona condenada recibió asistencia legal para considerar buscar revisión por una corte/tribunal superior • Proporción de casos que fueron apelados por los abogados defensores o fiscales • Proporción de casos en los que es restringido o excluido el derecho a apelar a asuntos específicos dispuestos por la Ley
De resultado	<ul style="list-style-type: none"> • Tasas de condenas para acusados indigentes que reciben representación legal en proporción con las tasas de condena para acusados con abogados de su elección. • Proporción de delitos (ej: violaciones, asaltos físicos) llevados ante autoridades judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de audiencias totales abiertas al público en general. • Proporción de casos sentenciados en que al menos se observó una irregularidad en la determinación de cargos previa a juicio por los tribunales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de condenas obtenidas en ausencia (total o parcial) • Casos reportados de presunción de culpa y pre-sentencia por una corte o autoridades oficiales (ej: declaraciones públicas adversas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de niños/niñas arrestados/detenidos por población de 100,000niños • Tasas de reincidencia en jóvenes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de condenas penales en las que la sentencia fue reducida o se desistió de una condena penal o se regresó para volver a juicio o dictar otra sentencia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tasas de condena por tipo de delitos adjudicados (violaciones, homicidios, asaltos físicos) y características de víctimas y perpetradores (ej: sexo, jóvenes) • Casos reportados de detención arbitraria en el período del informe • Casos reportados de errores judiciales y proporción de víctimas que recibieron una compensación en tiempo razonable 				
24.4.08	Todos los indicadores deben ser desagregados por bases prohibidas de discriminación como hojas de metas aplicables y reflejadas				

Anexo B

Indicadores estructurales del derecho al trabajo

Indicador 1

Nombre: Tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT relevantes al derecho al trabajo ratificados por el Estado

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras, Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional, Protección contra el trabajo forzado y el desempleo.

Resultados:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos. Art 23. Vigente desde 10/10/1948
2. Convenio sobre el trabajo forzoso 1930, Vigente desde 06/07 /1954
3. Convenio sobre los métodos de salarios mínimos 06/ 10/ 1954
4. Convenio sobre la protección del salario, 1949 vigente desde 29 /05 /1954
5. Convenio sobre el Desempleo. 05/06/1962- Convenio sobre seguridad de enfermedad –industrial- 05/ 05 /1962
6. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, vigente desde 28 /05 /1959
7. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, vigente desde 05 /02 /1962
8. Convenio sobre el servicio del empleo-29 /8 /1967
9. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, vigente desde 29/05/1967.
10. Convenio sobre la abolición de la sanciones penales de trabajadores indígenas, 03/ 10/1969
11. Convenio sobre el descanso semanal de oficinas y comercio. 03 /10 /1969
12. Convenio sobre el derecho de Asociación en la agricultura 10/06/1969
13. Convenio sobre vacaciones pagadas en la agricultura. 03 /10 /1969
14. Convenio sobre los contratos de trabajo –indígenas-03/ 12 /1969
15. Convenio sobre las plantaciones, 1958, vigente desde 03 /10 /1969
16. Convenio sobre el enrolamiento de los pescadores, 10 /03/ 1969
17. Convenio sobre la protección de las radiaciones, 09 /03/ 1970
18. Convenios sobre la revisión de los artículos finales, 19/ 03 /1969
19. Convenios sobre política social, 03 /10 /1969
20. Convenio sobre la protección de la maquinaria, 03/ 10 /1969
21. Convenio sobre la higiene, comercio y oficinas, 10/ 03 /1969
22. Convenio sobre la edad mínima en trabajos subterráneos, 10/ 03/ 1969
23. Convenio sobre el peso máximo, 10/ 03/ 1969
24. Convenio sobre la edad mínima de pescadores, 10/ 03 / 1969
25. Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 10 /03 /1969
26. Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 , vigente desde 02/12 /1970
27. Convenio sobre la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros (seguridad social), 1962, vigente desde 09 /03 /1970
28. Convenio sobre la edad mínima, 1973, vigente desde 02 /12 /1970
29. Convenio sobre la política del empleo, 1964, vigente desde 13 /11 /1972
30. Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, vigente desde 25 /10 /1974

31. Convenio sobre el servicio del empleo, 26 /08 /1975
32. Convenio sobre el venceno, 27/ 03 /1975
33. Convenio sobre el cáncer profesional, 1974, vigente desde 27 /03 /1975
34. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, vigente desde 26/08 /1975.
35. Convención internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, Arts 6,7,8,9. 03/01/1976
36. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", - Arts. 6,16. Vigente desde 21/10/1977.
37. Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, vigente desde 26 /10 /1977
38. Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, vigente desde 26 /10 /1977
39. Convenio sobre las prestaciones y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 05 /04/ 1978
40. Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, vigente desde 05 /04 /1978
41. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, vigente desde 05 /04/1978
42. Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, vigente desde 05 /04 /1978
43. Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967, vigente desde 05 /04 /1978
44. Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977, vigente desde 11 /07 /1978
45. Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969, vigente desde 05 /04/1978
46. Convenio sobre el personal de enfermería, 1977, vigente desde 11 /07 /1978
47. Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976, vigente desde 23 /11 /1979
48. Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979, vigente desde 20 /05 /1988
49. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, vigente desde 20 /05 /1988
50. Convenio sobre duración de trabajo y período de descansos en trabajos de carretera, 20/05 /1988
51. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 15 /05/ 1989
52. Convenio sobre el asbesto, 1986, vigente desde 11 /04 /1990
53. Convenio sobre la edad mínima, 19/ 09 /2000
54. Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos- . Art 24 y 25 Vigente desde 26/07/2002.
55. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias , ratificado por Ecuador el 2002 y vigente desde 01/07/2003

Trabajo de menores de edad

56. Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965, vigente desde 10 /03 /1969
57. Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 , vigente desde 18/07/1975.
58. Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946, vigente desde 26 /08 /1975
59. Convenio sobre la edad mínima, 1973, vigente desde 19 /09/2000

60. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, vigente desde 19/09 /2000.

Mujeres

61. Convenio sobre el Trabajo subterráneo de mujeres. 06 /10 /1954

62. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, vigente desde 11/03 /1957

63. Convenio sobre la protección de la maternidad 05/ 02 /1962

64. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, vigente desde 10/07 /1962

65. Convenio sobre la igualdad de trato y seguridad social, 09/ 03 /1970

66. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. CEDAW. 09/12/1981

67. Conferencia internacional sobre Población y desarrollo. Programa de Acción del Cairo. 13/09/1994

68. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Declaración de Acción de Beijing. 15/09/1995

Trabajo forzado y trata

69. Convenio para la represión de la trata de personas, la explotación y la prostitución ajena 14 /02/ 1979.

70. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional 20 /06 /2004

71. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 20 /06 /2004

72. Protocolo facultativo sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía 25/ 11 /2005.

Indicador 2

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho al trabajo en la Constitución.

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras, Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional, Protección contra el trabajo forzado y el desempleo.

Resultados:

Constitución vigente a partir del 20/10/2008

Cobertura: Nacional

Capítulo II de los derechos del Buen Vivir.

Sección Octava

-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Establece la garantía del Estado del respeto a las personas trabajadoras (...) mediante remuneraciones y retribuciones justas, condiciones saludables de trabajo y libertad para escoger y aceptar trabajo. **Art. 33**

- Establece como irrenunciable y universal el derecho a la seguridad social de todas las personas incluidas las personas que hacen trabajo no remunerado en el hogar, actividades de auto sustento en el campo, trabajo autónomo y para quienes estén desempleados. **Art 34**

-El derecho al trabajo remunerado y jubilación para las personas adultas mayores. **Art 37.**

- El Estado fomentará la incorporación de los jóvenes al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. **Art 39**

-Se garantiza que las mujeres embarazadas no sufrirán discriminación en el ámbito laboral. **Art 43.**

- Protección del Estado contra cualquier tipo de explotación laboral o económica a los niños, niñas y adolescentes, quedando prohibido el trabajo de menores de quince años. **Art. 46 N 2.**
- Igualdad de oportunidades para la incorporación laboral en entidades públicas y privadas de las personas con discapacidades **Art 47. N 5.**
- Derecho de los y las ecuatorianas a desempeñar empleos y funciones públicas con base en sus méritos, con criterios de equidad de género, igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y participación inter generacional. **Art 61 N 7.**
- El derecho a una vida digna que asegure (...) trabajo, empleo, descanso, ocio, seguridad social. **Art 66 N 2**
- Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación y el derecho de asociación, reunión y manifestación de forma libre y voluntaria. **Art 66 N 13.**
- Obligaciones ciudadanas: no ser ocioso y ejercer la profesión u oficio con ética. **Art 83 N 2 y 12.**

Indicador 3

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas internas para implementar el derecho al trabajo, incluidos reglamentos sobre igualdad de oportunidades que eliminan las discriminaciones y medidas especiales para grupos objetivo –mujeres, niños, indígenas, migrantes, discapacitados

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras, Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional, Protección contra el trabajo forzado y el desempleo.

Resultado:

Leyes orgánicas y especiales sobre el derecho al trabajo

- Codificación del Código del Trabajo 02/08/1997. Codificación del Código del Trabajo incluye cuota de 4% de trabajadores con discapacidad. 18/10/2005
- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 26/04/1978, reformada en el 2005 y derogada en el 2010 por la vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público.
- Ley Orgánica del Servicio Público. Vigente desde el 6 de octubre del 2010.
- Ley núm. 2006-48 Reformatoria al Código del Trabajo, 23/07/2006 Título III y luego del artículo sobre la Intermediación laboral y de la tercerización de servicios complementarios.
- Decreto núm. 1882 reglamento de aplicación de la Ley reformativa al Código de Trabajo sobre intermediación laboral y tercerización 2006-10-04
- Mandato Constituyente N 8. Prohíbe la tercerización, intermediación laboral y contratación laboral por horas. Vigente desde 6 /V/2008.
- Ley núm. 001 de fijación de sueldos y salarios mínimos vitales y elevación de sueldos y salarios. 05/10/1988
- Ley núm. 2001-55 de Seguridad Social vigente desde 30/11/2001

Leyes sobre asociación para el trabajo y la producción

- Ley reformativa al Código Civil. 30/08/2002. Decreto núm. 3054 por el que se expide el Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro.
- Código de la Producción, Comercio e Inversiones.
- Ley de Cooperativas, reformas del 09 /10 /2004
- Ley de Compañías, 05/ 10 /1999
- Ley de Comunas, 17 /03/ 2004

Ley sobre discapacidades 15/03/2001

- ART 4 L. c ,d, e- Capacitación , acceso al trabajo, reubicación laboral, becas de formación profesional.

Codificación de Ley del Anciano. 13/10/2006

- ART 4 L. d, actividades ocupacionales remuneradas.-

Ley de desarrollo agrario 16/01/1997

-ART-4,5,6,7,8 Capacitación y adiestramiento de pueblos montubios, afro ecuatorianos, indígenas y campesinos

-ART 9, crédito agrícola

-ART 26, formas legales de trabajo

-ART 27, prohibición de trabajo precario.

Codificación del Código de la Niñez y Adolescencia 03/01/2003

-ARTs Título V Capítulo I, Trabajo de niños, niñas y adolescentes; Capítulo II Trabajo en relación de dependencia, Capítulo III trabajo sin relación de dependencia, Capítulo IV medidas de protección

Ley de la Juventud 24/10/2001.

-ART 14 L. i Pasantías laborales en el sector público y privado.

-ART 15 Empleo juvenil y emprendimientos productivos.

Mujeres

Ley de amparo laboral 06 /02 /1997

-ART 42 N 34 Establece la obligatoriedad de porcentajes mínimos de mujeres trabajadoras. Código de trabajo.

-ART 35. Contratación de mujeres sin autorización de cónyuge.

-ART 42 N 13. Obligación de trato respetuoso- implica acoso sexual.

-ART 42 y 124. Obligación de contratar un porcentaje mínimo de mujeres trabajadoras.

-ART 154 y 172 Embarazo y protección laboral

-ART 155 Jornada especial de trabajo para mujeres en etapa de lactancia.

Indicador 5

Nombre: Plazo y cobertura de política nacional de empleo total y productivo

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras.

Resultado:

Plan Nacional del Buen vivir- 2009-2013.

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad.

Política 1.3: Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad.

F. Reducir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional que afectan a mujeres, grupos de atención prioritarios, pueblos y nacionalidades.

I. Generar mecanismos de apoyo financieros y no financieros que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital productivo, creando líneas especiales y oportunidades de financiamiento para mujeres del área urbana y rural, para medianas y pequeñas productoras, productores e iniciativas asociativas.

Metas:

Alcanzar el 40% en la tasa de ocupación plena de personas con discapacidad al 2013.

Reducir a la cuarta parte el porcentaje de niños-as que trabajan y no estudian.

Erradicar la mendicidad infantil al 2013.

Reducir la desigualdad económica al menos a niveles de 1995.

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo, digno en su diversidad de formas.

Política 6.1: Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas y velar por el cumplimiento de los derechos laborales

A. Promover el conocimiento y plena aplicación de los derechos laborales

B. Reformar la legislación laboral y fortalecer los mecanismos de control ...para eliminar el trabajo precario, la tercerización y asegurar relaciones laborales directas y bilaterales.

C. Aplicar medidas para garantizar la existencia, funcionamiento y articulación de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y resolver los conflictos laborales en condiciones justas.

D. Apoyar iniciativas de trabajo autónomo mejorando su infraestructura, organización y acceso al crédito.

E. Proveer prestaciones de seguridad social eficientes, transparentes, oportunas y de calidad para todas las personas trabajadoras.

F. Consolidar el régimen solidario de cesantía.

G. Generar norma y regulaciones para el trabajo autónomo.

Política 6.3 Fomentar y cualificar la asociatividad y crear nuevos empleos.

A. Apoyar las iniciativas asociativas productivas y de servicios mediante el crédito y otros mecanismos como compras y contratación pública.

Política 6.4 Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación para reducir la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario.

A. Revisar anualmente el salario básico establecido en la ley por sectores de la economía.

Política 6.5 Impulsar actividades económicas que conserven empleo, fomenten la generación de nuevas plazas y la disminución progresiva del subempleo y desempleo.

A. Impulsar iniciativas privadas que favorezcan incorporación de jóvenes.

B. Incentivos tributarios, fiscales y arancelarios

C. Promover iniciativas económicas de mediana y pequeña escala

D. Programas públicos de infraestructura de uso intensivo de mano de obra local

E. Bancos de información de empleo y colocaciones.

F. Apoyar el funcionamiento de empresas mediante administración directa de trabajadores.

Metas:

Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, comerciantes o agricultores al 2013.

Disminuir en un 27% el porcentaje de personas que reciben un salario menor al mínimo vital al 2013

Disminuir en 10 puntos el subempleo bruto nacional al 2013

Reducir el desempleo juvenil en un 24% al 2013.

Incrementar en un 25% la productividad media laboral en el sector industrial al 2013.

Programas gubernamentales:

Mi Primer Empleo es un sistema de pasantías pagadas en el sector público para jóvenes que inician su vida laboral. Con una meta anual aproximada de 1900 jóvenes en 80 instituciones públicas.

Indicador 6

Nombre: Fecha de entrada en vigor y cobertura de normas y procedimientos que garanticen condiciones laborales seguras y sanas, incluido el ambiente libre de acoso sexual y establecimiento de una entidad de seguimiento independiente.

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras.

Resultado:

Codificación del Código del Trabajo 16/12/2005

-ART 38 Riesgos del trabajo y sus consecuencias deben correr a cargo del empleador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

-ART 42 Obligaciones del empleador

N 2 Instalar lugar de trabajo siguiendo normas de seguridad, prevención e higiene;

N 3 Indemnizar a los trabajadores por accidentes y enfermedades de trabajo

N 4 Contar con comedores.

N 13 Tratar a los trabajadores con el debido respeto sin faltarles de palabra u obra

N14 Contar con un trabajador social cuando la empresa sobrepasa los 100 trabajadores.

-ART 138 trabajos prohibidos a menores de edad

-ART 139 límites máximos de carga para mujeres y menores de edad

-ART 141 examen médico de aptitud para menores de 21 años.

-ART 155 contar con guarderías y jornada de 6 horas para lactancia

-ART 157 y siguientes condiciones de trabajo para contratar menores de edad como aprendices.

-ART 347 y siguientes de los Riesgos del trabajo

-ART 365 y siguientes indemnizaciones en caso de accidentes.

-ART 404, 495 Comisiones calificadoras de riesgos

Capítulo V Prevención de riesgos, medidas de prevención e higiene.

-ART 410 y siguientes

-ART 413 prohibición de fumar.

-ART 428 Reglamento sobre prevención y riesgos de trabajo

-ART 430 y siguientes asistencia médica

-ART 434 obligación de los centros de trabajo de contar con un reglamento de higienes y seguridad.

-ART 539 Atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales como ente rector del sector del trabajo.

- ART 545 Atribuciones de las Insectorías de Trabajo

N 1 Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las regulaciones sobre seguridad, higiene y riesgos de trabajo

N 2 Cuidar del respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones patronales

N 3 Hacer visitas de inspección

N 4 Cerciorarse del cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias en los centros de trabajo

Ley Orgánica del Servicio Público. 6 /10/ 2010

ART 48 L. I) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados

ART 131.- De los organismos de gestión, control y regulación de las remuneraciones

a) El Ministerio de Relaciones Laborales;

b) El Ministerio de Finanzas;

c) La Contraloría General del Estado; y,

d) El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Código Penal 22/01/1971 y reformas 2010

-ART 511.1 Solicitar favores de naturaleza sexual, prevariándose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su

familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación

Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 6

Política 6.6 Promover condiciones y entornos de trabajo seguros, saludables, incluyentes, no discriminatorios y ambientalmente amigables.

A. Sancionar los actos de acoso y discriminación laboral por razón de sexo, edad, etnia, opción sexual, maternidad

B Promover ambientes laborables sanos y seguros

Indicador 7

Nombre: Máximo número de horas laborales por semana estipuladas en la ley

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras.

Resultado:

Codificación del Código del Trabajo 16/12/2005

-ART 47 La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta semanales. El tiempo máximo en subsuelo será de 6 horas.

-ART 48 La jornada especial las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo determinarán las industrias en las que no sea permitido el trabajo de jornada completa.

Los adolescentes solo podrán trabajar 6 horas 5 días a la semana

-ART 50 Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 en la semana.

-ART 155 Durante los nueve meses posteriores al parto, se dispone que la jornada de trabajo se reducirá de ocho a seis horas como máximo al día, horas de trabajo que se distribuirán, por regla general, de acuerdo a lo convenido por las partes, con lo cual se establece al derecho a la lactancia

Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP 6 /10/ 2010

-ART 25.- Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley podrán tener las siguientes modalidades:

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo; y,

b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso por el I Ministerio de Relaciones Laborales o la máxima autoridad de gobierno local. Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que su remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o servidores.

Código de la Niñez y Adolescencia. 03/01/2003

-ART 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.

Indicador 8

Nombre: Edad mínima de empleo por tipo de ocupación

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo; condiciones de trabajo justas y seguras.

Resultado:

Código de la niñez y adolescencia. 03/01/2003

ART 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país.

ART 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan las siguientes condiciones.

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva;
2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del adolescente;
3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente; y,
4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece el adolescente o su familia.

Codificación del Código del Trabajo 16/12/2005

ART 134, prohibición del trabajo a menores de 15 años, salvo las excepciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Indicador 9

Nombre: Duración de licencia de maternidad, paternidad y parental y derechos a licencias médicas y proporción de salarios pagados durante el período de la cobertura

Atributos: Acceso a trabajo decente y productivo, Condiciones de trabajo justas y seguras.

Resultado:

Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP 6 /10/ 2010

-ART 27.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos:

- c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo;
- d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más;
- e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente avalado por los centros de salud pública;

f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre;

g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente entregado;

Codificación del Código del Trabajo 16/12/2005

-ART 152 Prohíbe la actividad laboral del personal femenino dentro de las dos semanas anteriores al parto y diez semanas posteriores al mismo; para tales efectos, y para gozar de la protección de estabilidad a la que se refiere el inciso tercero del artículo 154 del Código del Trabajo, la trabajadora embarazada deberá comprobar su estado de gravidez mediante el certificado médico otorgado por un galeno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, a falta de éste, por cualquier otro facultativo.

ART 153 No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo de una mujer embarazada y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente durante el tiempo de las 12 semanas de permiso. Durante el permiso tiene derecho a percibir la remuneración completa conforme a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

-ART 154 En caso de que una mujer se ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia de una enfermedad derivada de su embarazo y parto, no podrá darse por terminado el contrato de trabajo pero no se pagará la remuneración a partir de las 12 semanas de permiso.

En el caso de desahucio o despido de una trabajadora en estado de embarazo, fuera de los casos en los que se solicite el correspondiente visto bueno al tenor del artículo 172 del Código del Trabajo, aquellos hechos (el despido o el desahucio) serán sancionados con una indemnización especial, adicional a las generales, equivalente a un año de remuneración.

-ART 155 Durante los nueve meses posteriores al parto, se dispone que la jornada de trabajo se reducirá de ocho a seis horas como máximo al día, horas de trabajo que se distribuirán, por regla general, de acuerdo a lo convenido por las partes, con lo cual se establece al derecho a la lactancia.

Ley de Seguridad Social 30 12 2001

ART 107 La afiliación y la aportación obligatoria al Seguro General de salud otorga derecho a las siguientes prestaciones:

c. Asistencia médica curativa y maternidad que incluye consulta profesional, exámenes, internación, entrega de fármacos y recuperación o rehabilitación.

ART 105.- CONTINGENCIA DE MATERNIDAD.- En caso de maternidad, la asegurada tendrá derecho a:

a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo;

b. Un subsidio monetario, durante el período de descanso por maternidad, en el caso de la mujer trabajadora; y,

c. La asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin perjuicio de la prestación de salud hasta los seis (6) años de edad.

Los tres meses de licencia aprobados por ley en el Ecuador implican que la remuneración o el salario está cubierto al ciento por ciento. El 25 por ciento lo paga el empleador y el 75 por ciento la Seguridad Social. Pasado ese tiempo solo paga el IESS pero menos.

ART. 106.- SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.- Será de cargo del empleador la prestación señalada en los artículos 42, numeral 19, y 153 del Código del Trabajo, cuando el trabajador no reune los requisitos mínimos señalados en esta Ley para causar derecho a la prestación del Seguro General de Salud Individual. El IESS concede a las aseguradas del Régimen General, las siguientes prestaciones:

a) Asistencia obstétrica necesaria que comprenderá: la prenatal, del parto y Familiar. Igualmente, será de cargo del empleador el pago del cincuenta por ciento (50%) del sueldo o salario del trabajador durante los tres (3) primeros días de enfermedad no profesional.

ART 107.- TIEMPO DE ESPERA Y CONSERVACION DE DERECHOS.- Se causará derecho a las prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la afiliada hayan cumplido:

a. Seis (6) impositivos mensuales ininterrumpidos, para contingencia de enfermedad;

b. Doce (12) impositivos mensuales ininterrumpidos, anteriores al parto, para contingencia de maternidad; y,

c. Seis (6) impositivos mensuales ininterrumpidos, para el subsidio monetario de enfermedad.

El afiliado o la afiliada que dejen de aportar, conservarán su derecho a las prestaciones de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores al cese de sus aportaciones.

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado y al puerperio;

Pagos

En el caso de aseguradas que hagan uso de su descanso pre y post-natal, el empleador remitirá al IESS los aportes correspondientes al sueldo o salario completo que percibían dichas aseguradas antes de este período.

Durante la licencia por maternidad, el empleador tendrá que cubrir la siguiente remuneración:

a) 25% del sueldo o salario que percibe; y,

b) 100% de las remuneraciones adicionales y beneficios sociales.

Si la mujer no hubiere cubierto el tiempo mínimo de aportaciones, el empleador deberá pagarle la remuneración completa.

a) Subsidio en dinero.- El IESS, entregará un subsidio en dinero por maternidad, durante doce semanas, equivalente al 75% del último sueldo o salario.

b) Reposo obligatorio.- El reposo pre y post-natal es obligatorio para el pago del subsidio.

Pago de aportes

a) El 9.35% de aporte personal al IESS, lo cubrirá la trabajadora; y,

b) El 11.35% lo cubrirá el empleador.

Estos aportes se pagarán mes a mes, como si la trabajadora no estuviera en período de licencia.

Indicador 10

Nombre: Plazo y cobertura de la política nacional para la educación vocacional y mejora de habilidades

Atributos: Capacitación, mejora de habilidades y desarrollo profesional

Resultado:

Plan Nacional de Buen Vivir.

Objetivo 6

Política 6.7 Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo.

A. Fortalecer la capacidad pública de formación y capacitación.

B. Estimular la formación en los centros de trabajo

C. Recuperar y fortalecer conocimientos ancestrales para la producción de bienes y servicios especialmente de mujeres.

D. Definir esquemas de formación y capacitación que incluyan la perspectiva de género, étnica e intercultural y que garanticen la inserción laboral.

E. Crear programas de capacitación para trabajadores autónomos y de iniciativas asociativas.

Meta

Aumentar en cuatro veces el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para su beneficio profesional hasta el 2013.

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional Plan 2010

Formación Profesional al sector Formal.

4.574 cursos, para formar y capacitar a 70.497 participantes, en los Centros Operativos y Coordinaciones a nivel nacional.

Modalidades

- jóvenes 2253 participantes

- adultos 1237 participantes

- técnicos 1914 participantes

- perfeccionamiento 565 participantes

- tecnólogos 565 participantes

- formación 5404 participantes

- capacitación 64528 participantes

Formación a grupos de atención prioritaria

El SECAP capacitará a través de sus Centros Operativos de Formación Profesional a nivel nacional a 266.100 participantes mediante la ejecución de 10.840 cursos y 2.816 seminarios para los sectores: Agrícola, Industrial, Comercial y de Servicios.

Indicador 13

Nombre: Plazo y cobertura de la política para la eliminación del trabajo forzado, trabajo infantil, trabajos de migrantes y trabajo doméstico.

Atributos: Protección contra el trabajo forzado y el desempleo

Resultado:

Políticas de erradicación del Trabajo Infantil

Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 1, política 1.3.

G. Generar condiciones económicas para los hogares en sus diferentes tipos a través de programas sociales específicos, erradicar el trabajo infantil, priorizando los hogares con jefatura femenina en áreas urbano marginales.

Objetivo 6

Política 6.2 Reconocimiento del trabajo autónomo, cuidado humano y familiar...

A. Cuantificar y visibilizar el aporte del trabajo de cuidado humano, de autoconsumo y autosustento.

B. Reconocer, retribuir y brindar protección social al cuidado reproductivo en los hogares.

Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas establecidas en el Plan Nacional del Buen vivir, se están ejecutando los siguientes programas:

El Ministerio de Relaciones Laborales mantiene en coordinación con el Ministerio de Inclusión económica y Social un programa de erradicación del trabajo infantil. Con una meta anual de retirar 500 niños y niñas del trabajo en las calles y en basurales y proveer de trabajo a sus tutores.

Este programa aplica las sanciones establecidas en el ART 95 Código de la Niñez y Adolescencia a quienes ocupen trabajo infantil:

- 1) Amonestación a los progenitores o las personas encargadas del cuidado de niños, niñas y adolescentes que se benefician directamente con su trabajo.
- 2) Multa de 50 a 300 dólares, si los infractores son los progenitores o responsable del cuidado del niño, niña o adolescente
- 3) Multa de 200 a 1000 dólares si es empleador o cualquier persona que se beneficie del trabajo de niños, niñas y adolescentes
- 4) Clausura del establecimiento donde el niño, niña o adolescente trabaja.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha trabajado hace tres años en la campaña "Da dignidad por un Ecuador sin mendicidad", programa que busca erradicar la mendicidad y el abuso infantil. Sensibilización ciudadana y puntos de recepción donaciones "Puntos Dignidad", trabajo en las comunidades de origen de la mendicidad. Este programa se activa durante el período navideño y a lo largo del año.

Políticas de erradicación del trabajo forzado y la explotación.

ART 66, N 29 de la Constitución, señala que el Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de este fenómeno, y de protección y reinserción social de víctimas de trata y otras formas de violación de la libertad. Se garantizará la no re victimización de las víctimas de trata, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas y la protección de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.

ART 416 El Estado tomará las medidas necesarias para proteger y tutelar los derechos de las víctimas extranjeras de trata, aunque éstas se encuentren en un estatus migratorio irregular.

En el año 2006 se aprueba y promulga el "Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores.

El plan contempla los ejes: prevención, investigación sanción y protección, reparación y restitución de derechos. Coordinado por el Ministerio del Interior agrupa a 13 instituciones públicas vinculadas con el tema.

Políticas de inclusión de personas migrantes

No se identificaron políticas de inclusión laboral de inmigrantes residentes en Ecuador, ni campañas o iniciativas respecto de los derechos y garantías de esta población. Se identificaron únicamente políticas de acogida o de fomento del retorno de ecuatorianos que residen en el exterior.

Plan Nacional del Buen Vivir

Política 6.8 Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva de la población ecuatoriana que retorna al Ecuador y de los trabajadores en movilidad.

- A. Incentivar la inversión productiva de las remesas y ahorro de las personas migrantes.
- B. Identificar las potencialidades productivas en las localidades de origen y apoyar mediante el crédito y la asistencia técnica.
- C. Bolsas de empleo para reinserción laboral.

La institución encargada de dar cumplimiento a las políticas relacionadas con el tema es La Secretaría Nacional del Migrante- SENAMI. La SENAMI en el marco del Plan Retorno que tiene por objeto facilitar condiciones para que la población ecuatoriana que reside en el extranjero y que decide regresar al país, pueda reincorporarse a la vida social y productiva en su comunidad de origen, desde el año 2005 mantiene un Fondo Concursable denominado "El Cucayo" que entrega un capital y brinda asistencia técnica para hacer efectivos emprendimientos productivos.

La Banca del Migrante es otro programa que ofrece servicios bancarios a ecuatorianos en el exterior y que incluye: crédito productivo “Mi Proyecto”; “Mi negocio”; Mi Inversión” y “Mi Casa”

Trabajo doméstico digno, vigente desde 03- 2010

El Ministerio de Relaciones Laborales ejecuta la Campaña de “Trabajo Doméstico Digno”, que consiste en difundir información a las y los ciudadanos respecto a derechos y obligaciones laborales del trabajo doméstico. Se pusieron en funcionamiento 148 puntos móviles ubicados en barrios populares, entidades públicas, centros comerciales, parques y lugares estratégicos de afluencia masiva. Las ciudades con las que se dio inicio a esta Campaña fueron Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.

La segunda etapa de la Campaña dio inicio el 21 de abril de 2010, en esta etapa se cubrirán, en aproximadamente un mes, todas las provincias tomando en cuenta los principales cantones

La campaña incluye:

Concientización e Información a través de 25 vehículos y personal que han absuelto 1.000 consultas diarias con respecto a los derechos laborales de las empleadas domésticas.

Prevención mediante 230 puntos móviles a nivel nacional.

Control para la verificación puerta a puerta del cumplimiento de las disposiciones caso contrario el Ministerio de Relaciones Laborales impone las multas y sanciones pertinentes.